

TOMO VI

Apogeo y Crisis de la Argentina Contemporánea. Un siglo de lucha democrática (1912-1997)

Capítulo 1

INTRODUCCION

Las revoluciones, involuciones y dictaduras de los siglos XIX y XX fueron para las interpretaciones social-darwinistas el producto de la lucha por la subsistencia entre diferentes sistemas de gobierno, donde los más fuertes lograban sobrevivir.¹ A fines de siglo, Leandro Alem, notoriamente impactado por esta filosofía de fin de siglo, cuestionó --en su célebre discurso contra la federalización forzosa impuesta a Buenos Aires (1880)-- las tesis nacionalistas propias de la mitología romántica, de Juan Carlos Gómez y Bartolomé Mitre.² Más luego, Ramos Mexía (1887) se hizo eco de las tesis de Alem, y puso en tela de juicio también las posiciones de Gómez y de Mitre, al negar la vigencia del mito de una nación pre-existente y al proclamar el origen "contractualista" (anti-genealógico) de la nación argentina.³ Otros diez años después, Joaquín V. González (1897),⁴ y Estrada (1901-02) refutaron tanto a Alem como a Ramos Mexía, al sostener la doctrina de los poderes constitucionales implícitos,⁵ y afirmar que "...la forma política adoptada por todos los pueblos de la nación, ratificada y prometida en sus pactos y estatutos, fue republicana en su esencia y en sus propósitos".⁶ En cuanto a las diferencias entre Rivarola (1905), influido por un evolucionismo idealista y la probable lectura de Ostrogorski (1901, 1964), y Matienzo (1910), discípulo de la teoría de las generaciones, estas desembocaron en una acerva polémica acerca de los vicios y desajustes del sistema Republicano vigente a fines del siglo pasado, coincidiendo en atribuirlos a la existencia de una oligarquía, reminiscencia de la monarquía y de la nobleza propias del Antiguo Régimen Colonial, y a la consiguiente precariedad y vulnerabilidad de una sociedad donde prevalecía la ausencia de una clase media.⁷ Mientras que para Rivarola (1905, 1908),⁸ la culpa de dicha ausencia se hallaba en fracturas pre-modernas, como la inercia de las estructuras del federalismo,⁹ para Matienzo (1910), se encontraba en fracturas modernas como la decadencia de las virtudes republicanas y la violación o desajuste de las estructuras constitucionales.¹⁰

Más aún, para un postrer Matienzo (1928), el conflicto en Argentina se complicaba por cuanto, debido al interregno forzoso que la Constitución imponía, los Presidentes cesantes se convertían luego en el núcleo de la disidencia política.¹¹ Para el revisionismo Nacionalista, los violentos cambios políticos que derrotaron a la Confederación Argentina en Caseros (1852) y en Pavón (1862), al Autonomismo porteño en el 80, y al Radicalismo en el 30, fueron meros golpes de estado, derivados de la intervención Británica. Para el paradigma Marxista,¹² el fracaso del proyecto liberal-republicano (de Rivadavia, Alberdi y Sarmiento), y del mito o ritual democrático y anti-oligárquico del Radicalismo, patentizado en los reiterados y exitosos golpes de estado ocurridos en el siglo veinte,¹³ fueron el resultado de haber tratado de reproducir mecánicamente las experiencias políticas Europea y Yanqui en un país carente de una burguesía industrial.¹⁴ Sin embargo, para Ramos (1970), la categoría de oligarquía nacional se debía reservar sólo para las élites centrales del gobierno nacional, luego de haberse dispersado el roquismo (1904 en adelante), en que las oligarquías provinciales "...se fundirán

para siempre en una sola y misma clase".¹⁵ Y en cuanto a los marcos filosóficos y míticos, así como la república independiente con Moreno y Rivadavia se habían puesto bajo el paraguas de la Ilustración y el Enciclopedismo e indirectamente de los mitos griegos, y Alberdi y Sarmiento bajo el amparo del Positivismo, el Justicialismo de Perón se puso bajo el paraguas del Fascismo Italiano y el Decisionismo Schmitiano e indirectamente de los mitos romanos y en forma directa bajo el amparo de mitos autóctonos que pretendían hacer descender al cabecita negra del gaucho pero no ciertamente de los mitos indígenas quechuas, aymaras, guaraníes o araucanos (Miro Quesada, 1993; y Astrada, 1948, 1964).

Asimismo, de entre las filas del funcionalismo y el conductivismo, surgió la denominada Nueva Ciencia Política, cuyo representante más notorio (Burnham, 1965) sostuvo que la Edad de Oro de la política se remontaba al siglo XIX, particularmente al período posterior a la Guerra Civil Norteamericana que se extiende entre 1866 y 1890. Para esa época --pero refiriéndose al siglo pasado transcurrido en Argentina-- tanto Noble (1960) como Grondona (1967), aunque no afiliados al funcionalismo, descubrieron que con anterioridad a la federalización de Buenos Aires y a la llamada Conquista del Desierto (1880), existió un tipo de estado embrionariamente oligárquico donde las virtudes cívicas o republicanas --las mismas que abundaban en la primera ola de Huntington (1991)-- aún no se hallaban corrompidas.¹⁶ Más precisamente, en la discusión acerca de la fractura política acontecida en 1880, Botana (1977) concluyó, fundado en diversos autores,¹⁷ que el orden conservador consistió en maximizar el poder oligárquico y minimizar el conflicto interregional.¹⁸ Y en la discusión acerca de la oligarquía argentina, Botana (1977) confesó que los dos supuestos para configurar la corrupción de las virtudes republicanas,¹⁹ por él admitidos, no alcanzaban a explicar la dimensión política de dicho fenómeno.²⁰

Finalmente, Higley, Burton y Field (1990) sostuvieron que dichas inestabilidades o desajustes políticos y consiguientes fracturas institucionales se originaban en la frecuente desunión y/o divergencia entre las élites. Y Lachmann (1990) sostuvo la hipótesis que lo que determina la formación de nuevas clases sociales como la burguesía y nuevos modos de producción como el capitalismo son las contradicciones que se dieron en llamar conflictos intra-élites o contradicciones secundarias, y no lo que tradicionalmente se dio en llamar contradicciones principales o fundamentales, o lucha de clases. Pero para Etzioni-Halevy (1993), las teorías de los conflictos intra-elites --al enfatizar la centralidad con que contaban los pactos o acuerdos entre las elites, para consolidar las democracias liberales-- han llevado a subestimar la noción de la necesidad de la autonomía de las elites.²¹ Por el contrario, para Therborn (1977), Tarrow (1994), y Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992), autores post-estructuralistas que reintrodujeron el análisis de clase, las democracias pueden ser consolidadas en economías capitalistas sólo si en el ejercicio del poder, es decir en sus filas, es incorporada la clase obrera.²²

Por último, en la base del conflicto político organizado fue detectada la combinación de líneas de fractura o clivaje de origen pre-moderno o genético (geográfico, corporativo, religioso y estamental) y moderno (ideológicas, políticas, económicas y sociales), formuladas por Rokkan (1970), Panebianco (1982, 1988) y von Beyme (1995). Asimismo, el modelo de Ross (1985, 1995), engendrado en la antropología política, formuló la tesis acerca del grado de conflictividad de una sociedad como función inversa de la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados) y función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación económica, política y social (teoría de la complejidad política). Finalmente, en el análisis de la democracia liberal (cuya identidad no es la misma que la de la democracia republicana), de las democracias participativas,

populares y desarrollistas, y de los regímenes burocrático-autoritarios son aplicables las teorías de Ullmann (1985) acerca de las concepciones descendentes o ascendentes del gobierno y del derecho; y las de Panebianco (1988), respecto a la gestación de partidos y facciones políticas, por difusión territorial y/o por penetración geográfica; desde el poder o desde la oposición; de legitimación externa o interna; de dominación burocrática o carismática; y de hegemonía parlamentaria o partidaria.

Las nuevas hipótesis y explicaciones nos mueven entonces a practicar indagaciones históricas relativas a los pactos políticos y las Convenciones Constituyentes. La pregunta a formularse residiría en la producción de pactos o acuerdos políticos habría licuado las tradiciones pre-modernas, impedido las violaciones del régimen representativo, republicano y federal de gobierno, acabado con la corrupción y las reminiscencias del Antiguo Régimen Colonial, amortiguado o eliminado las incertidumbres provocadas por la incorporación de facciones o partidos políticos marginados, e impedido los golpes militares, las insurrecciones, las guerras, las sanciones colectivas (premios o castigos corporativos, clánicos, o regionales) y los crímenes y suicidios políticos (Alem, Lugones y De la Torre). También sería interesante investigar si las estrategias conciliatorias o acuerdistas ensayadas por los Presidentes Urquiza (1852, 1859/60), Mitre (1862) y Avellaneda (1877) y si el levantamiento de la abstención por parte de Mitre en 1891, de Yrigoyen en 1910, de Alvear en 1935, y de Perón en 1958 y 1973 son comparables entre sí.

Esta batería de interrogantes nos han llevado a formular reflexiones más precisas aún. Las fracturas, desajustes y crisis políticas acontecidas a escala nacional habrían sido el reflejo de conflictos ideológicos, de innovaciones tecnológicas, de las fases expansivas y depresivas de las ondas largas de Kondratieff, de las luchas de clases, y del desajuste entre la velocidad de modernización de los subsistemas tecno-económicos y la inercia o atraso relativo de los subsistemas socio-institucionales (pedagógicos, urbanísticos y políticos). Los desajustes o desviaciones respecto del régimen representativo, republicano y federal de gobierno no habrían guardado la misma intensidad en las dos décadas de combate republicano ocurridas entre 1890 y 1912, que en el siglo de lucha democrático-liberal desplegada entre la Ley Sáenz Peña (1912) y el fin de siglo. Los sucesivos golpes de estado (1930, 1943, 1955, 1962, 1966, 1976) habrían contribuido a frenar la circulación de las elites pero no así la movilidad social.

La Revolución del 90 habría sido la unificación de la resistencia a los agravios sufridos por las provincias, y la revancha de la Revolución del 80. Con el objetivo de neutralizar a las clases medias, representadas por el Radicalismo, y su eventual alianza con las clases subalternas, la oligarquía Argentina se habría visto constreñida a conceder reformas tales como las sucesivas leyes electorales y la llamada Ley Sáenz Peña (1912), y reformas educativas, como la denominada Ley Avellaneda (1885), la Ley Láinez (1905) y la Reforma Universitaria (1918). Las rebeliones Lencinistas y Cantonistas de Mendoza y San Juan habrían tenido una relación causa-efecto con el golpe de 1930. Los sentimientos paranoicos de elites aterrorizadas frente a la movilidad social ascendente de miembros de las clases medias y subalternas habría sido el puntapié inicial de los inicios de decadencia política, económica y cultural de las elites dominantes. Y el temor a un desplazamiento social por parte de una elite intelectual habría obedecido entonces a los efectos combinados de la Ley Sáenz Peña, la Reforma Universitaria y la movilización y organización de la clase obrera.

Este estudio se extiende a lo largo de cinco (5) capítulos. En el capítulo 1 encaramos la metodología y el plan de la obra. En el capítulo 2, analizamos el pasaje de la Argentina Aristocrático-Republicana a la Argentina Democrático-Liberal, en especial la reforma electoral (1912-1930) y las reminiscencias del Antiguo Régimen, a la luz de las teorías de Panebianco (1988), acerca de la

gestación de partidos y facciones políticas, por difusión territorial y/o por penetración geográfica; desde el poder o desde la oposición; de legitimación externa o interna; de dominación burocrática o carismática; y de hegemonía parlamentaria o partidaria. En el capítulo 3, analizamos la crisis del estado liberal o la Restauración Oligárquica en Argentina (1930-1942), a la luz de las teorías de W. Schiff (1972), Atkins y Thompson (1972) y García Molina (1990, 1994 y 1995) acerca de la germanización del ejército, anterior a la instauración del fascismo en Europa;²³ y la tesis de la abrupta separación de las instituciones civiles respecto de las militares, de R. Schiff (1995) y García (1995);²⁴ y los cinco factores detallados por Potter (1981).

En el capítulo 4, estudiamos el proceso Bonapartista en Argentina, específicamente el peronismo y la génesis de una ruptura política (1943-1955), a la luz de las tesis de Rokkan (1970), Panebianco (1982, 1988) y von Beyme (1995), quienes hallaron en la base del conflicto político organizado la combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas (genéticas: geográficas, religiosas, y estamentales), modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales), y post-modernas (éticas y estéticas);²⁵ y a la luz de las tesis de Ross (1995) acerca de las crisis o conflictividades políticas de una sociedad como función inversa de la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados) y función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación económica, política y social (teoría de la complejidad política).

Y en el capítulo 5, estudiamos las rupturas políticas crónicas o golpes de estado en la Argentina pos-Peronista (1962-1996), a la luz de las tesis de los procesos de legitimación, deslegitimación y relegitimación de los partidos anti-sistema, de Sartori (1992); el pasaje del régimen de partidos burocráticos de masas a los partidos profesional-electorales, de Kirchheimer (1980); las líneas de fracturas pre-modernas (etno-lingüísticas, estamentales, religiosas y geográficas), modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales) y post-modernas (éticas y estéticas) en la base del conflicto político organizado, de Rokkan (1970), Panebianco (1982, 1988) y von Beyme (1995); la relación entre el grado de institucionalización de los partidos y el grado de cohesión, estabilidad y organización de los grupos que actúan en su interior, de Panebianco (1988); la gestación de partidos y facciones políticas desde el poder o desde la oposición; de legitimación externa o interna; y de hegemonía parlamentaria o partidaria, de Panebianco, 1988; y Sartori, 1992; la incapacidad de controlar el conflicto en función de la multiplicidad de los espacios no institucionales vigentes, de Smulovitz (1988); y la intensidad de la competitividad política en función inversa a la multiplicidad de espacios institucionales, de Dahl (1966).²⁶

NOTAS:

¹ Ingenieros, Bunge, Ayarragaray, Alvarez, etc.

² Botana, 1993, 246-248. Para el célebre pensador y publicista Oriental Juan Carlos Gómez, existían en la década del 60 "...dos fracciones de la Patria, que se pretenden naciones. La una se llama República Oriental, la otra República Argentina. Yo sostengo que ninguna de las dos es nación" (Juan Carlos Gómez, "Se quedará en Buenos Aires", *El Inválido Argentino* (Buenos Aires), 4-VIII-1867, año I, n.32, p.251, col.5, y p.252, col.1-2; y *El Siglo* (Montevideo), 7-VIII-1867, 2a. época, año IV, n.864, p.1, col. 5-6; citados ambos diarios en Vidaurreta, 1962-67, 211.

³ Chiaramonte, 1993, 89. Para la crítica de Ernesto Quesada a los diagnósticos médicos de

Ramos Mexía sobre la personalidad de Rosas, ver Zimmermann, 1993, 25.

⁴ en el capítulo correspondiente a las Intervenciones del Gobierno Federal en el régimen interno de las provincias.

⁵ Aja Espil, 1987, 40.

⁶ González, 1897, 1935, p.622. Por un lado, las tesis de Alem y de Ramos Mexía fueron adoptadas por Matienzo (1910) y posteriormente por González Calderón (1927). Por otro lado, las tesis de Joaquín V. González y de Estrada, sobre los poderes constitucionales implícitos, fueron retomadas por Rivarola (1905, 1908); Padilla (1921); Horacio Oyhanarte, en los fundamentos del decreto presidencial (1916) de intervención a la provincia de Buenos Aires (Botana, 1993, 251); Lisandro de la Torre en el debate a propósito del delito de sedición en que habría incurrido el Gobernador de Santa Fé al vetar la nueva Constitución provincial (Congreso, Diputados, 22-IX-1922, Reunión No.37, 487-529; y 18-I-1923, Reunión No.55, 748-791); y más luego por Lebensohn (1956) (Convención Constituyente, Diario de Sesiones, 8-III-1949, 7a. Reunión, pp.328-338), Sánchez Viamonte (1957b) y Repetto (1960). Horacio Oyhanarte debe haber participado en la redacción de dicho decreto por cuanto fué el miembro informante de la Comisión de Negocios Constitucionales que firmó y defendió en la Cámara de Diputados el extenso dictamen del proyecto de intervención a la Provincia de Buenos Aires. Las refutaciones de Sánchez Viamonte a la posición de Ramos Mexía acerca de la doctrina de Mariano Moreno, son opiniones que el historiador Julio V. González (el hijo de Joaquín V. González) "recoge, acepta y comparte" (Sánchez Viamonte, 1957b, 369-372, nota 1).

⁷ ver Ancarola, 1975. Mientras "...el republicanismo abreva en la antigüedad clásica, el liberalismo es una doctrina típicamente moderna" (Naishtat, 2002, 234).

⁸ hijo de Genoveses Garibaldinos. Fué partidario de Roque Sáenz Peña y Director de la Revista Argentina de Ciencia Política.

⁹ El que Rivarola sostuviera la necesidad de cambiar el régimen federal por el unitario fué el argumento esgrimido por el Presidente Victorino de la Plaza para rechazar su candidatura a que ocupara un sitial en la Corte Suprema, propuesta por el Dr. Saavedra Lamas (Ancarola, 1975, 105, nota 1). Rivarola había participado en 1893 como Secretario en la Intervención del Dr. Leopoldo Basavilvaso a la provincia de Corrientes conjuntamente con el Dr. Norberto Piñero. Esta experiencia es la que lo hizo decir quince años después que "...he visto destinarse los dineros que los gobiernos de provincia recibían para la instrucción pública al pago de los batallones de guardia provincial" (Rivarola, 1908, 374). Sus ideas unitarias se vieron reflejadas en el pensamiento del partido Socialista, en especial en Bravo (1912); y en la de algunos políticos Radicales, como fué el caso del Dr. Carlos J. Rodríguez (1934, 1946, 1963), Diputado Nacional por Córdoba y Ministro de Agricultura de la primer presidencia de Yrigoyen, quien en la Cámara de Diputados de la Nación polemizó con Leopoldo Melo acerca del derecho del Poder Legislativo a interpelar los Ministros del Poder Ejecutivo; discutió con Matienzo sus tesis sobre la tradición Inglesa en la legislación constitucional Argentina (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1919, t.III, p.138-142); tuvo una relevante participación en los debates parlamentarios sobre la legislación laboral donde por vez primera cita al economista alemán Adolfo Wagner (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, Reunión No.37, 18-IX-1928, pp.425); y sobre la Ley del Petróleo en 1928; y en la intervención federal de Carlos Borzani a la provincia de Mendoza en 1928 (debo esta última información al profundo conocimiento de hombres y

hechos históricos generosamente brindado por el periodista Enrique Pugliese). Según Ancarola (1975), Rivarola se volcó, a partir de 1916, de las ideas positivistas a las Kantianas, por influjo de Ortega y Gasset, de quien había sido su anfitrión durante su estadía en Buenos Aires (Ancarola, 1975, 21, nota 13).

¹⁰ Buchbinder, 1993, 91-92; y Palti, 1994, 116-117. Matienzo sostenía que la tendencia universal era hacia la descentralización, categoría a la cual asociaba la noción de federalismo.

¹¹ "...Así, Urquiza sirvió de bandera contra Derqui, Mitre contra Sarmiento, y Roca contra Juárez" (Matienzo, 1928, 293); y podríamos agregar del arsenal histórico posterior: Yrigoyen contra Alvear; y Perón contra Frondizi e Illia.

¹² Gallo, 1933; y Peña, 1970.

¹³ ver García Molina y Mayo, 1985; y Norden, 1996.

¹⁴ Peña, 1970, 103; y Rocchi, 1996.

¹⁵ Ramos, 1970, 151.

¹⁶ Noble, 1960, 197; y Grondona, 1967, 73-76. El libro de Julio Noble, un dirigente político de filiación Demócrata Progresista, que frecuentara a Lisandro de la Torre, fué concebido en las cárceles del peronismo más como un compromiso cívico que político, y es el más completo y fascinante que se haya escrito sobre la segunda mitad del siglo pasado. En sus palabras liminares, Noble reconoce como origen de su obra tanto las constantes referencias de Lisandro a la vida de Leandro Alem, como a una suerte de mandato o deber de memoria que De la Torre le hiciera poco antes de su infausta muerte. Sin embargo, una prolija lectura de la misma, revela en su trama la presencia de una tercera vida, que precede en el tiempo a las de los dos protagonistas principales de la misma, la de Bartolomé Mitre. Es extraño lo poco citado que es este libro. Hasta el momento he registrado que ha sido mencionado sólo por las obras de Cornblit (1975), Hardoy (1993) y profusamente por Romero Carranza, et. al. (1992). Por último, es de lamentar la ausencia en el libro de Noble de las notas de pie de página que identifiquen el origen de las numerosas citas de época que contiene, procedentes en su mayoría de fuentes primarias editas (Colecciones Documentales de los Taboada, Marcos Paz, Archivo Mitre, periódicos, Diarios de Sesiones, etc). Por ello, sería recomendable encarar una nueva edición de la misma que incluya dichas notas. Por el contrario, la obra de Grondona (un texto muy poco citado), es una apología crítica de la dictadura militar conocida como Revolución Argentina, vigente a partir de 1966.

¹⁷ McGann (1960), Halperín (1969), Grondona (1967), Cárcano (1963) y Floria (1969).

¹⁸ Gibson, 1996, 47.

¹⁹ "...a) que hay oligarquía cuando un pequeño número de actores se apropia de los resortes fundamentales del poder; y b) que ese grupo está localizado en una posición privilegiada en la escala de la estratificación social" (Botana, 1977, 74).

²⁰ Botana, 1977, 74. Botana reconoce que la fecha de 1880 por él elegida para iniciar su obra es

arbitraria, y que bien pudo haberse desplegado sobre una continuidad más prolongada (Botana, 1977, 10). A propósito de un libro posterior de Botana, titulado *La Tradición Republicana*, ver los comentarios críticos de Halperín Donghi (1986).

²¹ Etzioni-Halevy, 1994, 478.

²² Munck, 1992-1993, 236; y Lipset, 1994, 3.

²³ El proceso de germanización se había acentuado cuando el Centenario de la Revolución de Mayo (1910), con la misión militar presidida por el célebre Mariscal Alemán Colman Von der Goltz, formado en la escuela de Clausewitz (García Molina, 1990, 1994, 1995). Von der Goltz llegó a publicar diversas notas en *La Nación*, en mayo de 1910, habiendo quedado marcado su influjo en diversos artículos publicados posteriormente en la *Revista del Círculo Militar*, y en los discursos del entonces Ministro de Guerra Gral. Rafael Aguirre. No volvió a la Argentina por cuanto cayó herido de muerte en el frente Turco durante la Primera Guerra Mundial. Su hijo fué Instructor del Colegio Militar (Debo estas interesantes referencias a la generosidad de Fernando García Molina y a la lectura de sus artículos citados).

²⁴ Para medir esta separación, Schiff sugiere el estudio de cuatro indicadores: 1) la composición social del cuerpo de oficiales, 2) el proceso político de toma de decisiones, 3) el método de reclutamiento, y 4) el estilo militar (Schiff, 1995, 7-8).

²⁵ Bartolini, 1993, 220-224; y von Beyme, 1995, 161-162.

²⁶ Smulovitz, 1988, I, 11.

TOMO VI

Capítulo 2

El pasaje de la Argentina Aristocrático-Republicana a la Argentina Democrático-Liberal. La reforma electoral argentina (1912-1930) y las reminiscencias del Antiguo Régimen,

Las revoluciones, involuciones y dictaduras de los siglos XIX y XX fueron para las interpretaciones social-darwinistas el producto de la lucha por la subsistencia entre diferentes sistemas de gobierno, donde los más fuertes lograban sobrevivir.¹ A fines de siglo, Leandro Alem, notoriamente impactado por esta filosofía de fin de siglo, cuestionó --en su célebre discurso contra la federalización forzosa impuesta a Buenos Aires (1880)-- las tesis nacionalistas de Juan Carlos Gómez y Bartolomé Mitre.² Más luego, Ramos Mexía (1887) se hizo eco de las tesis de Alem, y puso en tela de juicio también las posiciones de Gómez y de Mitre, al negar el mito de una nación pre-existente y al proclamar el origen "contractualista" (anti-genealógico) de la nación argentina.³ Otros diez años después, Joaquín V. González (1897),⁴ y Estrada (1901-02) refutaron tanto a Alem como a Ramos Mexía, al sostener la doctrina de los poderes constitucionales implícitos,⁵ y afirmar que "...la forma política adoptada por todos los pueblos de la nación, ratificada y prometida en sus pactos y estatutos, fué republicana en su esencia y en sus propósitos".⁶

En cuanto a las diferencias entre Rivarola (1905), influido por un evolucionismo idealista y la probable lectura de Ostrogorski (1901, 1964), y Matienzo (1910), discípulo de la teoría de las generaciones, estas desembocaron en una acerva polémica acerca de los vicios del sistema Republicano vigente a fines del siglo pasado, coincidiendo en atribuirlos a la existencia de una oligarquía, reminiscencia de la monarquía propia del Antiguo Régimen Colonial, y a la consiguiente ausencia de una clase media.⁷ Mientras que para Rivarola (1905, 1908),⁸ la culpa de dicha ausencia se hallaba en fracturas pre-modernas, como la inercia de las estructuras del federalismo,⁹ para Matienzo (1910), se encontraba en fracturas modernas como la decadencia de las virtudes republicanas y la violación de las estructuras constitucionales.¹⁰

Más aún, para un postrer Matienzo (1928), el conflicto en Argentina se complicaba por cuanto, debido al interregno forzoso que la Constitución imponía, los Presidentes cesantes se convertían luego en el núcleo de la disidencia política.¹¹ Para el revisionismo Nacionalista, los violentos cambios políticos que derrotaron a la Confederación Argentina en Caseros y en Pavón, al Autonomismo porteño en el 80, y al Radicalismo en el 30, fueron meros golpes de estado, derivados de la intervención Británica. Y para los paradigmas Marxistas, el fracaso del mito del crisol de razas (de Alberdi y Sarmiento), que había sustituido al mito criollo elaborado durante la Revolución de Independencia, así como el posterior fracaso del proyecto republicano (Mitre) y finalmente del mito democrático y anti-

oligárquico del Radicalismo, patentizado en los reiterados y exitosos golpes de estado ocurridos en el siglo veinte,¹² los cuales habrían sido el resultado de haber tratado de reproducir las experiencias políticas Europeas y Yanqui en un país carente de una burguesía industrial.¹³

De entre las filas del funcionalismo y el conductivismo, surgió la denominada Nueva ciencia política, cuyo representante más notorio (Burnham, 1965) sostuvo que la Edad de Oro de la política se remontaba al siglo XIX, particularmente al período posterior a la Guerra Civil Norteamericana (1866-90). Para esa época --pero refiriéndose al siglo pasado transcurrido en Argentina-- tanto Noble (1960) como Grondona (1967), aunque no afiliados al funcionalismo, descubrieron que con anterioridad a la federalización de Buenos Aires y a la llamada Conquista del Desierto (1880), existió un tipo de estado embrionariamente oligárquico donde las virtudes cívicas o republicanas --las mismas que abundaban en la primera ola de Huntington (1991)-- aún no se hallaban corrompidas.¹⁴ Más precisamente, en la discusión acerca de la ruptura política acontecida en 1880, Botana (1977) concluyó, fundado en diversos autores,¹⁵ que el orden conservador consistió en maximizar el poder oligárquico y minimizar el conflicto interregional.¹⁶ Y en la discusión acerca de la oligarquía argentina, Botana (1977) confesó que los dos supuestos para configurar la corrupción de las virtudes republicanas,¹⁷ por él admitidos, no alcanzaban a explicar la dimensión política de dicho fenómeno.¹⁸

Finalmente, Higley, Burton y Field (1990) sostuvieron que dichas inestabilidades políticas y consiguientes fracturas institucionales se originaban en la frecuente desunión y/o divergencia entre las élites. Y Lachmann (1990) sostuvo la hipótesis que lo que determina la formación de nuevas clases sociales como la burguesía y nuevos modos de producción como el capitalismo son las contradicciones que se dieron en llamar conflictos intra-élites o contradicciones secundarias, y no lo que tradicionalmente se dió en llamar contradicciones principales o fundamentales, o lucha de clases. Pero para Etzioni-Halevy (1993), las teorías de los conflictos intra-elites --al enfatizar la centralidad con que contaban los pactos o acuerdos entre las elites, para consolidar las democracias-- han llevado a subestimar la noción de la necesidad de la autonomía de las elites.¹⁹ Por el contrario, para Therborn (1977), Tarrow (1994), y Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992), autores post-estructuralistas que reintrodujeron el análisis de clase, las democracias pueden ser consolidadas en economías capitalistas sólo si en el ejercicio del poder, es decir en sus filas, es incorporada la clase obrera.²⁰ Por último, en la base del conflicto político organizado fué detectada la combinación de líneas de fractura o clivaje de origen pre-moderno o genético (geográfico, corporativo, religioso y estamental) y moderno (ideológicas, políticas, económicas y sociales), formuladas por Rokkan (1970), Panebianco (1982, 1988) y von Beyme (1995). Asimismo, el modelo de Ross (1985, 1995), engendrado en la antropología política, formuló la tesis acerca del grado de conflictividad de una sociedad como función inversa de la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados) y función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación económica, política y social (teoría de la complejidad política). Finalmente, en el análisis de la democracia, son aplicables las teorías de Panebianco (1988), de la gestación de partidos y facciones políticas, por difusión territorial y/o por penetración geográfica; desde el poder o desde la oposición; de legitimación externa o interna; de dominación burocrática o carismática; y de hegemonía parlamentaria o partidaria.

Estas numerosas hipótesis, metodologías y modelos de análisis estratégicos nos han sugerido una extensa serie de reflexiones, íntimamente vinculadas entre sí, no siempre susceptibles de ser aclaradas, pero en cuya pertinencia habrá de residir gran parte del éxito de este trabajo: Los discursos republicanos de comienzos de siglo, congelados en la lucha contra la fractura genética del nepotismo, habrían sido absorbidos por la lucha contra las fracturas modernas centradas en las problemáticas del electoralismo y el caudillismo clientelista. Las fracturas modernas centradas en las estructuras o

campos pedagógicos (Colegios, Universidades), financieros (Bancos), administrativos (Justicia), militares (Ejército), comunicacionales (Prensa, Correo, Telégrafos, Ferrocarriles, Radio-Televisión) y políticos (partidos políticos), habrían estado combinadas con otras fracturas de naturaleza pre-moderna. Las olas y contraolas o involuciones políticas habrían sido el reflejo de los ciclos ideológicos, de las fases expansivas y depresivas de las ondas largas de Kondratieff, de las luchas de clases, o del desajuste entre la velocidad de modernización de los subsistemas tecno-económicos y la inercia o atraso relativo de los subsistemas socio-institucionales. La recepción de nuevos análisis teóricos y nuevas estrategias discursivas era seguida por la continua adaptación de innovaciones institucionales y científico-tecnológicas y por permanentes crisis, desajustes o rupturas políticas que dieron nacimiento a sucesivas olas progresivas e involuciones o contraolas regresivas. Y la recepción de la tecnología del motor a explosión al transporte terrestre (industria automotriz y mecanización agrícola) habría impactado en la producción agropecuaria, en la formación del mercado interno y en la electrificación y posterior sustitución de la red ferroviaria.

Para elucidar algunas de estas reflexiones y calibrar la inercia de los legados y tradiciones pre-modernos, pre-republicanos, dictatoriales y totalitarios, así como la combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas (geográficas, nepóticas, religiosas y estamentales) y modernas (ideológicas, económicas, políticas y sociales), que se instalaron a comienzos del siglo XX (1912) en la base de los conflictos políticos que dieron lugar a una nueva ola progresiva,²¹ como reacción contra la ola política que correspondió al segundo estadio globalizador de Mignolo (1995), en que gobernó la llamada Generación del 80 (1880-1912), es preciso investigar una serie de hipótesis. El interés de las elites dominantes por neutralizar la fractura o clivaje de clase y la creciente movilización de la clase obrera,²² habría impedido la formación de una alianza política entre los representantes de las clases medias y los de una burguesía agraria local con los representantes del proletariado,²³ y evitado la creciente politización de los cuadros de oficiales de las Fuerzas Armadas.²⁴ La crisis de representación política se habría manifestado en el pasaje de la política de elites, notables o parlamentarios a la política burocrática de masas (que repercutió en la transición del clientelismo oligárquico o notabiliar al clientelismo burocrático o partidista),²⁵ en el proceso de relegitimación del Radicalismo --semejante al experimentado por el Mitrismo en oportunidad del Acuerdo Roca-Mitre-- con el paralelo pasaje de partido anti-sistema a un partido pro-sistema, en la progresión moral manifestada en el proceso de ciudadanización de la sociedad política manifestada en el respeto por las libertades públicas y la voluntad popular y ciudadana,²⁶ y por la moral republicana,²⁷ y en la manipulación de las virtudes caballerescas.²⁸ El avance de las clases medias habría encontrado un correlato en la profesionalización o burocratización de la ciencia.²⁹ Las Revoluciones Mexicana (1910) y Rusa (1917) habrían dejado su impronta.³⁰

La crisis del universo simbólico, se habría expresado en una nueva estética dictada por: 1) la reacción contra el Modernismo y la segunda revolución industrial, 2) el cosmopolitismo de izquierda, y 3) la vitalidad del movimiento estudiantil (engendrado en la rebelión conocida como la Reforma Universitaria del 18).³¹ El impacto de las sucesivas guerras (Hispano-Americana, Ruso-Japonesa, de los Boers y de los Balcanes) y el auge del germanismo, habría gradualmente desplazado las políticas de neutralidad en los conflictos de las grandes potencias.³² La nueva democracia Uruguaya y la doctrina de "la influencia moral", instaurada por Batlle y Ordóñez, habría también dejado su impronta.³³ La veloz recepción de innovaciones tecnológicas (motor a explosión, energía eléctrica, ondas hertzianas, cinematografía, cemento armado, etc.) aplicadas a las instituciones del transporte (terrestre, marítimo y aéreo);³⁴ la electrificación de las vías férreas, la industria de la construcción, la mecanización agrícola;³⁵ y las comunicaciones (radio-telefonía);³⁶ habría incidido profundamente en los subsistemas económicos (estructuras productivas y distributivas).

Y la rauda recepción de reformas institucionales de corte demográfico (masiva inmigración Europea),³⁷ pedagógico (profundas reformas educativas y universitarias);³⁸ legislativo (régimen de propiedad horizontal); jurídico (leyes de justicia de paz y de arrendamientos);³⁹ y sociológico (pasaje de la familia extensa a la familia nuclear y altas tasas de movilidad social y de miscegenación o crisol de razas),⁴⁰ habría a su vez incidido en los subsistemas urbanísticos (estructuras sanitarias y edilicias);⁴¹ agrarios, sociales (estructuras carcelarias y psiquiátricas);⁴² familiares (familia extensa); judiciales (estructuras forenses);⁴³ y políticos (estructuras electorales).⁴⁴

Las falencias incurridas en esta etapa, por la coalición conservadora dominante, Pucciarelli y Tortti (1995) y Gibson (1996) las atribuyen a las fisuras internas manifestadas en sus propias fuerzas.⁴⁵ En efecto, la negativa del Gobernador de Buenos Aires Marcelino Ugarte,⁴⁶ a partir de la implementación de la Ley Sáenz Peña (1912), a cerrar filas alrededor de la nueva coalición conservadora protagonizada por el Partido Demócrata Progresista constituyó para Gibson la primer crisis interna del bloque conservador.⁴⁷

Si bien el Radicalismo abdicó de la conspiración revolucionaria,⁴⁸ y levantó la abstención electoral --quitándole al Socialismo y a la Democracia Progresista la oportunidad de iniciar un "juego imposible"--⁴⁹ y el gobierno del Presidente Sáenz Peña no impuso proscripción política alguna, la crisis o incertidumbre política, que la incorporación del Radicalismo al ruedo político significaba, quedó sin resolver. Esta falta de resolución obedeció a que Sáenz Peña se opuso a intervenir o democratizar las provincias, tal como se lo había reclamado Yrigoyen en el encuentro celebrado en 1910, y este último no aceptó su coparticipación en el gobierno de Sáenz Peña.⁵⁰ Este encuentro, a diferencia del Acuerdo Roca-Mitre (1891), fue eficiente pues fue funcional para fortalecer la asimetría real que detentaba Yrigoyen, para amortiguar la incertidumbre que provocaba la marginación del Radicalismo y para afianzar la institucionalidad cuestionada.⁵¹ Pero por haberse acordado la inalterabilidad de los cuadros de oficiales de las Fuerzas Armadas, con la no reincorporación de los dados de baja en ocasión de la Revolución de 1905, se ha concluido que la transición de la democracia republicana a la democracia liberal, operada entre 1912 y 1916, fue por transacción o negociada. El eje de los discursos republicanos, a partir de la Ley Sáenz Peña, hicieron hincapié en el mito de la democratización y en la problemática de las reminiscencias del Antiguo Régimen Colonial y de la política y el clientelismo notabiliar decimonónico (nepotismo).⁵²

La fractura política en el seno de la oligarquía. Los casos de Santa Fé y Catamarca.

En general, los autores reconocen en los orígenes del conflicto político de comienzos del siglo XX la existencia de una fractura moderna de naturaleza electoral en la política de la oligarquía o clase dominante. Santa Fé, provincia perteneciente al subconjunto político del Litoral, si bien se destacaba por ser la provincia donde su sociedad se encontraba fracturada por la incidencia de un factor pre-moderno: la geografía (entre el norte Santafesino y el sur Rosarino); se hallaba sin embargo inmersa en los más intensos vínculos cruzados de todo el país, debido a la intensa inmigración europea.⁵³ Asimismo, la sociedad Santafesina se hallaba fracturada también por la incidencia de un factor moderno: la política y el sufragio secreto y obligatorio;⁵⁴ donde algunas facciones se hallaban movilizadas por la característica compartida de la afiliación demócrata progresista enfrentadas a otras movilizadas por la característica compartida del radicalismo; y ambas facciones sumidas en una realidad donde esta conflictividad interna se hallaba también correlacionada con una conflictividad política externa, disputada a nivel nacional entre la coalición Conservadora y el Comité Nacional del Radicalismo.

Confirmando la naturaleza cruzada de los vínculos sociales santafesinos, cuando en 1914 asumió el primer gobernador radical Dr. Manuel Menchaca, el Diputado Socialista Juan B. Justo había alcanzado a decir que con él se había probado que podía gobernarse una provincia argentina "...sin apellidos patricios, que son generalmente los apellidos oligárquicos".⁵⁵ A propósito de esta reflexión sociológica de Justo,⁵⁶ el propio Pinedo (1946) indicaba que los radicales eran por lo general un poco menos patricios u oligárquicos. Aunque es notorio que figuraban entre los radicales hombres de lo más encumbrado del viejo patriciado

"...lo común era que los miembros de las antiguas familias que eran o habían sido dominantes, no estuvieran allí, y que en cambio acompañaran a ese partido muchos de los exponentes de la nueva riqueza, descendientes de inmigrados, y numerosos elementos, a veces valiosos, de la creciente clase media".⁵⁷

Pero también es cierto, que con la Ley Sáenz Peña y la masiva participación de los hijos de inmigrantes, se introdujo en las viejas familias del patriciado la desunión y la fragmentación política, y en los partidos Conservadores y Radicales la inestabilidad, la división, e incluso la desintegración.⁵⁸ La provincia de Santa Fé era en este sentido paradigmática. En el Departamento de General López, era la familia Carreras poseedora de grandes extensiones de campo al extremo de proyectar su riqueza al campo político como viejos caudillos de la Liga del Sur, devenida en Democracia Progresista. Para el Diputado Nacional Radical Rogelio Araya, en oportunidad de debatirse el crimen del hermano del Jefe Político Demócrata Progresista Teodoro Silva Chávez,⁵⁹ la familia de los Carreras "...no dejaron arbitrariedad por cometer...El cepo, los castigos por cualquier causa, el aprisionamiento de los ciudadanos, fueron su arma y argumento de dominación".⁶⁰ Pero cuando el gobierno Radical ofreció la jefatura política del Departamento, a José Antonio Montes Carreras, distanciado de su familia por un juicio civil por rendición de cuentas, su primo hermano el Dr. Felipe Carreras le escribió una carta, "...en la cual le decía que hacía mal en combatir la familia, que ese Departamento era de ellos, la obra de su abuelo José Carreras, y que aceptando el nombramiento se alzaba contra la familia".⁶¹ En resumidas cuentas,

"...un sobrino, que demanda por rendición de cuentas y por una suma valiosa a su tío; cartas cambiadas con su tío porque este cree ver, en la entrada de su sobrino al gobierno de ese Departamento, una acción de guerra contra su familia, y finalmente el encono que les epara por las incidencias relatadas".⁶²

El Jefe Político Montes, que luego devino Diputado Nacional, en el concepto de los Carreras, "...no podía ir a otra cosa sino a quebrar su influencia política; y por eso se le exigió su retiro del departamento, y como no lo consiguiera, se emprendió una campaña violenta y mezquina en su contra".⁶³

También en Salta, se introdujo la desunión y la fragmentación política en las propias filas de la oligarquía. En 1912, el Gobernador Avelino Figueroa Ovejero,⁶⁴ perteneciente a una dinastía familiar que llamaban satíricamente "de los Borbones", se vio obligado contra su voluntad a transmitir el poder a su sobrino segundo Robustiano Patrón Costas, (a) "Gata Polveada",⁶⁵ correspondiente a otra rama dinástica llamada con sarcástica ironía "de los Orleans". No obstante las desavenencias internas, el Diputado Nacional Radical por Tucumán, Vicente C. Gallo, sostenía que en Salta existía "...un gobierno netamente oligárquico", pues desde hacía muchos años el Poder Ejecutivo se transmitía "...dentro de una misma familia, de tío a sobrino, de sobrino a primo, de primo a tío, en una sucesión

ininterrumpida".⁶⁶ Refiriéndose al candidato a Gobernador de la Provincia por la Unión Popular Robustiano Patrón Costas --paradójicamente jefe del movimiento que en 1906 derrocó a los Ovejero y dió por resultado el envío del Comisionado Federal Dr. Luis B. Molina-- el Diputado Nacional Rogelio Araya descubría que era

"...pariente del actual gobernador [Figueroa Ovejero]..., ejercido las funciones de ministro durante todo el período gubernativo, y ha renunciado el cargo en vísperas mismas de las elecciones, después de haber preparado todos los elementos de la campaña que hoy dirige en persona como candidato".⁶⁷

Seis años después, en 1918, Patrón Costas y su futuro consuegro Abrahám Cornejo Peralta, (a) "Lagunilla",⁶⁸ encaramados en el poder provincial, reproducían los mismos vicios que el Diputado Nacional Rogelio Araya había denunciado en 1912.⁶⁹ Para Francisco Linares y Juan Peñalva, Presidente y Vice-Presidente del Comité Radical de Salta el gobierno de Abrahám Cornejo era

"...sólo una prolongación de los anteriores, cuyo origen y composición adolecen de los mismos vicios: son gobiernos de familia, verdaderas factorías comerciales, en las cuales sólo tienen participación los parientes y socios como medio de garantizar la impunidad de todos los abusos e irregularidades consumados en beneficio de la comandita".⁷⁰

El criterio con que ejercitaban la función pública era el mismo

"...que aplican a la administración del patrimonio particular porque la posesión indefinida del poder, compartido fraternalmente y explotado comercialmente, ha determinado un extravío del criterio llevándolos a la confusión lamentable del patrimonio del estado con el privado".⁷¹

En cuanto a Tucumán, donde habían triunfado los Radicales Rojos, en oposición a los Azules, los vicios estructurales del régimen se concentraban más severamente en los distritos rurales.⁷² Según el Diputado Radical Ernesto M. del Moral, Tafí del Valle estaba constituida por grandes estancias, las que tienen

"...como los feudos de la historia, su casa señorial; no se diferencian de las casas señoriales de la época medieval sino solamente en que les falta la torre y el puente levadizo. Un ejército de criados cuida del servicio del señor y su familia, y una jauría de perros denuncia la llegada de algún extraño".⁷³ Los habitantes de esa región eran para el Diputado Nacional José Luis Aráoz, "...hombres de la raza aborígen primitiva que están aislados por las altas montañas de Tafí, como por una muralla china, del resto de la provincia".⁷⁴ Esos hombres estaban, para Aráoz,

"...acostumbrados a la verdadera esclavitud; son la gleba de la época feudal, no tienen siquiera el derecho de elegir a la que ha de ser su mujer. Los patrones son quienes hacen la elección de la mujer o del marido; son los que intervienen en las cuestiones domésticas y decretan la separación de los cónyuges".⁷⁵

Más grave aún, para el Diputado del Moral los señores feudales "...ni siquiera han renunciado al sabroso derecho de pernada de la edad media".⁷⁶ Según Aráoz, esos infelices

"...no saben siquiera que son argentinos...no conocen el derecho del voto, ignoran los beneficios que de ese derecho pueden obtener. Van al comicio a realizar un acto mecánico, con un pedazo

de papel doblado que el patrón les entrega y que ellos han de cuidarse muy bien de cambiar en el momento de la elección. Allí la presión no puede hacerse sentir por parte del gobierno; allí la presión se hace sentir por los señores feudales, porque pesa sobre esos individuos verdadera esclavitud".⁷⁷

En cuanto a Santiago del Estero, los vicios del nepotismo propias del Régimen oligárquico notabiliar se perpetuaban sin complejo alguno. En la elección del Diputado Nacional José D. Santillán,⁷⁸ celebrada en 1912, formaban parte de la Junta escrutadora nacional el Juez Federal Dr. Benjamín Palacio,⁷⁹ y el Dr. David C. García, Procurador Fiscal, tío carnal el primero y cuñado el segundo del candidato Dr. Santillán. Esos dos magistrados se inhibieron fundados en ese parentesco y la Junta, "...integrada por el abogado de la matrícula Dr. José Gregorio Abalos y por el Defensor de Pobres, Ausentes e Incapaces, Dr. Bravo Zamora, resolvió rechazar la inhibición".⁸⁰ Cuatro años más tarde, el Diputado Nacional Santiago E. Corvalán,⁸¹ denunciaba en tren de venganza que el Juez Federal José Ignacio Cáceres era hermano del Presidente del Partido Radical Dr. Manuel C. Cáceres, y que el Fiscal Federal Pedro Morcillo Suárez ha sido un actuante dentro del mismo partido.⁸² Y para el Diputado Nacional del Radicalismo Octavio Cordero,⁸³ el entonces Gobernador José A. Cabanillas,⁸⁴

"...no es un peligro de nepotismo, porque felizmente no tiene familia, descendente ni colateral conocida en todo el país, vive en Santiago del Estero con el señor Senador Francisco Castañeda Vega [antiguamente Radical] y con el Tesorero de la provincia".⁸⁵

En cuanto a Catamarca, los vicios del sistema se extendieron rápidamente del Partido Nacional al Radical. Según el Diputado Nacional Francisco R. Galíndez,⁸⁶ la disidencia Radical, al igual que en Tucumán y Córdoba, se acentuaba cada día más, "...hasta el punto de formarse dos grupos perfectamente bien diseñados; el partido radical reaccionario y el partido radical orgánico. Cada uno tiene su leader, su órgano de propaganda y su orientación en el orden nacional".⁸⁷ El partido radical reaccionario tenía por "...leader al Señor Agustín Madueño, a El Radical por órgano de propaganda y respondía a la política del señor Presidente de la República".⁸⁸ Por otro lado, el partido Radical orgánico tenía por leader al ex-Juez Federal Dr. Ernesto Acuña,⁸⁹ por órgano periodístico a El Día, diario oficialista de la intervención, y por orientación en el orden nacional la política seguida por el Vicepresidente de la República [Dr. Pelagio Luna].⁹⁰ Los dos partidos "...extremaron su prédica, se dijeron tantas cosas, se arrojaron tanto lodo, que realmente parecían dos partidos diametralmente opuestos e irreconciliables; parecía haberse reproducido el caso de Abel y de Caín".⁹¹

Pero el caso más grave para el oficialismo Radical Catamarqueño, a juicio del Diputado Galíndez, era el del Poder Judicial, pues estaba agobiado bajo el peso de un nepotismo feroz. En Catamarca, el Poder Judicial se había organizado nombrando miembro del Superior Tribunal al doctor Julio P. Acuña y Juez de Paz de la Capital al Señor Francisco Acuña, "...parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, pues son hermanos"; y se había nombrado a la vez miembro del Superior Tribunal al Dr. Julio Herrera,⁹² tío del Sr. Mauricio Herrera, juez de primera instancia y socios en el momento de ser nombrados".⁹³ Era preciso tener en cuenta, para Galíndez, que el Juez de Primera Instancia

"...integra la Corte por recusación o excusación de un miembro de ella, y esto es muy común en los Tribunales de Catamarca, y puede haber llegado el caso de que formara Tribunal el tío y el sobrino, ex socios, y fallaran un asunto en apelación de un ex cliente. La sola suposición del caso es jurídicamente monstruosa".⁹⁴

La fractura iglesia-estado. Los casos de Córdoba, Cuyo y Santa Fé.

Respecto de Córdoba, la base de su estructura política estaba dada por una fractura pre-moderna, la provocada por la afiliación religiosa, cuya conflictividad aumentaba con el creciente y complejo progreso económico y social, que se extendían a las instituciones culturales y a las profesiones liberales. El gobierno de Ramón J. Cárcano,⁹⁵ fué llevado al poder en 1913 por el partido que se denominaba Concentración Popular, formado por el que fué Partido Nacional, y un grupo llamado Independiente "...para luego desdoblarse y dar lugar a la existencia de dos nuevas agrupaciones: el partido Demócrata Progresista y el Partido Independiente, o Garzonista".⁹⁶ Este último partido estaba liderado por el ex-Gobernador y Diputado Nacional Félix T. Garzón.⁹⁷ Pero apenas instalado el Radicalismo en el gobierno de la provincia los conflictos arreciaron, extendiéndose al seno de la Universidad, un verdadero yacimiento arqueológico, que reflejaba incluso rivalidades forenses entre estudios jurídicos.⁹⁸ El Diputado Nacional Antonio Santamarina denunciaba que se daban en Córdoba casos de persecución y venganza.⁹⁹ Y el Diputado Socialista Juan B. Justo, al denunciar en la Cámara de Diputados de la Nación la infiltración, en la Universidad de Córdoba, de un catolicismo ortodoxo e intransigente proveyó como prueba la cátedra de Derecho Público Eclesiástico, expresando que su titular el ex-Senador Provincial Nicolás Garzón Maceda,¹⁰⁰ era "...uno de los seis Garzones que he encontrado en aquella Universidad".¹⁰¹ Más luego, el Radicalismo de Córdoba, al igual que el de Tucumán, entró en un fuerte proceso de fragmentación, provocado por un desequilibrio entre los llamados incentivos colectivos y los selectivos.¹⁰² Pero en Córdoba, a diferencia de Tucumán, triunfó un ala denominada azul, que controlaba el poder. El ala opuesta, titulada roja,¹⁰³ entró a practicar alianzas electorales con el partido denominado Demócrata Progresista.¹⁰⁴ Estas alianzas llevaban un procedimiento desigual, variando según el tipo de distrito electoral. Los Diputados Nacionales del Radicalismo Ireneo de Anquín y Guillermo Rojas expresaban al respecto que

"...donde los radicales rojos con minoría en un circuito determinado, confundieron sus votos con los demócratas progresistas para asegurar la victoria a ese partido, y a la inversa donde los demócratas tenían minoría se la daban a los rojos para corresponderles".¹⁰⁵

Como consecuencia de estas divisiones y excesos, en 1919 triunfó el Partido Demócrata con su candidato a Gobernador Rafael Núñez.¹⁰⁶ Cosa curiosa, exclamaba en 1919 el Diputado Nacional y futuro Vice-Presidente Enrique Martínez,¹⁰⁷ "...hoy gobiernan en Córdoba los desalojados del gobierno en 1908 [partidarios de Roca] por la intervención federal [Eliseo Cantón, enviada por el Presidente Figueroa Alcorta], juntamente con los que con tanto empeño trabajaron para que fuera enviada".¹⁰⁸ Así, en 1919, se tenía de Gobernador al Dr. Rafael Núñez, desalojado por aquella intervención, y de Vicegobernador al Dr. Gerónimo del Barco,¹⁰⁹ su entusiasta defensor. También se tenía de Senador Nacional al Dr. Julio Roca (h),

"...que defendió al gobierno de Ortiz y Herrera, por ser consecuente este con la política creada en el país por su señor padre, íntimamente unido para formar la Concentración anti-radical con el Dr. Benito Villanueva, quien con su voto como Presidente del Senado, desempatará la votación de la intervención que iba a barrer con ese gobierno".¹¹⁰

En cuanto a Cuyo, el gobierno fué también acusado de reproducir los mismos vicios del régimen que se venía de combatir. En San Juan, se sufrían los embates del crimen político y las consiguientes intervenciones federales.¹¹¹ La represión suscitada por el crimen del Gobernador Amable Jones, con las prisiones de los hermanos Cantoni, alimentaron el carisma de Federico

Cantoni.¹¹² En Mendoza, la situación política se había enrarecido con la gobernación de José Néstor Lencinas.¹¹³ Este gobernador, dotado de un fuerte carisma personal, amén de las acusaciones de violar las garantías constitucionales y de acudir a mecanismos populistas, fué acusado de innumerables delitos y corruptelas incluido el nepotismo. Cuando el Diputado Nacional por Santa Fé Rogelio Araya, al tratar en 1919 la Intervención al Gobierno Mendocino de Lencinas, se refirió despectivamente a la oligarquía de los Civit y Villanueva, el Diputado Julio César Raffo de la Reta,¹¹⁴ perteneciente al partido Demócrata de Mendoza, le aclaraba que "...aquellas viejas oligarquías desaparecieron al embate de la nueva ley electoral, y los que más las combatieron son los que hoy forman el partido autonomista [incluido el Senador Nacional Juarista Benito Villanueva González]".¹¹⁵ Y cuando a este respecto Araya se preguntaba donde están y que se hicieron las oligarquías, Raffo de la Reta le replicaba "...han cambiado de lugar: los oligarcas y la oligarquía están hoy bajo la bandera de la causa [Radical]".¹¹⁶ Para probar ello Raffo de la Reta pasaba una ligera revista de los casos más relevantes, repartidos entre aquellos que fueron parientes de miembros del régimen, como de aquellos que formaron parte de la elite periodística y política (poderes legislativo, ejecutivo, y judicial).¹¹⁷

También San Luis sufrió las consecuencias de la estructura política de Antiguo Régimen y las consiguientes intervenciones federales. Como consecuencia de la convocatoria electoral hecha por el Interventor Julio Botet (del gobierno del Dr. Estéban P. Adaro),¹¹⁸ resultó consagrado en 1909 el gobernador Adolfo Rodríguez Saa, (a) "El Pampa".¹¹⁹ Dicha consagración fué ilegal, por cuanto "...la Constitución de la Provincia determina el quórum de 28 electores para elegir Gobernador, es decir dos tercios, del total (40), para que funcionara el Colegio Electoral en forma legal".¹²⁰ Pero como los partidos combinados, en esa época, no pudieron reunir quórum, no obstante la reunión de tres grupos, el señor Interventor "...habilitó y consagró gobernador con sólo 22 electores, con violación flagrante de la Constitución y de las leyes".¹²¹ Al Gobernador Rodríguez Saa, le había sucedido en el mando el Dr. Juan Daract Barbeito.¹²²

En realidad, ambos gobiernos, tanto el de Rodríguez Saa como el de Daract, fueron conocidos en San Luis como de los Motineros, pues a juzgar por el Diputado Nacional Modesto Quiroga, fueron la "...calamidad más desastrosa, porque en sus desaciertos aventajaron a la oligarquía de los Mendoza", siendo asimismo el origen de los gobiernos que dicho Diputado denunciara en 1928.¹²³ En los sueltos de La Mañana (San Luis), de los meses de Mayo y Junio de 1914,¹²⁴ se hablaba del gobierno de San Luis calificándolo como un verdadero gobierno de familia donde se hallan empleados hasta 19 o 20 parientes cercanos al Gobernador cuyos sueldos sin contar el de los maestros ascienden a la suma de 110.000 pesos anuales del presupuesto provincial.¹²⁵ Dichos artículos dicen "...que aquel gobierno está de parabienes, que nadie puede fiscalizar sus actos y que todo se encuentra en familia, la reserva es obligatoria y conveniente, el pueblo es simple convidado de piedra que, para felicidad de la comandita es necesario esquilmar lo más que se pueda".¹²⁶

Tan grave era la falta de garantías durante el gobierno de Daract que la propia Unión Popular, que contaba con la influencia nacional, debió acudir en marzo de 1916 a la insurrección. El propio gobierno nacional, "...debió emigrar de la provincia de San Luis porque no había garantías para las fuerzas de línea allí destacadas, cuyos oficiales no le rendían pleito homenaje y no querían servir los intereses políticos de aquella situación".¹²⁷ Cuando el Diputado Nacional Miguel B. Pastor,¹²⁸ subió al andén, conjuntamente con el Senador Nacional Víctor S. Guiñazú,¹²⁹ para despedir a las tropas

"...se abalanzaron contra él revólver en mano: el Intendente Municipal, un Diputado Nacional, el Secretario General de los Ministerios, el Secretario General de Policía, el Tesorero General

de la Provincia, el Contador General, el Jefe del Registro Civil, y nueve Comisarios de Policía para impedirle hablar".¹³⁰

En su pedido de intervención federal, la Unión Popular refirió la naturaleza de la campaña electoral del oficialismo provincial, conocido bajo el apelativo de Pringuilismo,¹³¹ donde los candidatos a Diputados eran "...acompañados del Presidente del Consejo de Educación, del Jefe de la Oficina central del Registro Civil, del Inspector General de la misma oficina, del Director General de Rentas, del Tesorero General de la provincia, del Secretario privado del Gobernador".¹³² Y el Jefe de Policía, que no presentó ni prófórula su renuncia, y que iba en la gira electoral, "...acompañado del Secretario del Superior Tribunal, empleados de policía, por un secretario del Juzgado Civil, y el Intendente Municipal".¹³³

Por todas estas razones, el Radicalismo de San Luis no concurrió en 1916 con sus electores en la designación del Presidente de la Nación. A juzgar por el Diputado Teófilo I. Gatica, el Partido Radical no concurrió

"...porque se encontraba frente a dos oficialismos, el local y el nacional, representado el uno por el gobierno del Régimen y el otro por la Unión Popular, con grande influencia y arraigo en el Poder Ejecutivo Nacional. El poder electoral de la Unión Popular derivaba de las Escuelas Láinez y de los empleados de la Defensa Agrícola, fundadas aquellas con profusión en la provincia".¹³⁴

En todas partes surgían las escuelas Láinez y

"...cada una de ellas era un verdadero comité político, manejado por el Director, que se entendía con el visitador, cuya principal misión era tutelar el bagaje electoral bajo el control y dirección del Inspector de Escuelas, cuya principal preocupación fué robustecer a su partido".¹³⁵

La Unión Popular también imperaba en las Escuelas Normales nacionales

"...donde para ingresar en primer año se requieren vinculaciones e influencias políticas ante el Director y ante los hombres de ese partido, mientras que los estudiantes cuyos padres pertenecen al partido radical o a otros partidos, no tienen acceso a las aulas, viéndose así privados del derecho de recibir la enseñanza y de la posibilidad de mejorar de fortuna con la obtención del título de maestros".¹³⁶

Una vez arribado el Radicalismo al poder en 1916, el Diputado Nacional Demócrata Alberto Arancibia Rodríguez,¹³⁷ autor de la teoría de la retroactividad electoral,¹³⁸ denunciaba que la familia del Gobernador Carlos Alric,¹³⁹

"...con 20 parientes ubicados en los mejores puestos de la administración insume del modesto presupuesto de la provincia la suma de 73.000 pesos anuales y la familia del Ministro de Gobierno la suma de 43.000 pesos".¹⁴⁰

También denunciaba que debido al ausentismo del Gobernador las resoluciones administrativas han estado refrendadas por su cuñado el Oficial Mayor de los Ministerios Miguel Otero, y por su sobrino el Contador de la Provincia.¹⁴¹ Sin embargo, el Diputado Nacional Gatica sostenía que el gobierno Radical había heredado una de las situaciones más corruptas del Régimen derrotado en los comicios de

1916, con "...un verdadero nepotismo perfectamente caracterizado y mucho más grave y acentuado que el que existe ahora".¹⁴²

En cuanto a Santa Fé, su Constitución, promulgada en 1921, fué vetada por el Gobernador Enrique Mosca en 1922.¹⁴³ Su veto obedeció a un pedido del Poder Ejecutivo Nacional, quien a su vez se había hecho eco de los reclamos de la Curia Eclesiástica, indignada por las cláusulas que garantizaban la neutralidad religiosa del estado.¹⁴⁴ A propósito del delito de sedición en que habría incurrido el Gobernador de Santa Fé, al vetar la nueva Constitución provincial, el Diputado Nacional Lisandro de la Torre, con la pública conformidad del Dr. Joaquín V. González, demolió los argumentos de los constitucionalistas Manuel Augusto Montes de Oca y Juan A. González Calderón.¹⁴⁵ Para Lisandro de la Torre, dejar el contralor de las convenciones constituyentes en manos de las Legislaturas venía a ser "...lo mismo, prácticamente, que ponerlo en manos de los gobernadores".¹⁴⁶

El intento de juicio político.

Con motivo de todas estas intervenciones federales a las provincias, motorizadas por el Poder Ejecutivo, el Diputado Nacional Matías G. Sánchez Sorondo intentó iniciarle juicio político al Presidente de la República. El propósito resultó fallido no sólo por obra de la defensa que de su gobierno hicieron los Diputados Radicales sino también por los argumentos de su propio suegro, el Diputado Nacional Julio A. Costa.¹⁴⁷ En efecto, Costa sostenía que el proyecto era inoportuno, pues adolecía del inconveniente de "...empezar por el final".¹⁴⁸ Para Costa --argumentando con reflexiones precozmente Gramscianas-- el juicio político debería ser el último acto del drama institucional, pues "...antes hay que hacer una campaña previa que no se ha hecho y que quien pueda hacerla es la prensa, quien tal vez no habrá creído que es el momento oportuno".¹⁴⁹ Después de hecha esa campaña previa,

"...que es como echar abajo las murallas, como hacer callar los cañones, como destruir las trincheras, habría de venir el juicio político, que es como el asalto de la fortaleza, pero no se puede empezar por asaltar una fortaleza que no ha sido desmantelada, y esa campaña previa de la prensa todavía no se ha hecho".¹⁵⁰

Y entre las falencias incurridas en esta etapa por el Radicalismo, uno de los límites más decisivos a su proyecto reformista tuvo lugar también en el interior del país. El veto a la reforma de la Constitución de Santa Fé de 1921, la concesión al clericalismo que este veto significó,¹⁵¹ y la ausencia de una reforma constitucional que incluyera el funcionamiento del juicio político,¹⁵² aislaron al gobierno radical de las fuerzas progresistas, desalentaron los cambios y permitieron que los golpes de estado y las insurrecciones armadas --que en la segunda mitad del siglo XIX habían fracasado-- se incubaran y devinieran políticas exitosas por primera vez en el siglo.¹⁵³

En resumen, los ciclos ideológicos y las olas y contraolas políticas no han mantenido una correlación directa o positiva con los ciclos económicos. Entre ellos hubo notorios desfasajes, producto de sus diversos grados de inercia o atraso relativo. El comienzo de la fase mundial de estancamiento y crisis de la tercer onda larga de Kondratiev (1914/20-1940/45) vino a correlacionarse negativamente con la nueva ola progresiva (1912-1930). Por otro lado, durante el período de gestación de la Modernidad, ni el Acuerdo Roca-Mitre (1891) disuadió las revoluciones Radicales de 1893 y 1905 ni apartó del suicidio a Leandro Alem; ni el Acuerdo Sáenz Peña-Yrigoyen (1910), obstruyó el crecimiento del anarco-sindicalismo (Semana Trágica y huelgas Patagónicas), las revueltas Lencinistas y Cantonistas en Mendoza y San Juan y el golpe de Uriburu en 1930.¹⁵⁴

NOTAS

¹ Ingenieros, Bunge, Ayarragaray, Alvarez, etc.

² Botana, 1993, 246-248. Para el célebre pensador y publicista Oriental Juan Carlos Gómez, existían en la década del 60 "...dos fracciones de la Patria, que se pretenden naciones. La una se llama República Oriental, la otra República Argentina. Yo sostengo que ninguna de las dos es nación" (Juan Carlos Gómez, "Se quedará en Buenos Aires", *El Inválido Argentino* (Buenos Aires), 4-VIII-1867, año I, n.32, p.251, col.5, y p.252, col.1-2; y *El Siglo* (Montevideo), 7-VIII-1867, 2a. época, año IV, n.864, p.1, col. 5-6; citados ambos diarios en Vidaurreta, 1962-67, 211.

³ Chiaramonte, 1993, 89. Para la crítica de Ernesto Quesada a los diagnósticos médicos de Ramos Mexía sobre la personalidad de Rosas, ver Zimmermann, 1993, 25.

⁴ en el capítulo correspondiente a las Intervenciones del Gobierno Federal en el régimen interno de las provincias.

⁵ Aja Espil, 1987, 40.

⁶ González, 1897, 1935, p.622. Por un lado, las tesis de Alem y de Ramos Mexía fueron adoptadas por Matienzo (1910) y posteriormente por González Calderón (1927). Por otro lado, las tesis de Joaquín V. González y de Estrada, sobre los poderes constitucionales implícitos, fueron retomadas por Rivarola (1905, 1908); Padilla (1921); Horacio Oyhanarte, en los fundamentos del decreto presidencial (1916) de intervención a la provincia de Buenos Aires (Botana, 1993, 251); Lisandro de la Torre en el debate a propósito del delito de sedición en que habría incurrido el Gobernador de Santa Fé al vetar la nueva Constitución provincial (Congreso, Diputados, 22-IX-1922, Reunión No.37, 487-529; y 18-I-1923, Reunión No.55, 748-791); y más luego por Lebensohn (1956) (Convención Constituyente, Diario de Sesiones, 8-III-1949, 7a. Reunión, pp.328-338), Sánchez Viamonte (1957b) y Repetto (1960). Horacio Oyhanarte debe haber participado en la redacción de dicho decreto por cuanto fué el miembro informante de la Comisión de Negocios Constitucionales que firmó y defendió en la Cámara de Diputados el extenso dictamen del proyecto de intervención a la Provincia de Buenos Aires. Las refutaciones de Sánchez Viamonte a la posición de Ramos Mexía acerca de la doctrina de Mariano Moreno, son opiniones que el historiador Julio V. González (el hijo de Joaquín V. González) "recoge, acepta y comparte" (Sánchez Viamonte, 1957b, 369-372, nota 1).

⁷ ver Ancarola, 1975.

⁸ hijo de Genoveses Garibaldinos. Fué partidario de Roque Sáenz Peña y Director de la Revista Argentina de Ciencia Política.

⁹ El que Rivarola sostuviera la necesidad de cambiar el régimen federal por el unitario fué el argumento esgrimido por el Presidente Victorino de la Plaza para rechazar su candidatura a que ocupara un sitio en la Corte Suprema, propuesta por el Dr. Saavedra Lamas (Ancarola, 1975, 105, nota 1). Rivarola había participado en 1893 como Secretario en la Intervención del Dr. Leopoldo Basavilvaso a la provincia de Corrientes conjuntamente con el Dr. Norberto Piñero. Esta experiencia es la que lo hizo decir quince años después que "...he visto destinarse los dineros que los gobiernos de provincia recibían para la instrucción pública al pago de los batallones de guardia provincial" (Rivarola, 1908, 374). Sus ideas unitarias se vieron reflejadas en el pensamiento del partido Socialista,

en especial en Bravo (1912); y en la de algunos políticos Radicales, como fué el caso del Dr. Carlos J. Rodríguez (1934, 1946, 1963), Diputado Nacional por Córdoba y Ministro de Agricultura de la primer presidencia de Yrigoyen, quien en la Cámara de Diputados de la Nación polemizó con Leopoldo Melo acerca del derecho del Poder Legislativo a interpelar los Ministros del Poder Ejecutivo; discutió con Matienzo sus tesis sobre la tradición Inglesa en la legislación constitucional Argentina (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1919, t.III, p.138-142); tuvo una relevante participación en los debates parlamentarios sobre la legislación laboral donde por vez primera cita al economista alemán Adolfo Wagner (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, Reunión No.37, 18-IX-1928, pp.425); y sobre la Ley del Petróleo en 1928; y en la intervención federal de Carlos Borzani a la provincia de Mendoza en 1928 (debo esta última información al profundo conocimiento de hombres y hechos históricos generosamente brindado por el periodista Enrique Pugliese). Según Ancarola (1975), Rivarola se volcó, a partir de 1916, de las ideas positivistas a las Kantianas, por influjo de Ortega y Gasset, de quien había sido su anfitrión durante su estadía en Buenos Aires (Ancarola, 1975, 21, nota 13).

¹⁰ Buchbinder, 1993, 91-92; y Palti, 1994, 116-117. Matienzo sostenía que la tendencia universal era hacia la descentralización, categoría a la cual asociaba la noción de federalismo.

¹¹ "...Así, Urquiza sirvió de bandera contra Derqui, Mitre contra Sarmiento, y Roca contra Juárez" (Matienzo, 1928, 293); y podríamos agregar del arsenal histórico posterior: Yrigoyen contra Alvear; y Perón contra Frondizi e Illia.

¹² ver García Molina y Mayo, 1985; y Norden, 1996.

¹³ Peña, 1970, 103; y Rocchi, 1996.

¹⁴ Noble, 1960, 197; y Grondona, 1967, 73-76. El libro de Julio Noble, un dirigente político de filiación Demócrata Progresista, que frecuentara a Lisandro de la Torre, fué concebido en las cárceles del peronismo más como un compromiso cívico que político, y es el más completo y fascinante que se haya escrito sobre la segunda mitad del siglo pasado. En sus palabras liminares, Noble reconoce como origen de su obra tanto las constantes referencias de Lisandro a la vida de Leandro Alem, como a una suerte de mandato que De la Torre le hiciera poco antes de su infausta muerte. Sin embargo, una prolija lectura de la misma, revela en su trama la presencia de una tercera vida, que precede en el tiempo a las de los dos protagonistas principales de la misma, la de Bartolomé Mitre. Es extraño lo poco citado que es este libro. Hasta el momento he registrado que ha sido mencionado sólo por las obras de Cornblit (1975), Hardoy (1993) y profusamente por Romero Carranza, et. al. (1992). Por último, es de lamentar, la ausencia de las notas de pie de página que identifiquen el origen de las numerosas citas de época que contiene, procedentes en su mayoría de fuentes primarias editas (Colecciones Documentales de los Taboada, Marcos Paz, Archivo Mitre, periódicos, Diarios de Sesiones, etc). Por ello, sería recomendable encarar una nueva edición de la misma que incluya dichas notas. Por el contrario, la obra de Grondona (un texto muy poco citado), es una apología crítica de la dictadura militar conocida como Revolución Argentina, vigente a partir de 1966.

¹⁵ McGann (1960), Halperín (1969), Grondona (1967), Cárcano (1963) y Floria (1969).

¹⁶ Gibson, 1996, 47.

¹⁷ "...a) que hay oligarquía cuando un pequeño número de actores se apropia de los resortes fundamentales del poder; y b) que ese grupo está localizado en una posición privilegiada en la escala de la estratificación social" (Botana, 1977, 74).

¹⁸ Botana, 1977, 74. Botana reconoce que la fecha de 1880 por él elegida para iniciar su obra es arbitraria, y que bien pudo haberse desplegado sobre una continuidad más prolongada (Botana, 1977, 10). A propósito de un libro posterior de Botana, titulado *La Tradición Republicana*, ver los comentarios críticos de Halperín Donghi (1986).

¹⁹ Etzioni-Halevy, 1994, 478.

²⁰ Munck, 1992-1993, 236; y Lipset, 1994, 3.

²¹ correspondiente al final de la fase mundial de crecimiento de la tercer onda larga de Kondratiev (1893/96-1914/20) (Mandel, 1978, 130-132); al quinto ciclo del primer período económico (1908-1914) y a los cuatro ciclos del segundo período (1914-1933), de Di Tella y Zymelman (Di Tella y Zymelman, 1973, cap. 3, p.62); al quinto ciclo ideológico de Rivarola; y a la última fase de la primer ola política de Huntington (1991). En el quinto ciclo ideológico, de Rivarola (1936), la idea de la reparación nacional estalla con la Revolución de 1930 (Rivarola, 1936, 157).

²² sobre la Ley de Residencia y su rol para conjurar cualquier alianza entre el proletariado y la pequeña burguesía, ver Giorlandini, 1986. Acerca del socialismo y la cuestión indígena en la Argentina, ver Lucía, 1997.

²³ Sobre las sucesivas leyes de Estado de Sitio dictadas en 1902, 1905, 1909, 1910 y 1932, ver el debate en la Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 1932, VII, Reunión n.78, 17-XII-1932, pp.297-592. Sobre el Estado de Sitio y la jurisprudencia de la Corte Suprema, ver Yanzi Ferreira, 1995.

²⁴ Stephens, 1988, 303 y 307.

²⁵ ver Amaral, 1961; Cárcano, 1963; Allende, 1964; y Vidal, 1994.

²⁶ sobre periódicos, periodistas, y periodismo, ver Sidicaro, 1993.

²⁷ Reyes (1916) reconocía ser hermano político del actual Gobernador de La Rioja Dr. Tomás Vera Barros, pero confesaba que "...me avergonzaría de tener que acercármele para pedirle un servicio, pudiendo muy bien, como lo han hecho otros, hacer pié ahí, para levantarme presupuestivamente y 'políticamente', con iguales o mejores títulos que los que han hecho en igual forma con sus parientes; y si hago esta manifestación es para que se vea que no ignoro la 'habilidad' que han tenido otros y tienen para 'subir', que no soy 'sonso', como se nos suele llamar a los que procedemos así --sino es que no quiero proceder así porque a eso llamo yo ser sin vergüenza" (Reyes, 1916, 135).

²⁸ Acerca de las virtudes caballerescas en la política argentina, ver Jitrik, 1968, 79-88; y Gayol, 1997; y para los consiguientes duelos, ver Viale (1937); y Juan Carlos Gómez, "El Terror del Florete", *La Tribuna* (Buenos Aires), 23-XII-1856, año IV, n.985, p.2, col.4-5; citado en Vidaurreta, 1962-67, 130. Según Freeman (1996), en una aproximación crítica al duelo en la política, a propósito del lance en el que falleciera Alexander Hamilton, sostiene que los políticos manipulaban la tradicional etiqueta

del código de honor para influir en la opinión pública y ganar poder político (Freeman, 1996, 309).

²⁹ acerca del rol de la institucionalización de la ciencia, ver Toulmin, 1977, 272; y acerca de la profesionalización de la disciplina histórica en Argentina, ver Pagano y Galante, 1993; y Eujanian, 1995.

³⁰ ver Renouvin, 1990, Libro I, Cap.II.

³¹ Sobre la vinculación entre el Modernismo y el Fascismo en Italia, ver Adamson, 1990. Para la importancia concedida al desarrollo de la cultura dominante, ver Altamirano y Sarlo, 1980. Sobre la Cuestión Nacional y la Cuestión Judía en el pensamiento católico argentino de principios de siglo, ver Ghío, 1994. Sobre la vinculación entre la Reforma Universitaria y la reacción contra el Modernismo, ver Brunner, 1995, 287. Acerca del descontento de la generación de los Martienfierristas en la década del 20, ver Córdova Iturburu, 1962, 7-39. Sobre el cosmopolitismo de izquierda y el grupo Boedo, que enfrenta al europeísmo de los Martinfierristas, ver Sarlo, 1988, 121-132; y sobre la modernidad de izquierda expresada en la revista literaria *Contra*, ver Sarlo, 1988, 138-150; y sobre la música argentina, ver García Muñóz, 1988.

Acerca de la angustia provocada por la privación cultural de origen en la vida de Roberto Arlt, ver Amícola, 1984; y Sarlo, 1988, 50-62; sobre la soledad intelectual de Güiraldes, ver Sarlo, 1988, 114-120; con relación a la soledad del hombre común expresada en Scalabrini Ortiz, ver Falcoff, 1972; Morales Saravia, 1986; Foster, 1986; y Sarlo, 1988, 215-221; sobre el conflicto entre el impulso culturalista de una adolescente de la oligarquía como Victoria Ocampo y la incultura y tilingüería de la clase que la rodeaba, ver Sarlo, 1988, 85-93; sobre la contradictoria voluntad de los destinos sociales y la vocación de una poetisa como Alfonsina Storni, ver Nale Roxlo y Mármol, 1964; y Sarlo, 1988, 78-85; y sobre la ruptura del eclecticismo de la revista *Nosotros* y la actitud de Borges, ver Sarlo, 1988, 95-107.

Acerca del creacionismo de Gironde, ver Sarlo, 1988, 62-67; sobre el fantasismo sentimental de los González Tuñón, ver Sarlo, 1988, 155-171; con referencia al expresionismo poético de Xul Solar y el cubo-futurismo de Pettorutti, ver Córdova Iturburu, 1962, 7-39; González Lanuza, 1961; y Sarlo, 1982; y con respecto al movimiento de restauración arquitectónica colonialista, ver Buschiazzi, 1966, 35-37; y Catálogo, 1995. Acerca de la pintura argentina contemporánea, ver Trujillo, 1967; sobre la música contemporánea, ver Lange, 1982; con relación a la recepción de Freud, ver Vezzetti, 1993; sobre revistas literarias, ver Masiello, 1985 y 1992; y Pereyra, 1993; sobre la revista *Sur*, ver King, 1981; y Lisi, 1986; y acerca de editoriales e imprentas, ver Barcia, 1981; Giudici, 1981; Grondona, 1990; y Sagastizábal, 1995. Por el contrario, para evidenciar la persistencia de la cultura subalterna, en especial la música popular, ver Mafud, 1966; Vidart, 1967; Cantón, 1968; Taylor, 1976; Collier, 1986; y Azzi, 1991.

³² ver Rivarola, 1914; Weinmann, 1994; y Pucciarelli y Tortti, 1995. Asimismo, ver Renouvin, 1990, Libro II, Cap.XI. Según Weinmann (1994), a comienzos del siglo XX, la elite política argentina estaba plagada de germanófilos, entre ellos: el historiador y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras Dr. David Peña, el Ministro de Hacienda Francisco J. Oliver (yerno del ex-Ministro de Hacienda Juan José Romero), los Cancilleres Estanislao Zeballos y Carlos Rodríguez Larreta, el Presidente de la Cámara de Diputados Mariano Demaría, los historiadores Carlos Ibarguren y Ernesto Quesada, Néstor Carrico, los profesores Juan P. Ramos y Alfredo Colmo, el poeta Belisario Roldán y José A. Beruti (Weinmann, 1994, 62-63).

³³ ver Rodríguez Fabregat, 1942; González Conzi y Giúdice, 1959; Vanger, 1968; Manini Ríos, 1973; Nahum, 1975; Méndez Vives, 1977; y Barrán y Nahum, 1986. Para el período inmediato al de la hegemonía de Batlle, ver Caetano, 1993.

³⁴ ver Jalikis, 1925; Crespo, 1928; López Mayer, 1946; Dodero, 1961; y Walter, 1974.

³⁵ ver Córdova Iturburu, 1962, 24; y Adelman, 1992.

³⁶ ver De Sola Pool, 1981; Acosta, 1988; Horvath, 1986; Tesler, 1990; Baur, 1994; y Newton, 1995, 158.

³⁷ ver Cortés Conde, 1968; y Halperín Donghi, 1976.

³⁸ ver Tedesco, 1971; Graciarena, 1971; Portantiero, 1978; y Brunner, 1995, 287. Sobre la Universidad de Córdoba, ver Riquelme, 1996; González, 1996; y Cazón, 1996. Ver la interpelación parlamentaria sobre los Colegios de la Inmaculada Concepción, de la ciudad de Santa Fé, y del Colegio de Monserrat, de Córdoba (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1912, III, Reunión n.49, 27-IX-1912, 1022-1045); y el debate parlamentario sobre Institutos Particulares Incorporados (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1932, II, Reunión n.19, 18-V-1932, pp.427-477); y en el debate sobre el Presupuesto General, la exposición del Diputado Nacional Carlos Mouchet, sobre su iniciativa del Laboratorio de Psicología Experimental en el Colegio Nacional Mariano Acosta (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1932, VII, Reunión n.81, 22 y 23-XII-1932, p.575).

³⁹ sobre el funcionamiento de la ley, los conflictos judiciales y el cambio agrario en la campaña bonaerense, ver Palacio, 1996a y 1996b.

⁴⁰ Johnson, 1961, 51-69 y 119-127; Scobie, 1969; Sofer, 1977; y Senkman, 1978 y 1981. Sobre las categorías censales implementadas en los tres Censos Nacionales, ver Otero, 1996.

⁴¹ ver Sargent, 1974, capítulos IV y V; Nicolini, 1979; Guy, 1991; y Nari, 1996.

⁴² ver Salvatore, 1992b. Sobre policía, política, crimen y represión en Argentina, ver Blackwelder y Johnson, 1982; y Kalmanoviecki, 1996; sobre las penitenciarías y las visiones de clase, ver Salvatore, 1996; y sobre criminología, eugenesia y medicina social en el debate entre científicos argentinos e italianos entre 1914 y 1941, ver Scarzanella, 1997.

⁴³ ver el debate parlamentario sobre la Justicia de Paz entre los Diputados Nacionales Manuel Carlés y Juan Balestra a favor de la justicia lega, contra los Diputados Gouchon e Iturbe a favor de la justicia letrada, en Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1905, I, 8a. sesión ordinaria, 19a. Reunión, del 19-VI-1905 al 30-VI-1905, pp.649-746. Ver asimismo las irregularidades cometidas en las Fiscalías, el caso de Ernesto Quesada (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 1924: II, 591).

⁴⁴ sobre el partido comunista, ver Plá, 1986-87; sobre la provincia de Buenos Aires, ver Walter, 1974; Melón Pirro, 1994; Ferrari, 1994; Bartolucci y Toroncher, 1994; y Da Orden, 1994; y sobre la provincia de Córdoba, ver Vidal, 1994. Sobre los colegios electorales y los electores en tiempos de la

República "Verdadera" (1916, 1922, 1928), ver Ferrari, 2003.

⁴⁵ Pucciarelli y Tortti, 1995, 73 y 75. Es asombrosa la anemia bibliográfica que padece este artículo. Ninguno de los clásicos modernos es citado, ni Rock, ni Solberg, ni Walter, ni Smith.

⁴⁶ ver Arce, 1959; y Melón Pirro, 1994. Según Azaretto (1983) De la Torre no aceptó en sus filas la afiliación de Joaquín V. González; y el político mendocino Emilio Civit le dio los votos al Radicalismo para sacarle los Electores de la mayoría a su conprovinciano Benito Villanueva, por sospechar que podía jugar con De la Torre (Azaretto, 1983, 64).

⁴⁷ a la Lista incluida en Ibarguren (1955) y Weinmann (1994), mencionada por Gibson (1996), agregamos aquí la Lista U-I y el Apéndice U-I, correspondientes a los miembros conservadores no Ugartistas del parlamento nacional (Gibson, 1996, p.240, nota 42). A diferencia de los demás partidos políticos de entonces, el Partido Demócrata Progresista llevaba en su programa pioneramente el proyecto de intervención estatal en la economía, ver Sidicaro, 1995, 336.

⁴⁸ las secuelas humanas derivadas de las muertes, heridas y exilios sufridos con motivo de la Revolución de 1905, fueron engendrando en la conciencia política colectiva la necesidad de buscar otra estrategia para el drama institucional argentino.

⁴⁹ Esta noción fue inaugurada por O'Donnell (1972) para explicar el péndulo cívico-militar del pos-peronismo (O'Donnell, 1972, cap.IV).

⁵⁰ Mazo, 1959, II, 30.

⁵¹ Sobre la política como apostolado y la discursividad yrigoyenista, ver Padoan, 2002.

⁵² Acerca de la noción de clientelismo, ver Eisenstadt y Roniger (1980); Kettering (1988); y la larga lista incluida en Sartori, 1992, 104, nota 12. Sobre las intervenciones federales en la primer Presidencia de Yrigoyen, ver Pinedo, 1946, II, 283-293, 441-443, y 455-479; Mustapic, 1984; y Greenberg, 1987.

⁵³ régimen en el cual los individuos participan de distintas afiliaciones (de familia, de vecindad, de edad, de religión y de militancia política) con gente diferente (Ross, 1995, 68).

⁵⁴ Andrenacci (1997), sostiene que la reivindicación de derechos políticos en Argentina "...jamás fue el sufragio universal, sino el sufragio secreto y obligatorio" (Andrenacci, 1997, 126).

⁵⁵ Cámara de Diputados de la Nación, Diario de Sesiones, 1914, I, 257.

⁵⁶ A propósito del enfoque de Justo acerca de la noción de nación, ver Da Orden, 1994.

⁵⁷ Pinedo, 1946, 25.

⁵⁸ para la división ocurrida en el Radicalismo Santafesino, ver Persello, 1996.

⁵⁹ El asesinato del Jefe Político de Rosario, Floduardo Grandoli, acontecido en 1897; y el del Jefe Político de Caseros José R. Saurit, ocurrido en 1901, había sensibilizado a la opinión pública

santafesina. El crimen de Silva Chávez se cometió en la estación ferroviaria de Chapuy, Departamento de General López, de resultas del enfrentamiento entre dos políticos primos hermanos, el ex-Diputado Nacional Felipe Carreras, Presidente del Comité de la Liga del Sur de Venado Tuerto, y el Jefe Político del Departamento de General López, José Antonio Montes Carreras, militante Radical (al respecto ver las siguientes crónicas periodísticas: "Movimiento Político. Incidente sangriento en Melincué. Muerte de Silva Chávez", La Prensa, sábado 21-II-1914, p.12; "Movimiento Político. Pedido de la Liga del Sur. Sobre el Incidente de Chapuy. Versiones contradictorias", La Prensa, Domingo 22-II-1914, p.11; "Política Santafesina. El incidente sangriento de Chapuy", El Diario, 24-II-1914, p.4; y "El Suceso de Chapuy", El Diario, Jueves 26-II-1914, p.4). El Mensajero, órgano oficial del partido Radical en Rosario dió dos versiones acerca del crimen. En una "...aparece agredido el Jefe Político José Antonio Montes, y en la otra se presenta la muerte de Silva Chávez como un asesinato. La Reacción y La República, diarios radicales, presentan el suceso como una consecuencia de un atentado contra el Jefe Político Sr. Montes. La Capital, de Rosario, lo dá como un alevoso asesinato" (La Prensa, Domingo 22-II-1914, p.11). Un extenso debate sobre este sangriento incidente se transcribe en las exposiciones de los Diputados Nacionales Lisandro de la Torre y Rogelio Araya (Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.10, 20-V-1914, pp.407-415).

⁶⁰ Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, Reunión n.10, 20-21 de Mayo de 1914, p.461. Para entender mejor esta región santafesina, ver el rol que le cupo al Jefe Político de General López Luis F. Fillol, caudillo del partido Independiente y adversario de los Carreras en la represión del abigeato, en "Cosas de la provincia de Santa Fé", El Diario, 27-V-1909; y "Cuatrismo en Santa Fé. El caso del Departamento General López", El Diario, 20-XII-1909.

⁶¹ Exposición del Diputado Rogelio Araya, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, Reunión n.10, 20-21 de Mayo de 1914, p.461.

⁶² Exposición del Diputado Rogelio Araya, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, Reunión n.10, 20-21 de Mayo de 1914, p.461.

⁶³ Exposición del Diputado Rogelio Araya, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, Reunión n.10, 20-21 de Mayo de 1914, p.461.

⁶⁴ hijo de Miguel Gerónimo Figueroa y Delfina Ovejero Zerda, sobrino político de Francisco Manuel Costas, tío 2o del Gobernador Robustiano Patrón Costas (GP.1913-16); y primo 2o del Gobernador Miguel Francisco Aráoz Usandivaras (GI.1852-75).

⁶⁵ hijo de Robustiano Patrón Escobar y de Francisca Costas Figueroa (Calvo, VI, 191), y cuñado del jurista José María Solá, quien había sido en un matrimonio anterior yerno del célebre político liberal salteño Isidoro López.

⁶⁶ Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.45, 20-IX-1912, p.835.

⁶⁷ *Ibíd.*

⁶⁸ Su hijo el Ing. Abraham Cornejo Isasmendi casó en 1937 con Lucrecia Patrón Costas, hija de Don Robustiano Patrón Costas y de Elisea Ortiz Isasmendi (Cornejo, 1972, 91).

⁶⁹ Cantón, 1973, 100; y Botana, 1977, 116.

⁷⁰ Juan Peñalva, Vice-Presidente de la Unión Cívica Radical de Salta al Sr. Comisionado Nacional, Salta, 4-III-1918 (AGN, Intervención Federal, Leg.57).

⁷¹ *Ibíd.*

⁷² Sobre el triunfo radical en 1917 en Tucumán de Juan B. Bascary, ver Monner Sans, 1989.

⁷³ Exposición del Diputado Nacional Del Moral, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Reunión No.5, 30-IV-1920, t.I, p.192-193.

⁷⁴ Exposición del Diputado Nacional José Luis Aráoz, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Reunión No.5, 30-IV-1920, t.I, p.196.

⁷⁵ Exposición del Diputado Nacional José Luis Aráoz, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Reunión No.5, 30-IV-1920, t.I, p.196.

⁷⁶ Exposición del Diputado Nacional Del Moral, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Reunión No.5, 30-IV-1920, t.I, p.192-193.

⁷⁷ Exposición del Diputado Nacional José Luis Aráoz, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, Reunión No.5, 30-IV-1920, t.I, p.196.

⁷⁸ sobrino del Senador Nacional Gregorio Santillán Gondra (SN.1877-86).

⁷⁹ cuñado del Diputado Nacional Napoleón Zavalía Gondra (DN.1882-86); y padre del Diputado Nacional Benjamín Palacio Salvatierra (DN/Córd. 1932-46).

⁸⁰ Exposición del Diputado Nacional Dr. Manuel C. Cáceres, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 26, 25-VII-1919, tomo III, p.245.

⁸¹ ex-Ministro de las Gobernaciones de Manuel Argañaraz y de Antenor Alvarez Cabanillas.

⁸² Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 33, 5-VIII-1918, tomo II, p.694.

⁸³ hijo del Diputado Nacional Félix O. Cordero Sequeira (DN.1902-06) y cuñado del Diputado Nacional Juan B. Castro Montes (DN.1938-47).

⁸⁴ pariente del ex-Gobernador Antenor Alvarez Cabanillas, y de la mujer del ex-Gobernador Manuel Argañaraz.

⁸⁵ Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 34, 7-VIII-1918, tomo II, p.745.

⁸⁶ hijo o nieto del Gobernador Francisco Rosa Galíndez y Cubas (GPv.1862/71).

⁸⁷ Exposición del Diputado Nacional Francisco R. Galíndez, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 22, 16-VII-1919, tomo II, p.778.

⁸⁸ Exposición del Diputado Nacional Francisco R. Galíndez, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 22, 16-VII-1919, tomo II, p.778.

⁸⁹ los miembros de esta familia se destacaron por ser casi en totalidad de filiación Radical.

⁹⁰ Exposición del Diputado Nacional Francisco R. Galíndez, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 22, 16-VII-1919, tomo II, p.778.

⁹¹ Exposición del Diputado Nacional Francisco R. Galíndez, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 22, 16-VII-1919, tomo II, p.778.

⁹² hermano del Diputado Nacional Mauricio Herrera González (DN.1882-86; 1896-00).

⁹³ Exposición del Diputado Nacional Francisco R. Galíndez, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 22, 16-VII-1919, tomo II, p.786.

⁹⁴ Exposición del Diputado Nacional Francisco R. Galíndez, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 22, 16-VII-1919, tomo II, p.786.

⁹⁵ padre del Gobernador Miguel Angel Cárcano Sáenz de Zumarán (GP.1926-28); y concuñado del Diputado Nacional José Miguel Olmedo y Argüello (DN. 1878-94; 1908-16) (Fuente: Cutolo, V, 163; y Lazcano Colodrero, I, 370 y 372).

⁹⁶ Exposición del Diputado Nacional Guillermo Rojas, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 32, 23-VII-1917, III, p.698.

⁹⁷ hermano del Senador Provincial Pedro N. Garzón Moreno (SP.1896-08); yerno del Diputado Nacional Eleázar Garzón Duarte Olivera (DN.1894-1906); y cuñado del Gobernador de Santiago del Estero y Senador Nacional Dámaso E. Palacio Achával (Stgo. del Estero, 1898-1901).

⁹⁸ Vidal, 1996, 131.

⁹⁹ En el caso de Tulumba, el afiliado demócrata Félix Martínez, "...persona caracterizada de esa localidad, cae asesinado por la policía del Departamento. El señor Anastasio Troncoso, vecino de Río Primero, de la misma filiación política, es atravesado por un balazo de winchester por la espalda, y su heridor, el sujeto Zacarías Acosta, permanece en libertad, y según noticias que tengo no se le había instruído sumario, frecuentando como contertulio habitual la comisaría de la localidad. El caudillo gubernista Celestino Olguín, autor del homicidio de Francisco Burgos, gozaba de plena libertad, sin que el sumario hubiese llegado a manos de la justicia" (Exposición del Diputado Nacional Antonio Santamarina, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.32, 23-VII-1917, t.III, p.703).

¹⁰⁰ hermano del Senador Provincial Félix Garzón Maceda.

¹⁰¹ Exposición del Diputado Nacional Juan B. Justo, Diario de Sesiones de la Cámara de

Diputados, Reunión No. 29, 24-VII-1918, t.II, p.459.

¹⁰² Vidal, 1996, 122-124.

¹⁰³ partidaria de la tesis Georgiana del Impuesto único.

¹⁰⁴ Vidal, 1989; y Bischoff, 1995, 413.

¹⁰⁵ Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 32 y 33, 23 y 25-VII-1917, tomo III, p.695 y 749.

¹⁰⁶ cuñado del Senador Provincial Jorge Torres Castaños (SP/Capital, 1920-24).

¹⁰⁷ hermano del Diputado Provincial y Ministro de Gobierno Horacio Martínez Berrotarán, quien a su vez era cuñado del Senador Provincial Eduardo Deheza Pinto (SP.1893-97).

¹⁰⁸ Exposición del Diputado Nacional Enrique Martínez, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.74, 20-XI-1919, t.VI, p.354.

¹⁰⁹ hijo del Gobernador de Córdoba Gerónimo L. del Barco Lencinas (GP.1870); y sobrino del Gobernador de Entre Ríos Ramón Febre Cejas (E.R., 1875/78).

¹¹⁰ Exposición del Diputado Nacional Enrique Martínez, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.74, 20-XI-1919, t.VI, p.354.

¹¹¹ El Gobernador Amable Jones fué víctima en 1921 de un atentado mortal. Ver la excelente versión de un militante Radical Bloquista en Bates (1922); y la de un Radical nacionalista, en Damianovich (1922).

¹¹² ver Bates, 1922; Smith, 1970; y Rodríguez, 1979. El Cantonismo se extendió incluso a La Rioja, donde un movimiento político, titulado Principismo, ensayó un frustrado putsch en 1924, contra el nepotismo de los gobernadores Benjamín Rincón y Florencio Dávila San Román, ver Bravo Tedín, 1985.

¹¹³ Ver López Seghesso, 1980. Era sobrino del Senador y Diputado Provincial Manuel Cruz Videla González (SP/SRF.1896-04); y padre del Gobernador Carlos Washington Lencinas Peacock (GP.1924-28); y de los Diputados Nacionales José Hipólito y Rafael Néstor Lencinas Peacock; (DN.1920-28) (DN.1926-30) (Fuente: Morales Guñazú, 1939, 309).

¹¹⁴ hijo del Diputado Provincial Francisco Raffo (DP/Riv.1888-90); y sobrino de los Diputados Provinciales por Guaymallén Aureliano, Estanislao y Primitivo de la Reta Peralta (DP/Cap.1892-94) (DP/Gllén.1879) SP/Gllén.1904-10 (DP/Gllén.1866) y Luciano Villanueva Reta (DP/Riv.1886-88) (Morales Guñazú, 1939, 278).

¹¹⁵ Refiriéndose al Radicalismo, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 18-XI-1919, Reunión No.72, p.245.

¹¹⁶ Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 18-XI-1919, Reunión No.72,

p.245.

¹¹⁷ Entre los que fueron parientes de miembros del régimen, como Civit, Raffo de la Reta señalaba a:

"...Leopoldo Suárez, pariente político del Sr. Civit, [quien] es actualmente Ministro de Industrias y Obras Públicas" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 18-XI-1919, Reunión No.72, p.245).

Respecto a los que dirigían el periodismo político:

"...José Vicente Santos, director de "El Debate" y "La Palabra" y Secretario de Civit y Galigniana Segura, es actualmente director de "La Palabra", diario radical;... Ricardo Encinas, director que fué de "El Debate", diario oficial de Galigniana Segura y Civit, concejal municipal en aquella época, senador en la actualidad del partido radical" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 18-XI-1919, Reunión No.72, p.245).

Con referencia a los que fueron parte del Poder Legislativo:

"Juan A. Dufau, senador, intendente, jefe político de Rivadavia, de los gobiernos de Civit y Galigniana Segura y actual miembro del Banco de la Provincia, uno de los radicales de fuste al lado del Sr. Lencinas; Estanislao D. Gaviola, senador también, diputado, subdelegado, y actual Intendente Municipal del Sr. Lencinas; ...Jorge Céspedes, senador, diputado, actualmente miembro del Banco de la Provincia; Rufino Ortega (h), jefe político de Civit, diputado durante las épocas de Civit y Galigniana Segura, que fué después Gobernador, dejado por Civit, y ahora es Presidente del Crédito Público" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 18-XI-1919, Reunión No.72, p.245).

Entre los que integraron el Poder Ejecutivo:

"...Francisco Evans, que ha sido Comisario en las épocas del régimen, es actualmente jefe político del Sr. Lencinas;...Eduardo Evans, que fue Comisario de Ordenes en el gobierno anterior, es actualmente Secretario del Banco de la Provincia" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 18-XI-1919, Reunión No.72, p.245).

Y en relación a quienes participaron del Poder Judicial:

"...el Dr. Ramón Moyano ha sido fiscal y catedrático en los gobiernos anteriores, y actualmente es miembro de la Suprema Corte, nombrado por el Sr. Lencinas" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 18-XI-1919, Reunión No.72, p.245).

¹¹⁸ sobrino político del Gobernador Coronel Juan Barbeito Giménez Inguanzo (GD.1858/62).

¹¹⁹ hijo de José Elías Rodríguez y de Feliciano Saa. Su apodo de "Pampa" no era gratuito, por

cuanto su madre Feliciano Saa, era hija del Coronel Juan Saa y de una india araucana, habida en tiempos en que se hallaba refugiado en las tolderías del desierto. Vuelto a la civilización sólo trajo a su hija Feliciano, a la cual casó con José Elías Rodríguez, hermano de Carlos Juan Rodríguez. Era sobrino del Gobernador Jacinto Videla Poblet (GP.1891-93), y hermano del Gobernador Ricardo Rodríguez Saa (GP.1934-38).

¹²⁰ Exposición del Diputado Nacional Teófilo I. Gatica, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.8, 6-VI-1919, t. I, p.401.

¹²¹ Exposición del Diputado Nacional Teófilo I. Gatica, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.8, 6-VI-1919, t. I, p.401.

¹²² hijo del Gobernador Mauricio Daract Vilches (GD.1852); hermano del Diputado Nacional Mauricio P. Daract Barbeito, (DN.1892-1900); y del Gobernador Interino Eduardo Daract Barbeito, (Gov.Int., 1934); sobrino carnal del Senador Nacional Juan A. Barbeito Giménez (SN.1892-01); y sobrino político del Diputado Nacional Víctor Segundo Guíñazú Ortiz (DN. 1892-96).

¹²³ Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.45, 30-IX-1928, p. 871.

¹²⁴ transcritos por La Reforma del 20 de mayo y 19 de Julio de 1914.

¹²⁵ Exposición del Diputado Nacional Teófilo I. Gatica, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.8, 6-VI-1919, t.I, p.401.

¹²⁶ La Reforma, 19 de Julio de 1914.

¹²⁷ Exposición del Diputado Nacional Teófilo I. Gatica, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.8, 6-VI-1919, t. I, p.402.

¹²⁸ padre del Diputado Nacional Reynaldo A. Pastor.

¹²⁹ célebre por sus disputas con el Gobernador Adeodato Berrondo, a quien había servido como Ministro.

¹³⁰ Exposición del Diputado Nacional Teófilo I. Gatica, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.8, 6-VI-1919, t. I, p.402.

¹³¹ debe este nombre al Coronel Juan P. Pringles, un oficial puntano que perteneció al Ejército Sanmartiniano.

¹³² Exposición del Diputado Nacional Teófilo I. Gatica, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.8, 6-VI-1919, t. I, p.403.

¹³³ Exposición del Diputado Nacional Teófilo I. Gatica, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.8, 6-VI-1919, t. I, p.403.

¹³⁴ Exposición del Diputado Nacional Teófilo I. Gatica, Diario de Sesiones de la Cámara de

Diputados de la Nación, Reunión No.8, 6-VI-1919, t. I, p.401.

¹³⁵ Exposición del Diputado Nacional Teófilo I. Gatica, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.8, 6-VI-1919, t. I, p.401.

¹³⁶ Exposición del Diputado Nacional Teófilo I. Gatica, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.8, 6-VI-1919, t. I, p.401.

¹³⁷ sobrino carnal del Gobernador Benigno Rodríguez Jurado (GP.1904-06).

¹³⁸ esta teoría sostiene que "...por el hecho de vencer al contrario, le quita todos los títulos, todos los triunfos y todas las posiciones que había obtenido anteriormente" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 62, 11-IX-1917, tomo V, p.52).

¹³⁹ nieto materno del Diputado Nacional Manuel Lucio Lucero Usaca (DN.1858-60).

¹⁴⁰ Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 2, 21-V-1919, tomo I, p.100.

¹⁴¹ Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 2, 21-V-1919, tomo I, p.104.

¹⁴² Exposición del Diputado Nacional Teófilo I. Gatica, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No.8, 6-VI-1919, t. I, p.401.

¹⁴³ sobre los antecedentes de la Liga del Sur, ver Amaral, 1961.

¹⁴⁴ ver Mustapic, 1984.

¹⁴⁵ Montes de Oca se fundaba en citas trucas extractadas de la teoría formulada por el constitucionalista Norteamericano John Alexander Jameson acerca de la supremacía o preeminencia absoluta de las Legislaturas y en las obras de W. F. Dodd y de Roger S. Hoar (Congreso Nacional, Cámara de Diputados de la Nación, 22-IX-1922, Reunión No.37, p.498 y 513, 773-775). Frente a una crítica del jurista alemán Von Holst (1873), Jameson contestó con una nota inserta en las ediciones posteriores de su obra, donde admitía el cargo pero hacía la salvedad que su obra fué escrita mientras los Ejércitos de la Unión se batían en los campos de batalla para sostener la misma tesis de su libro, la de que "...los estados forman una nación, la de que los derechos de los Estados particulares, en el sentido planteado por el Sur, son una herejía política y que la secesión era una traición" (Alfredo Palacios, Convención Nacional Constituyente, 13-IX-1957, 9a. Reunión, p.328).

¹⁴⁶ Congreso Nacional, Cámara de Diputados de la Nación, 18-I-1923, Reunión No.5, p.765. No obstante la enjundia de sus argumentos, de haber De la Torre refutado a Montes de Oca citando las intervenciones de los Diputados Delfín Gallo, José Evaristo Uriburu, Eduardo Wilde y Vicente Fidel López, en el debate sobre la frustrada intervención a Salta, acontecido en 1877, habría contado con aliados históricos más categóricos. En cuanto al principio de la omnipotencia legislativa, mientras para el Diputado Nacional Gallo "...no puede aceptarse en una democracia...[pues] una democracia reposa sobre esta base: que los poderes públicos son poderes con facultades limitadas"; para el Diputado

Uriburu en su réplica al Diputado Miguel Cané, "...no se explica en una República donde el Poder Ejecutivo jamás puede llegar hasta donde llega una monarquía, porque ese Poder Ejecutivo tiene un período fijo, es elegido por el pueblo y por cortos términos"; y para el Diputado Vicente F. López, "...cuando las catorce provincias tenían Legislaturas soberanas [u omnipotentes como en la Dictadura de Rosas]...prevalcían las desgracias, los escándalos, las miserias, las tropelías y la degradación" (Diario de Sesiones, Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 30-V-1877, p.101 y 115; y 1-VI-1877, p.142). En dicho debate, De la Torre culminó por revelar que el Diputado por la Capital Dr. González Iramain le acababa de traer un amable mensaje de parte de su tío, el Senador por La Rioja Dr. Joaquín V. González, en el que "...me manifestaba su conformidad con todas las doctrinas que yo había sostenido respecto de las relaciones de la legislatura con la convención" (Lisandro de la Torre, Congreso Nacional, Cámara de Diputados de la Nación, 18-I-1923, Reunión No.55, p.790).

¹⁴⁷ yerno de Marcos Paz, que fuera Vice-Presidente de Bartolomé Mitre.

¹⁴⁸ Exposición del Diputado Nacional Julio A. Costa, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 74, 20-XI-1919, VI, 314.

¹⁴⁹ Exposición del Diputado Nacional Julio A. Costa, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 74, 20-XI-1919, VI, 314.

¹⁵⁰ Exposición del Diputado Nacional Julio A. Costa, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión No. 74, 20-XI-1919, VI, 314.

¹⁵¹ Bergallo Andrade, 1933; Macor, 1994; Malamud, 1995; y Fernández Lalanne, 1996, 118.

¹⁵² reflexión del Convencional Constituyente Quiroga Lavié (Convención Constituyente, 1949, I, 904).

¹⁵³ ver Smith (1974); Rock (1975); Tamarin (1980); Potter (1981); McGee Deutsch (1986); y Spektorowski (1994).

¹⁵⁴ ver Barbosa, 1988.

TOMO VI

Capítulo 3

La crisis del estado liberal. La Restauración Oligárquica en Argentina (1930-1942)

Mientras para el revisionismo Nacionalista, los violentos cambios políticos que derrotaron a la Confederación Argentina en Caseros y en Pavón, al Autonomismo porteño en el 80, y al Radicalismo en el 30, fueron meros golpes de estado, derivados de la intervención Británica; para el discurso Marxista,¹ el fracaso del proyecto republicano (de Alberdi y Sarmiento), y del mito de un Radicalismo democrático-liberal y anti-oligárquico, patentizado en los reiterados y exitosos golpes de estado ocurridos en el siglo veinte,² fueron el resultado de haber tratado de reproducir mecánicamente la experiencia política Yanqui en un país carente de una burguesía industrial.³

Pero para una lectura estructuralista,⁴ las revoluciones, los golpes de estado y las dictaduras estarían ligadas con líneas de fractura de origen moderno (crisis o agotamientos de los modelos de desarrollo económico). Según Potter (1981), una politóloga enrolada en la escuela Institucionalista, el secreto del éxito político-militar de la ruptura, desajuste o involución política conocida como Revolución de 1930 se hallaba en la politización que el segundo gobierno de Yrigoyen practicó con el poder de intervención federal en las provincias,⁵ y sus secuelas en los niveles de violencia política,⁶ y de ilegitimidad de la administración de justicia, al perder sus integrantes la inamovilidad que los caracterizaba.⁷ Para W. Schiff (1972), Atkins y Thompson (1972) y García Molina (1990, 1994 y 1995) el éxito político-militar de los golpes de estado, como el caso de la Revolución de 1930, se originó en la germanización del ejército, anterior a la instauración del fascismo en Europa.⁸ Y para R. Schiff (1995) y García (1995), la formuladora de la Teoría de la Concordancia, dicho éxito político-militar se fundaba en la abrupta separación de las instituciones civiles respecto de las militares.⁹ De los cinco factores detallados por Potter (1981) para explicar dicha crisis y ruptura, a saber: la reacción oligárquica, la crisis económica,¹⁰ la ineficiencia gubernativa, el descontento militar y la crisis de legitimidad; el último factor, ampliamente desarrollado por Smith (1974) y por Mora y Araujo (1982), era el de mayor verosimilitud, aunque insuficiente para explicar la gravedad de la coyuntura.¹¹ En la misma corriente de ideas, el estudio de Waisman (1987), acerca de las estrategias políticas, económicas y culturales implementadas por la elite argentina frente a la inestabilidad y el desajuste políticos y la consiguiente ruptura institucional (golpes, asonadas, motines, etc.), buceó en el excepcional y cíclico (curvilíneo) desarrollo político y económico argentino (auge entre 1880 y 1930; y decadencia a partir de 1930).¹²

En un análisis institucionalista (Olsonian) tienen cabida las tesis acerca de: a) la relación inversa entre el grado de institucionalización de los partidos y el grado de organización de los grupos que actúan en su interior, formulada por Panebianco (1988); b) la incapacidad de controlar el conflicto en función de la multiplicidad de los espacios no institucionales vigentes, de Smulovitz (1988); y c) la intensidad de la competitividad política en función inversa a la multiplicidad de espacios institucionales o esferas públicas, de Dahl (1966).¹³ Últimamente, en la base del conflicto político organizado fué detectada la combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas (genéticas: geográficas, religiosas y estamentales) y modernas (ideológicas, políticas y económicas), formuladas por Rokkan (1970), Panebianco (1982, 1988) y von Beyme (1995).¹⁴

Finalmente, para los autores influenciados por la escuela de la post-modernidad,¹⁵ las reiteradas rupturas o involuciones institucionales (revoluciones y dictaduras) ocurridas en Argentina estarían ligadas no con las supervivencias de los legados y las fracturas pre-modernas, pre-burguesas y pre-capitalistas, como surgiría de las tesis de Moore (1966), Gerschenkron (1968) y Germani (1963, 1978); ni con las respectivas crisis o fracturas modernas (ideológicas, políticas, sociales y económicas), como lo proponía la lectura estructuralista,¹⁶ sino con las fracturas post-modernas (psíquicas, ecológicas y estéticas: cambios en las prácticas o estrategias discursivas), las cuales incluían cambios políticos, sociales y culturales, susceptibles de ser deconstruidos buceando en la genealogía de sus elementos constitutivos.¹⁷ Es mediante la articulación de estrategias discursivas, que diversos intereses sociales han pretendido a lo largo de la historia la supervivencia de determinada combinación de estructuras pre-modernas y modernas. En ese sentido, Girard (1983) elaboró la tesis de la existencia en la historia de violencias fundacionales; y Ross (1985, 1995) formuló la tesis acerca del grado de conflictividad de una sociedad como función inversa de la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados) y función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación económica, política y social (teoría de la complejidad política).

Estas numerosas hipótesis, metodologías y modelos de análisis estratégicos nos han sugerido formular una extensa serie de reflexiones, íntimamente vinculados entre sí, no siempre susceptibles de ser transparentes, pero en cuya pertinencia habrá de residir gran parte del éxito de este trabajo. La influencia ideológica externa, la inercia o persistencia de tradiciones pre-modernas, pre-burguesas y pre-republicanas, y el inicio de una decadencia política, económica y cultural que perduró hasta fines del siglo XX y que había seguido a una etapa de auge iniciada en 1880, habría contribuido a generar la crisis del estado liberal. Los sentimientos paranoicos de una elite político-cultural atemorizada por una movilidad política y social descendente provocada por la emergencia de una nueva elite y una nueva burguesía; el impacto de la Reforma Universitaria de 1918; y por el peligro de una revolución social que sustituyera a una clase social por otra, habría contribuido a engendrar una coalición autoritaria. Estas coaliciones autoritarias triunfantes habrían contribuido entonces a frenar la circulación de las elites y a desacelerar la intensidad de la movilidad social.

La índole continuista o anticontinuista de las salidas electorales practicadas por las coaliciones autoritarias habría estado en relación directa con su naturaleza moderadora o dominante y con el tipo e intensidad de resistencia y/o colaboración prestada por los partidos políticos o con el momento elegido para operar la salida electoral.

La producción de pactos y coaliciones habría logrado impedir las violaciones del régimen representativo, republicano y federal de gobierno, acabado con la corrupción y las reminiscencias de la Dictadura Rosista y el Antiguo Régimen Colonial, impedido los golpes militares, las insurrecciones, las

guerras, las sanciones colectivas (premios o castigos corporativos, clánicos, o regionales) y los crímenes (Lencinas, Bordabehere, etc.) y suicidios políticos (Lugones y De la Torre).

La inercia de tradiciones pre-modernas y pre-republicanas (dictatoriales), en el contexto de una crisis orgánica del capitalismo, habría desatado la coalición autoritaria que dio el golpe de 1930. Y, a la inversa, el inicio de una represalia del conservadurismo contra la Revolución del 90 y su resultado la Ley Sáenz Peña, se habría expresado en el golpe de 1930.

Niveles de competitividad y participación política.

Entrado el siglo XX, el régimen constitucional Argentino, fundado a mediados del siglo XIX, penetró en una profunda crisis regresiva. No siempre, al decir de Novaro (1995), los regímenes representativos de gobierno (cuya función es la de preservar los vínculos en constante disgregación) concilian los intereses divergentes, ni la participación electoral "...y demás procedimientos institucionales bastan para controlar su accionar".¹⁸ Si bien los niveles de competitividad y participación política alcanzaron en la década del 20 las cotas más altas hasta entonces conocidas, el análisis de los gobiernos constitucionales contemporáneos revela que la estrategia política de la dirigencia civil tuvo tres momentos diferenciados en donde con sus excepciones:

- 1) se pretendió subordinar la corporación militar;
- 2) se intentaron estrategias constitucionales y electorales reformistas que le garantizaran a los gobiernos civiles su estabilidad institucional;
- y 3) se incurrió en graves casos de corrupción que alimentaban un creciente clima golpista y el clamor civil por el orden y la intervención militar.¹⁹

La crisis del estado liberal.

La crisis del estado liberal manifestada en el golpe del treinta,²⁰ que trajo una profunda inestabilidad política y la quiebra de una democracia supuestamente representativa y competitiva, habría sido el resultado de:

- A) la inercia o persistencia en la sociedad civil de tradiciones dictatoriales, oscurantistas y militaristas (caudillismo, clericalismo, militarismo, golpismo, etc.); de tradiciones pre-modernas, pre-parlamentarias y pre-políticas (despotismo, nepotismo, etno-centrismo, estamentalismo, patrimonialismo, etc.), y de tradiciones anarco-sindicalistas en el movimiento obrero;²¹ en conflicto con la acelerada recepción de innovaciones técnico-económicas (e.g.: energía eléctrica, motor a explosión, etc.),²² y de reformas institucionales (e.g.: obras sanitarias);²³
- B) el pasaje en los conflictos internacionales: de un clivaje político-nacional a uno ideológico (Fascismo Europeo); y en la elite política: de un clivaje pre-moderno, fundado en la regionalidad, a un clivaje social o de clase;²⁴
- C) la presencia en la coalición democrática dominante de una clase terrateniente más fuerte que la burguesía;²⁵
- D) la pérdida de hegemonía intelectual por parte de la clase terrateniente;²⁶ y la imprevisión de

una elite que integró la coalición autoritaria, de origen provinciano, propia de Antiguo Régimen, culturalmente decadente, y ganada por el sectarismo, la nostalgia, el patriotismo y el chauvinismo;²⁷

E) el desequilibrio en la composición de la elite vis à vis la composición de clases de la sociedad, que se manifestó en una falta de correspondencia entre la lentitud de circulación de las elites y la alta tasa de movilidad de las clases sociales;

y F) la inercia de los subsistemas socio-institucionales (estructuras económicas productivas y distributivas) en su conflicto con la veloz recepción de innovaciones tecnológicas (ondas hertzianas) aplicadas a las comunicaciones (radio-telefonía).²⁸

Por un lado, la Revolución de 1930, que marcó en la Argentina,²⁹ el inicio de: a) una contraola regresiva,³⁰ b) una prolongada crisis de legitimidad o de crisis orgánica,³¹ c) una devaluación de la legitimidad de la civilización europea y una recurrente apelación al mito de la grandeza y la excepcionalidad argentina;³² d) un "juego imposible", compuesto de proscripción, fraude y abstención;³³ y e) una regresión o reversión en los ritmos de secularización del estado, laicización de la sociedad civil, desarrollo económico y movilidad social, que se habían logrado a partir del 80,³⁴ habría sido, fundamentalmente, el producto de la imprevisión de la clase dirigente conservadora,³⁵ y de un desquite tardío de la misma contra la Revolución de 1890 y contra sus secuelas: el Pacto Yrigoyen-Sáenz Peña y la Ley Sáenz Peña.³⁶

Por otro lado, la preocupación de las fracciones reformistas de las coaliciones autoritarias por otorgar legalidad al hecho revolucionario fué crucial para lograr continuidad jurídica y frenar el avance de las concepciones corporativas y fascistas.³⁷ La Corte Suprema de Justicia arguyó como doctrina para admitir la validez de los actos de los gobiernos militares las tesis del jurista canadiense Constantineau (1910, 1945), que diferenciaba los gobiernos de facto de los gobiernos usurpadores;³⁸ la doctrina de Herrfahrdt (1932),³⁹ y el fallo o acordada pronunciado en 1865 por la Corte Suprema, reconociendo la validez de una resolución dictada por el Gral. Mitre después de Pavón, en el breve interregno interino previo a su elección como Presidente.⁴⁰ La distinción entre gobiernos defacto y gobiernos usurpadores había girado primero alrededor de las doctrinas de Jameson (1864, 1887), sobre la omnipotencia --o en términos más recientes competitividad con racionalidad hegemónica-- de las Convenciones Revolucionarias.⁴¹ Inspirado en parte en la primitiva obra de Schmitt, Herrfahrdt sostuvo que jurídicamente no existe un derecho a la revolución, y que por consiguiente toda revolución es una violación del orden jurídico existente.⁴²

Por todo ello, la plausibilidad de las razones de la contraola regresiva iniciada en 1930 es preciso buscarlas en:

- i) las políticas económicas anti-cíclicas, intervencionistas, corporativas y proteccionistas o sustitutivas de las importaciones;⁴³
- ii) el culto a la violencia,⁴⁴ las torturas,⁴⁵ los crímenes,⁴⁶ el fraude,⁴⁷ los negociados,⁴⁸ el nepotismo,⁴⁹ el populismo o clientelismo oligárquico,⁵⁰ el aventurerismo o conspiracionismo cívico-militar,⁵¹ y las virtudes marciales;⁵² y iii) el temor de la elite a perder su hegemonía intelectual, social y económica, a manos de una nueva burguesía de origen inmigratorio, de naturaleza industrial, e

imbuída de un crudo materialismo;⁵³ y no como sostiene Waisman (1987), al supuesto miedo de la elite burocrática y política a que se produjera una revolución social.⁵⁴

Agotado el gobierno militar surgido del golpe del 30, la naturaleza de la transición a la democracia-liberal operada en 1932 fué por transacción, pues se acordó la proscripción del Radicalismo y la coalición formada por la Democracia Progresista y el Socialismo fué incapaz de vencer el fraude electoral sistemático orquestado por la Concordancia, coalición compuesta por el Socialismo Independiente y el Conservadorismo.⁵⁵ Al amparo de dicha proscripción y del fraude a las grandes mayorías electorales, tuvo lugar una baja institucionalización del partido proscripto; un alto grado de organización de los grupos que actuaban en su interior (Comité Universitario, Vanguardias Radicales de la Juventud, FORJA, ACOR, ACRA, MRRB y Acción Radical);⁵⁶ el crecimiento general de las llamadas minorías intensas (en la derecha la Legión Cívica, Acción Argentina, Acción Nacional Argentina, GOU, y en la izquierda, Insurrexit, etc.);⁵⁷ una multiplicidad de los espacios no institucionales en que se manifestaba el conflicto político (factores de poder como las Fuerzas Armadas y la Iglesia), que se expresaban en una radicalización de aquellos sectores cívico-militares pertenecientes a la coalición opositora.⁵⁸ Por el contrario, en la sociedad política se observaba la actitud condenatoria de la Iglesia respecto del Socialismo y la Democracia Progresista;⁵⁹ y en el movimiento obrero se advertía el influjo de la ideología anarco-sindicalista que boicoteaba toda posible alianza social entre el proletariado y las facciones radicalizadas de la coalición opositora.⁶⁰

Los conflictos en la coalición opositora.

En este crítico contexto político, embargado por la incertidumbre en torno a la incorporación del Radicalismo al juego electoral, el sector moderado mayoritario de la coalición opositora (Comité Nacional presidido por el ex-Presidente Alvear) se opuso a los planes conspirativos de los sectores radicalizados.⁶¹ Tras un encuentro con el Presidente Justo, celebrado en 1935, y contra la opinión de la Intransigencia, Alvear levantó la abstención.⁶² A diferencia del encuentro Yrigoyen-Sáenz Peña, el encuentro Alvear-Justo no fue eficiente, pues si bien fue funcional para fortalecer la asimetría real necesaria para imponer en torno al Comité Nacional la hegemonía desgastada --al no hacer lugar a un eventual "juego imposible" que habría beneficiado única y exclusivamente al Socialismo-- y controlar la incertidumbre provocada por la abstención del Radicalismo, no logró afianzar la institucionalidad al no erradicar el fraude electoral.⁶³ Esta participación electoral acordada vino a coincidir con el ascenso de Hitler al poder de Alemania y con el consecuente nacimiento de los Frentes Populares en Francia y España.⁶⁴ Como la contienda electoral resultó fraudulenta, la Unión Cívica Radical fué derrotada, dando el triunfo a la fórmula conservadora Ortiz-Castillo.⁶⁵ Esta nueva derrota, más la crisis mundial que avanzaba, alimentó un clima de deliberación permanente acerca de la identidad Radical, obligando a los sectores radicalizados a recostarse en los únicos lugares donde la coalición opositora resultó triunfante: el Camperismo tucumano y el Sabatinismo cordobés.⁶⁶

La composición étnica y social de la elite.

La composición de la elite y su discriminación por su origen étnico, nacional o de clase fueron el motivo central de muchas discusiones acerca de las causas de las crisis políticas. A raíz de la polémica desatada por el proyecto de moratoria hipotecaria de 1933, el Diputado Nacional Dionisio Schoo Lastra,⁶⁷ puso el dedo en la llaga al cuestionar la autoidentificación que el Socialismo hacía de su partido como partido de clase. En efecto, Schoo Lastra alegaba la inexistencia de una sociedad de clases en un país como Argentina donde desde sus inicios revolucionarios regía el principio de la

igualdad de sus habitantes. Se preguntaba Schoo Lastra,

"...¿Qué clase de gente puede haber entre nosotros? Francamente, es algo que no me explico, porque por mi parte, en mi país siempre me he encontrado o me he sentido igual a todos los demás. Recién ahora en esta casa, en sus puertas, en sus oficinas, en sus ascensores, percibo que se me hace objeto de un tratamiento distinto: el señor Diputado abajo, el señor Diputado arriba, el doctor --que no soy--. Yo no sé a cual de esas clase de gente pertenezco, si será la misma que mi vecino el señor diputado por Corrientes, que ha sido gobernador de su provincia".⁶⁸

Esta distinción en el trato honorífico entre miembros de clases diversas se proyectaba incluso hasta determinar diferencias de orden fisiológico.⁶⁹ Y si la distinción que permitía al Socialismo dividir a la población en clases era la división entre ricos y pobres, Schoo Lastra apelaba a "...la sinceridad de los señores Diputados Socialistas para que nos digan si entre ellos no hay también ricos y pobres!".⁷⁰ Para Schoo Lastra, Buenos Aires conoció

"...millonario que no tuvo nunca reparo en referir que había empezado su vida como grumete de cocina, en veleros que navegaban en el Norte de Europa. Otro que tuvo una flota empezó como botero en el puerto. Un piamontés vino a nuestro país adolescente aún, para no pesar sobre su madre, que debía sustentarlo con su duro trabajo".⁷¹

Schoo Lastra se ofrecía para hacer conocer el Piamontés a la Cámara "...si les place oír de sus propios labios, la odisea, y como su señora madre, la trabajadora de aquella aldea del Piamonte, vino y concluyó su vida dulcemente, rodeada de sus nietos argentinos".⁷² Un lígur, cuyos primeros pasos "...no pudieron ser más modestos, brindó su casa para que la Capital de la República alojara en ella a su jefe de estado que fué su huésped".⁷³ Y en la Bolsa de Comercio, hubo según Schoo Lastra

"...un negociante de títulos que llegó a una posición única, tanto que se le llamó el Rey de las cédulas. Diariamente efectuaba cantidad de operaciones con distintos compradores y vendedores, terminadas las cuales se dirigía a su escritorio y extrayendo una nota de bolsillo dictaba a sus empleados todo lo que había hecho. Estos últimos, a cuyas manos llegaron en más de una oportunidad las notas de bolsillo a que me refiero, tuvieron ocasión de comprobar que no estaban escritas, que las cubría una serie de rasgos incomprensibles. ¿Qué era? Que su patrón no sabiendo escribir, se desempeñaba mediante un sistema de signos de su invención. El rey de las cédulas llegó a millonario en nuestro medio y no sabía leer ni escribir".⁷⁴

Y en cuanto a la duración o persistencia de las fortunas en el tiempo, Schoo Lastra manifestaba que difícilmente sumaban media docena las fortunas que tuvieran medio siglo de existencia. La inmensa mayoría de las restantes fortunas,

"...ofrecen el espectáculo de ir y venir del dinero, el de su paso de manos de los ineptos al de los aptos, lo que es en resumen el movimiento del capital que el Socialismo abomina, que es producto del trabajo que no se adhiere en definitiva a nadie; y que es el trabajo, ley sagrada del hombre, lo que el combustible al motor".⁷⁵

No obstante la intensa movilidad social que los ejemplos de Schoo Lastra revelan, una nómina de intelectuales y políticos nacionalistas y conservadores (Apéndice U-II), que tuvieron indudable influencia en el curso de los acontecimientos políticos del siglo, nos ilustran mediante su origen provincial y sus ataduras genealógicas con la elite del Antiguo Régimen Colonial acerca de la

existencia de fuertes vínculos con un pasado remoto. Pero estos vínculos apenas ameritan que haya existido en la conciencia de los miembros de esta nómina la transferencia de un "miedo ancestral" o pre-moderno, de raíz religiosa, que los haya empujado hacia la derecha, tal como lo plantea Waisman (1987).⁷⁶ Mas bien, se trataría de un miedo moderno, origen de un antisemitismo moderno, nacido al compás de la creciente secularización del estado nacional y de una biologización, racialización o etnicización de la historia y la política, así como de las clases sociales, las enfermedades, la pobreza y el crimen. Asimismo, esta tendencia nacionalista no era homogénea. Un numeroso grupo pertenecía a la pequeña burguesía urbana intelectualizada,⁷⁷ cuyo principal temor fué el impacto de la Reforma Universitaria, y una creciente inmigración judía, que alimentó su antisemitismo y le hizo perder preeminencia intelectual a manos de una pequeña burguesía de origen europeo, y no el impacto de una eventual revolución social liderada por dirigentes anarco-sindicalistas.⁷⁸ Por cierto, la minoría nacional más temida por los nacionalistas, en los ambientes universitarios y académicos, era la de origen judío.⁷⁹ El caso de Manuel Gálvez fué paradigmático pues "...denunció que el ingreso de judíos a las profesiones urbanas restringía oportunidades a la población nativa".⁸⁰ El médico Juan E. Carulla,⁸¹ conjeturaba en 1928, que hacia 1932 "...el comercio estaría completamente controlado por los judíos".⁸² El escritor y futuro Interventor en la Universidad de Cuyo, Ramón Doll,⁸³ atacó en sus ensayos duramente al Diputado Nacional Enrique Dickman, asociando sus orígenes hebreos a su supuesta vinculación con el Servicio Secreto Inglés.⁸⁴ El ensayista Enrique P. Osés,⁸⁵ reclamaba como programa mínimo "...el establecimiento de guetos y signos de identificación para judíos y su exclusión del servicio público y de la universidad".⁸⁶ Y el afamado periodista José Luis Torres,⁸⁷ estigmatizaba al Asesor del Gerente General de la Dirección de Impuesto a los Réditos Isaac Israel Gerest y a Manuel Rapoport por pertenecer a la "raza perseguidora",⁸⁸ y a la familia industrial y banquera de los Bemberg,⁸⁹ por ser "...su ascendencia netamente judía",⁹⁰ y afirmaba asimismo que

"...los enlaces de los banqueros sin ninguna tradición aristocrática y hasta sin estirpe con los aristócratas...es un síntoma de la decadencia en las sociedades organizadas con respeto por la tradición y vinculadas, de alguna manera, a la historia de un país".⁹¹

Las alternativas estratégicas

En el sentido apuntado por las alternativas estratégicas mencionadas al comienzo, cuando en las coaliciones autoritarias, sus crisis internas se acentuaban, las salidas electorales y/o insurreccionales se precipitaban.⁹² Por el contrario cuando sus crisis se amortiguaban con reglas de coparticipación en el poder,⁹³ la salida electoral se demoraba.⁹⁴ Pero cuando durante los gobiernos constitucionales y/o los autoritarios, el enfrentamiento entre los partidos políticos se combinaba con altos grados de corrupción y fraude electoral, la inestabilidad política se agudizaba y en ocasiones, al alimentar el espíritu irracional de revancha y la consiguiente insurrección civil, la coalición autoritaria dominante se fragmentaba y se precipitaba el golpe de estado o el renunciamento forzoso.⁹⁵ A su vez no todas las salidas electorales fueron semejantes. Cuanto más intransigente a los gobiernos autoritarios fué la coalición opositora, más probable era que el frente interno político y militar de la coalición dominante se cohesionara y la salida electoral fuere ficticia o condicionada.⁹⁶ Cuando por el contrario la presión externa era notoria, los gobiernos autoritarios o de facto vieron su coalición fragmentada, no teniendo mas remedio que concretar la salida electoral sin condicionamiento proscriptivo alguno.⁹⁷

En resumen, los ciclos ideológicos y las olas y contraolas políticas no han mantenido una correlación directa o positiva con los ciclos económicos. Entre ellos hubo notorios desfasajes, producto de sus diversos grados de inercia o atraso relativo. Mientras el final de la fase mundial de

estancamiento y crisis de la tercer onda larga de Kondratiev (1914/20-1940/45) vino a correlacionarse positivamente con la quinta contraola regresiva (1930-1955) y con un sexto ciclo ideológico de inspiración nacionalista, iniciado en 1930 y culminado en 1955. No obstante las opiniones acerca de los supuestos beneficios de las estrategias conciliatorias (pactos o acuerdos), que dieron lugar a reformas constitucionales y legislativas (electorales y reglamentarias de las incompatibilidades republicanas) concluimos que la política Acuerdista, de naturaleza elitista, se compadece con las tradiciones del Antiguo Régimen y de la dictadura Rosista.⁹⁸ Por otro lado, durante el período de gestación de la Modernidad, los pactos o acuerdos políticos no fueron en general funcionales para controlar las incertidumbres políticas y afianzar la institucionalidad. El hipotético Acuerdo Mitre-Urquiza (1862) no impidió las rebeliones del Chacho Peñaloza y de Felipe Varela; ni el Acuerdo Roca-Mitre (1891) disuadió las revoluciones Radicales de 1893 y 1905 ni apartó del suicidio a Leandro Alem; ni el Acuerdo Sáenz Peña-Yrigoyen (1910), obstruyó el crecimiento del anarco-sindicalismo (Semana Trágica y huelgas Patagónicas), las revueltas Lencinistas y Cantonistas en Mendoza y San Juan y el golpe de Uriburu en 1930;⁹⁹ ni el levantamiento de la abstención electoral, por parte de Alvear en 1935, evitó el fraude electoral, los crímenes políticos, los suicidios de Lisandro de la Torre y Leopoldo Lugones, el crimen de Bordabehere, y el golpe de 1943.

NOTAS

¹ Gallo, 1933; y Peña, 1970.

² ver García Molina y Mayo, 1985; y Norden, 1996.

³ Peña, 1970, 103; y Rocchi, 1996.

⁴ Wright, 1975; Peralta Ramos, 1978; y Sábato, 1988,

⁵ los casos de San Juan y Mendoza, ver Sánchez Sorondo, s/f, 45-81; Smith, 1970; Rodríguez, 1979; y Ramella, 1985.

⁶ crímenes del Gobernador Amable Jones, del ex-Gobernador Carlos Washington Lencinas y del Senador Nacional Enzo Bordabehere.

⁷ Lacoste, 1994, 109; y Potter, 1981, 100-107. Para la participación del Ejército en las intervenciones federales del primer gobierno del radicalismo, ver Caterina (1987).

⁸ El proceso de germanización se había acentuado cuando el Centenario de la Revolución de Mayo (1910), con la misión militar presidida por el célebre Mariscal Alemán Colman Von der Goltz, formado en la escuela de Clausewitz (García Molina, 1990, 1994, 1995). Von der Goltz llegó a publicar diversas notas en La Nación, en mayo de 1910, habiendo quedado marcado su influjo en diversos artículos publicados posteriormente en la Revista del Círculo Militar, y en los discursos del entonces Ministro de Guerra Gral. Rafael Aguirre. No volvió a la Argentina por cuanto cayó herido de muerte en el frente Turco durante la Primera Guerra Mundial. Su hijo fué Instructor del Colegio Militar (Debo estas interesantes referencias a la generosidad de Fernando García Molina y a la lectura de sus artículos citados).

⁹ Para medir esta separación, Schiff sugiere el estudio de cuatro indicadores: 1) la composición

social del cuerpo de oficiales, 2) el proceso político de toma de decisiones, 3) el método de reclutamiento, y 4) el estilo militar (Schiff, 1995, 7-8).

¹⁰ Suter (1995) aclara que las crisis financieras en Argentina fueron breves, debido a la presteza con que se superaron las fases de contracción económica, y no alcanzaron a poner en riesgo el poder político de la clase terrateniente, debido a la fuerza con que ésta contaba para mantener el control del poder (Suter, 1995, 48). Debo la referencia de este valioso artículo a la generosidad del Prof. Andrés Regalsky.

¹¹ Para algunos el yrigoyenismo era fruto de las estructuras del caudillismo (Wolf y Hansen, 1967); para unos pocos, fruto del populismo plebeyo (Tamarin, 1980); y para otros el personalismo yrigoyenista fué posible por no haberse agotado aún las estructuras económicas, sociales y políticas del Antiguo Régimen Colonial.

¹² para Waisman (1987), a partir del 45 se inicia en Argentina una etapa de capitalismo autárquico, y para Andrenacci (1997), un estado tutelar.

¹³ Smulovitz, 1988, I, 11.

¹⁴ ver Bartolini, 1993, 220-224; y von Beyme, 1995, 161-162.

¹⁵ Nancy y Lacoue-Labarthe, 1983; Deleuze, 1987; y Lefort, 1990.

¹⁶ Wright, 1975; Peralta Ramos, 1978; y Sábato, 1988.

¹⁷ Nancy y Lacoue-Labarthe, 1983, 11-28; cit. en Fraser, 1984, 129, 137 y 140-143; y ver Deleuze, 1987, 56.

¹⁸ Novaro, 1995, 109.

¹⁹ Para explicar la corrupción política existente en los Estados Unidos, Meier y Holbrook (1992) utilizan cuatro indicadores histórico-culturales: 1) urbanismo, 2) preferencias de clase media, 3) inmigración, y 4) actividades criminales. Para Meier y Holbrook (1992), los ambientes urbanos son propicios para la corrupción política debido a los débiles lazos que sus poblaciones mantienen con las instituciones de la familia y la religión (Meier y Holbrook, 1992, 138 y 139). No obstante, si entendemos por corrupción al nepotismo, donde la familia extensa se mezclaba con la política, convendremos que los más altos márgenes de corrupción política se daban en aquellas regiones carentes de inmigración, donde en la integración de la elite prevalecía la familia extensa.

²⁰ para un contexto continental, ver Halperín Donghi, 1985, capítulo 6. Esta contraola regresiva correspondió a la primer contraola de Huntington (Huntington, 1994, 27), al final de la fase mundial de estancamiento y crisis de la tercer onda larga de Kondratiev (1914/20-1940/45) (Mandel, 1978, 130-132; y 1986, 25; y Prelooker, 1996, 68), y al primer ciclo del tercer período (1933-1938), registrado por Di Tella y Zymelman (Di Tella y Zymelman, 1973, cap.10, p.251).

²¹ Para Moore (1966) la democracia puede ser correlacionada con el capitalismo sólo si en la coalición democrática está presente la burguesía (Munck, 1992-93, 235; y Stephens, 1989, 1027).

²² En materia de transportes e instalaciones viales, ver García Heras, 1985 y 1992.

²³ en materia de instalaciones de agua potable en ciudades de provincia, sobre San Juan ver el trabajo de Demichelis, 1938; sobre Catamarca, ver Cantaluppi, 1938; sobre Santiago del Estero, ver Miralles, 1938; sobre Salta, ver Bodenbender y Mariátegui, 1938; sobre Posadas (Misiones), ver Zaehnsdorf, 1939; sobre Santa Rosa (La Pampa), ver Torres y Torres, 1939; sobre San Rafael (Mendoza), ver Fernández, 1939; y sobre Santa Fé, ver Calusio y Meoli, 1941.

²⁴ esta tesis corresponde a la obra de Gibson (1996), la cual a su vez fué tomada de las lecturas de Hardoy (1983, 1993); y Palacios (1983).

²⁵ En aquellos países donde el poder de la clase terrateniente y las tradiciones pre-modernas y pre-republicanas se mantienen incólumes, Moore (1966) sostuvo que la quiebra de la democracia es inevitable (Munck, 1992-93, 235; y Stephens, 1989, 1027). Según Maddison (1985), durante la década del treinta la clase terrateniente se mantuvo en Argentina más fuerte que en el Brasil (Maddison, 1985, 25).

²⁶ Para la misma época, en los Estados Unidos, la clase dominante industrial-financiera logró perpetuar su hegemonía intelectual mediante numerosas Fundaciones (Rockefeller, Carnegie, Morgan, Vanderbilt, Mellon, Ford, Guggenheim, etc.), ver Fisher, 1983; Geiger, 1986; y Karl y Katz, 1987; y últimamente mantuvo ese predominio mediante los llamados Think Tanks, ver Smith, 1994. Sobre los actuales centros de investigación en América Latina, ver Levy, 1996. Sin embargo, en los Estados Unidos, las Universidades más prestigiosas (Harvard, Yale, Princeton) mantuvieron durante este período de entreguerras cuotas limitativas para minorías raciales como la semita, ver Farnum 1997).

²⁷ ver Bitrán y Schneider, 1991; y Halperín Donghi, 1994, 21. Sobre la apreciación de la noción de patriotismo como vicio o virtud, ver MacIntyre, 1995. Según Weinmann (1994) y McGee Deutsch (1986), a comienzos del siglo XX, la elite política argentina estaba plagada de germanófilos y anti-dreyfussards, entre ellos: el historiador y Decano de la Facultad de Filosofía y Letras David Peña, el Ministro Francisco J. Oliver (yerno del ex-Ministro de Hacienda Juan José Romero), el ex-Canciller Estanislao Zeballos, el político e historiador Carlos Ibarguren, el Canciller Carlos Rodríguez Larreta, el Presidente de la Cámara de Diputados Mariano Demaría, el jurista e historiador Ernesto Quesada, Néstor Carrico, los profesores Juan P. Ramos y Alfredo Colmo, el poeta Belisario Roldán y José A. Beruti (Weinmann, 1994, 62-63; y McGee Deutsch, 1986, 45-47; citado en Andreassi Cieri, 1996, 41, nota 44). Sobre la colonia científica alemana en La Plata, ver Ciappa, 1987. Sobre el pensamiento de Gustavo Franceschi y la revista Criterio, ver Floria y Monserrat, 1982. Sobre la xenofobia desatada después del golpe del 30, ver el debate parlamentario sobre la presencia de extranjeros en los Directorios de las empresas del estado, y en especial las expresiones del Diputado Roberto Giusti y los incidentes provocados por la exposición del Diputado Socialista José Luis Pena (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1932, VII, Reunión n.78, 7-XII-1932, p.97-242, en especial p.110 y 117); por la solicitud del Presidente del Nacionalismo Laborista de Mendoza Sr. José María Rosa al Gobernador De San Juan respecto a la eventual designación de un Fiscal del Crimen de extracción hebrea (exposición del Diputado Nacional Juan A. Solari, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, I, 26-VI-1935, Reunión N.7, p.534-535); y por la exposición del Diputado Nacional Videla Dorna (ver la nómina de detenidos con motivo de la huelga maderera, insertada por el Diputado Videla Dorna en el Diario de Sesiones con evidente afán anti-semita, Cámara de Diputados,

14 y 15-VI-1934, Reunión n.17, pp. 464-465). Para una interpretación de la política argentina anterior al peronismo, a la luz del debate entre escolasticismo y secularismo, ver Ivereigh (1994).

²⁸ Pioneros de la radiofonía argentina fueron Enrique Telémaco Susini y Jaime Yankelevich, este último dueño de Radio Belgrano y Radio Cultura. El alma de la radiofonía fueron los locutores, una suerte de comunicadores sociales, que guardaban una íntima conexión con el gran público. Entre los más famosos se destacaron Enrique P. Marconi, quien leía *La Prensa* en Radio Porteña; Alberto Taquini, creador de los micronoticiosos que transmitía Radio El Mundo; y un tal Iglesias, creador del *Reporter Esso* en Radio El Mundo. Para Terrero (1981), el radioteatro fué en la radiodifusión Argentina un continuador de la payada y de los relatos gauchescos (ver Terrero, 1981; citado en Barbero, 1993, 20). Según el poeta José González Ledo, el radioteatro habría sido más bien la prolongación del teatro campero (por ejemplo los programas denominados *La Chacra de Don Lorenzo*, *La Piedra del Escándalo* y *Chispazos de Tradición*, con Amaya Churrinche). Para este último programa radiofónico, ver del Monte, 1980; y Acosta, 1988, 69; y para el uso que la política y los políticos hicieron de los programas radiofónicos, ver Acosta, 1988, 68. El análisis de las revistas especializadas (*Radiolandia*, *Para Tí*, *Maribel*, *Vosotras*, etc.) revelaría la agenda cultural de dichas radios (Jensen, 1993, 22). Las autoridades de los Distritos de Correos y Telégrafos enviaban tradicionalmente Partes Mensuales con detallados diagnósticos políticos, prolongándose estas prácticas hasta bien entrado el siglo XX (en el repositorio documental del Gral. Agustín P. Justo, existente en el Archivo General de la Nación de Buenos Aires, abundan esta clase de Partes Mensuales, con nutrida información para cada Distrito).

²⁹ y también en países limítrofes como el Uruguay, ver Jacob, 1983; y González, 1993, cap.III.

³⁰ Para Ortiz (1977), la etapa del segundo crecimiento iniciada en 1880 perduró hasta 1940; y la etapa del segundo colapso, que se inició en 1940, perduró al menos hasta la fecha de edición de su libro.

³¹ Botana, 1988, 34.

³² Con referencia al intento de desmitificar la cultura americana, manifestada en su caracterización como trasplante respecto de la cultura Europea, explicada en la obra de Martínez Estrada, ver Sebreli, 1967; Morales Saravia, 1986; Sarlo, 1988, 221-228; Ciriza, 1990; y Svampa, 1994, 192-196. Sobre el intento contrario en Mallea, ver Morales Saravia, 1986, citado en Svampa, 1994, 192, nota 410.

³³ El Diputado Nacional José María Bustillo, en el debate parlamentario sobre la presencia de extranjeros en los Directorios de las empresas del estado, manifestaba respecto de la exposición del Diputado Nicolás Repetto que "...la política que desarrolla tiene puestas sus vistas en los votos personalistas,...[y que] a pesar de ser un representante de la clase obrera flirtea con los partidos burgueses, cuyos votos quiere conquistar" (*Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación*, 1932, VII, Reunión n.78, 7-XII-1932, p.233). Y diez días después, el Diputado Nacional Nicolás Repetto manifestaba, en el debate sobre la declaración de Estado de Sitio, que era "...necesario que los Radicales, en lugar de abstenerse, en lugar de desertar del comicio, vengán a colaborar con nosotros en la depuración del comicio y en la reconquista del sufragio" (*Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación*, 1932, VII, Reunión n.78, 17-XII-1932, p. 305). En el Archivo del General Urriburu se cita a Mario Bravo como un dirigente Socialista que en ese entonces halagaba al

Radicalismo, ver García Molina y Mayo, 1986, p.36 y Documento n.35.

³⁴ ver Waisman, 1987. Para Di Tella y Zymelman (1973) la crisis de 1930 "...fue en la Argentina menos aguda que en muchos otros países,..., no hubo pánico en la bolsa ni cierre de bancos" (Di Tella y Zymelman, 1973, 251).

³⁵ Halperín Donghi, 1994, 21.

³⁶ Sobre la entrevista Yrigoyen-Sáenz Peña, ver Ansaldi, 1986-87, 411. Para el Convencional Constituyente Alberto García Lema, a los Pactos preexistentes mencionados en la Constitución de 1853, y al Pacto de San José de Flores practicado en 1859, se debe agregar otro acuerdo fundamental, "...el celebrado por Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen en la segunda década de este siglo" (Convención Nacional Constituyente, 1994, I, p.633). Este Pacto dotó "...de un nuevo contenido de acuerdos fundamentales a nuestro sistema constitucional, porque permitió el ingreso del régimen democrático que era una virtualidad que estaba en la Constitución de 1853 en la alegación a la soberanía y a la voluntad del pueblo pero que no había sido explicitada como uno de los contenidos concretos de nuestra Constitución a través de las normas consiguientes. De cualquier modo, al no tener nuestra Constitución normas relativas al régimen electoral y a los partidos políticos se permitió que ese acuerdo de la segunda década de este siglo complementara en el orden valorativo los principios de nuestra Constitución" (Convención Nacional Constituyente, 1994, I, p.633). Es preciso aclarar que este Pacto o Acuerdo, a diferencia de los celebrados entre Mitre y Roca, o entre Perón y Frondizi, o entre Menem y Alfonsín, no implicó coalición electoral alguna.

³⁷ Sobre la construcción del mito Uriburista o del general Uriburu y la Argentina nacionalista, ver Finchelstein, 2002, 53-70

³⁸ Smulovitz, 1995, 90-91.

³⁹ Constantineau, 1910, 35 y 411, citado en Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 18 y 19-IX-1946, Reunión 32a., p.720); y en Palacios, 1947, 55; Drago, 1946, 51-57; Quiroga Lavié, 1978; y Cayuso y Gelli, 1988, 71-74.

⁴⁰ Fallos, II, 121-127; citado en Palacios, 1947, 50. Es extraño que Rouquié no haga ninguna referencia a este hecho.

⁴¹ Las opiniones jurídicas de Jameson (1864, 1887, 1972) utilizadas por el jurista Manuel A. Montes de Oca para justificar el veto a la Constitución de Santa Fé fueron mencionadas en 1922 por el Diputado Lisandro de la Torre (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 22-IX-1922, Reunión No.37, p.497); y en 1957 por los Convencionales Alfredo Palacios y Antulio Pozzio (Convención Nacional Constituyente, 13 y 18-IX-1957, Reuniones n.9a. y 11a., pp.327-328 y 467). Y las doctrinas jurídicas de Constantineau (1910) y Herrfahrdt (1932) fueron citadas por los Convencionales Reynaldo Pastor, Antulio Pozzio y José A. Ghioldi (Convención Nacional Constituyente, 13, 18 y 19 de Septiembre de 1957; 9a., 11a. y 12a. Reunión; p.346, 469 y 550 respectivamente); y por los juristas Linares Quintana (1970), Quiroga Lavié (1978) y Cayuso y Gelli (1988), las cuales a su vez habían sido citadas en 1946 en los alegatos de las respectivas defensas de los Ministros de la Corte Suprema (Drago, Palacios, Díaz Arana). En el mismo sentido, para justificar la gradual reinterpretación de la Constitución de Weimar, desde una perspectiva parlamentaria a una plebiscitaria, sirvió la confusión de

las categorías de legalidad y legitimidad formuladas en 1932 por Carl Schmitt (Lepsius, 1978, II, 75, nota 20). Para mayores detalles, ver Bracher, 1973, I, 259-268. Ultimamente, Schmitt (1997) volvió sobre el tema aclarando su participación en 1932.

⁴² Palacios, 1947, 60.

⁴³ para Di Tella y Zymelman (1973) la recuperación económica comenzó en 1933 y continuó hasta mediados de 1937 (Di Tella y Zymelman, 1973, 251). Para el estudio de los conflictos laborales y las negociaciones colectivas de trabajo como antecedente del corporativismo obrero peronista, ver Gaudio y Pilone, 1983 y 1984; y Korzeniewicz, 1993. Y para el estudio del intervencionismo, ver Sidicaro, 1995.

⁴⁴ ver Luzuriaga, 1940; López Rosas, 1975; Díaz Araujo, 1971; y Villalba, 1993. Sobre la ley de la violencia y el odio en el patriciado argentino expresado en la obra de Mallea, ver Morales Saravia, 1986; Sarlo, 1988, 228-242; y Svampa, 1994, 197-200; y sobre el rol de los agentes provocadores y los infiltrados en los partidos políticos, ver Kalmanowiecki, 1996. Ver en el Apéndice U-III, la nómina de más de 200 presos políticos de filiación Radical de un total de 700 presos ubicados en la Penitenciaría Nacional, Villa Devoto, Departamento de Policía, Usuahia y demás establecimientos carcelarios del interior del país, entre 1931 y 1933. Según Luzuriaga (1940) la nómina de este listado representaba la cuarta parte de un total de 3000 presos.

⁴⁵ Sobre la fundación de la Sección Especial, ver Sánchez Zinny, 1959, I parte, cap. VI. Sobre los presos de Bragado, ver Quesada, 1972.

⁴⁶ Acerca de los crímenes del Diputado Nacional Enzo Bordabehere, suceso acontecido en plena sesión de la Cámara de Diputados; del Gral. (R) Conrado Risso Patrón en Diciembre de 1940 en Santa Fé, y del Diputado Provincial Enrique Matons en Enero de 1941 en Mendoza (ver Llach, 1984, 530; y Lacoste, 1994, 249-254).

⁴⁷ ver el incidente del derrocamiento del Gobernador de Buenos Aires Federico Martínez de Hoz, en Walter, 1987, cap.8 Sobre el régimen fraudulento del gobierno de Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires, ver Béjar, 1997. Sobre el Iriondismo santafesino de la década del treinta, ver Piazzesi, 1997; y Macor, 1997.

⁴⁸ ver Torres, 1943; y Roldán, 1946.

⁴⁹ ver las denuncias de Víctor Guillot en Tribuna Libre, reproducidas en Oyhanarte, 1932, 1988, 95.

⁵⁰ ver Folino, 1983. Acerca del popular personaje Tucumano Juan Luis Nougués, ver Páez de la Torre, 1975. Las afinidades populistas de este gobernador las habría heredado de su tío abuelo el Gobernador Miguel M. Nougués, quien al frente del Club del Pueblo había incorporado las Asociaciones de Artesanos a la política Tucumana.

⁵¹ ver Cattáneo, 1939 y 1959 y carta del Presidente de la Liga Patriótica Manuel Carlés a Marcelo T. de Alvear (exposición del Diputado Nacional por Tucumán Eudoro D. Aráoz, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 14 y 15-VI-1934, Reunión n.17, p.458). Con respecto al cuartelazo, la

patriada y el culto al coraje en la rebelión de Paso de los Libres, dirigida por el Coronel Gregorio Pomar, en la década del 30, ver Sarlo, 1988, 207-215.

⁵² Sobre los duelos a partir de 1940, ver Varangot (1972).

⁵³ ver Delaney, 1996; y Lindstrom, 1997. Para visualizar la emergencia de una nueva burguesía, ver Ortiz, 1955; Sautu, 1968; Korol y Sábato, 1990, 21-22; Schvarzer, 1991 y 1996; Di Tella, 1993; y Rocchi, 1996.

⁵⁴ ver García Molina y Mayo, 1985, 69; Nascimbene y Neuman, 1993, 119; Rock, 1993, 119; y Spektorowski, 1990, 1994. Para la crisis hegemónica y el golpe militar, ver Nun, 1966. Asimismo, ver Falcoff y Dolkart, 1975; y Barletta y Béjar, 1988. Para medir la intensidad de la movilidad social que se dió en las décadas del 10 y del 20, vis à vis la escasa circulación de elites existente en ese entonces, habría que evaluar la intensidad de los mercados inmobiliarios urbanos y rurales o de lo contrario la movilidad ocupacional comparando parejas de padres e hijos. A propósito de las metodologías implementadas en investigaciones de movilidad social, ver las críticas de Mann (1994) a Erikson y Goldthorpe (1992). En la década del 30, los grandes palacios de la gran burguesía terrateniente argentina, localizados en la ciudad de Buenos Aires, se vendieron al estado o a los estados extranjeros como sedes de sus representaciones diplomáticas (ver entre otros el caso de la Quinta Unzué, adquirido por la Presidencia; el Palacio Paz, vendido al Círculo Militar; el Palacio Anchorena, vendido a la Cancillería; el Palacio Errázuriz (yerno de Diego de Alvear), vendido al Museo de Arte Decorativo, por influencia del propio Ministro del Interior Matías Sánchez Sorondo; el palacio de Federico de Alvear, vendido a la embajada de Italia; el Palacio Pereda, vendido a la Embajada del Brasil; el Palacio Ortiz Basualdo, a la Embajada de Francia; y el Palacio Bosch, a la Embajada Norteamericana (Fernández Lalanne, 1996, 129; y Cavaleri, 1996). Cavaleri (1996) atribuye gran parte de la alta movilidad social existente en Buenos Aires a la desacumulación de riqueza practicada por la oligarquía terrateniente en París.

⁵⁵ Sobre la presidencia de Agustín P. Justo, ver García Molina y Mayo, 1987.

⁵⁶ Esta regla fué formulada por Panebianco, 1990, 125. El MRRB era el Movimiento Revisionista Radical Bonaerense compuesto por Balbín, Leloir y Cetrá. El ACOR era la Agrupación Cívica de Orientación Radical compuesta por San Juan Miguel, González Ledo, el indio Militino Campos, Abel Ross, el Cap. Olguín, el Tte. Cnel. Alvarez Pereira, Piacentini, Lorenzo, Felipe Montes de Oca, etc. El ACRA era en Santa Fé la Agrupación de Centros Radicales Alem presidida por Cello (Persello, 1996, 109). El Comité Universitario estaba integrado por Santiago Nudelman, Hasperúe Becerra, Foulliet, Constanzó y Maya (hijo del periodista Entrerriano Antonio Maya).

⁵⁷ por minoría intensa debe entenderse una minoría que no es sólo numérica sino que conlleva intensidad ideológica (Carrizo, 1996, 17, nota 29). Para el análisis del Partido Comunista en Argentina durante la Década Infame, ver Schenkolewski-Kroll, 1997. Klein, Marcus (2002): Sobre la radicalización del Nacionalismo argentino durante la Década Infame y la Legión Cívica, ver Klein, 2002.

⁵⁸ General Francisco Bosch; Coroneles Cattáneo, Kennedy y Pomar; y Mayor Regino Lezcano.

⁵⁹ Exposición del Diputado Nacional E. Dickman, Diario de Sesiones, 1932, VII, Reunión n.81, 22-XII-1932, p.549; y el famoso debate entre Lisandro de la Torre y Monseñor Franceschi. Sobre el rol de la revista Criterio en esta época, ver Rapalo, 1990.

⁶⁰ ver la exposición del Diputado Nacional Silvano Santander en oportunidad de debatirse la derogación de la Ley de Residencia, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1946, I, 602. Sobre las limitaciones de la ideología en el sindicalismo anarquista temprano, ver Thompson, 1984. Sobre sindicatos y partidos obreros durante la década infame, ver Matsushita, 1986; y Campo, 1989. Y sobre las matanzas obreras en la Patagonia, ver Bayer, 1972 y 1974. Sobre la conducta política del Gobernador Manuel Fresco, como antecedente del gremialismo peronista, ver Reitano, 1992; y Pastoriza, 1997.

⁶¹ En un extenso informe secreto elevado en 1934 al Presidente Justo, se dice que el ex-Tte. Cnel. Atilio Cattáneo cree: "...que con el prestigio adquirido como 'leader revolucionario' y un poco de audacia desinteresada arrollará, con Abalos, a los políticos que detentan la dirección partidaria. Cattáneo es un hombre de gran ambición. Practica la política común del Yrigoyenismo. Desde abajo hacia arriba. Se codea con la gente humilde. Ayuda con dinero a diario a los que llegan hasta su casa, o lo pechan en la calle; en reuniones con amigos en todas las confiterías él siempre paga; así sean personas pudientes sus contertulios...Cattáneo es muy querido de verdad en todos los grupos de pueblo del radicalismo. Andando por la calle o penetrando a un café, encuentra sinnúmero de personas que lo saludan con respeto y cariño, o se le acercan para inquirir de sus labios una palabra de esperanza y consuelo, que Cattáneo, no escatima con todo optimismo en dársela. Invita a su mesa generosamente, siendo su opinión (cuando del futuro del radicalismo se habla) indiscutida y apoyada. Todo aquel Radical que haya participado en alguna aventura sediciosa, la relata, para que Cattáneo lo recuerde y sea, en un mañana, premiado con alguna pitanza presupuestívora" (Informe secreto de un servicio de Inteligencia del gobierno de Justo, AGN, Archivo Justo, Caja 99, Doc. n.44, fs.60-68). Debo esta última información a la generosidad del Prof. Carlos A. Mayo. Según dicho Informe secreto, Cattáneo poseía en sociedad con el ex-Mayor Nicolás Terrera un puesto de frutas en el Mercado de Abasto y estaba próximo a heredar --si la mala relación con los cuñados lo permitía-- una fortuna de su suegro Rossi, propietario de la fábrica de aceite "La Liguria", en Resistencia, Chaco.

⁶² en las elecciones internas de Córdoba, Santa Fé y Buenos Aires, las candidaturas concurrencistas de Garzón Agulla, Mosca y Boatti, triunfaron sobre las respectivas candidaturas intransigentes de Sabattini, Cello y Pueyrredón (Persello, 1996, 104).

⁶³ Para una visión revisionista de la política seguida por Alvear vista por un dirigente político que lo había acompañado por muchos años, ver Goldstraj (1957). Sobre la presidencia de Alvear, ver Alonso, 1983. A propósito de la llamada abstención activa, Isaías Amado, ex-Presidente del Comité de la Juventud de La Plata en tiempos del Acuerdo Roca-Mitre y ex-Convencional por Buenos Aires en 1916, elevó una carta a Julián Maidana, donde le decía: "...la abstención enervante para unos y que disgrega a los otros; aprovechada en grande por el socialismo que evoluciona con plena conciencia de sus designios, sin que pierdan los partidos conservadores que recogen las migajas; abstención que empobrece al partido radical, hundiendo en la miseria a los afiliados, sin provecho, como si pudiera crearse algo estable sobre la base del odio y de los parias; que levanta antipatías en el país, urdiendo conmociones cuando más ansiada es la tranquilidad; que lo aleja del comicio con pérdida de la seguridad de acción, que da la enseñanza en la práctica del voto; abstención inconstitucional, por

antidemocrática; demoledora de la nacionalidad porque se niega la mayoría del pueblo a elegir los mandatarios de un gobierno representativo" (Isaías Amado a Julián Maidana, Río Cuarto, 4-VI-1934, AGN, Archivo Justo, Leg.9). Debo esta última información a la generosidad del Prof. Carlos A. Mayo.

⁶⁴ ver Furet, 1995, cap. VIII. Es preciso tener en cuenta que cuando Alvear residió en París frecuentaba el contacto con Clemenceau, Poincaré, Foch, Romain Rolland, Gabriel Anneteau, Lloyd George, etc. (Debo esta valiosa información a la gentileza del que fuera Secretario privado de Alvear, Guillermo D'Andrea Mohr, quien fué depositario de su archivo, por decisión de su viuda Doña Regina Paccini. Actualmente dichos papeles se encuentran en el Instituto Torcuato Di Tella).

⁶⁵ para este período, ver Noel, 1996.

⁶⁶ sobre el Camperismo Tucumano, ver Cerviño de Rodríguez, 1994.

⁶⁷ autor de *El Indio del Desierto* (1928) y *La Lanza Rota* (1954). Fué Secretario privado de su tío abuelo segundo el General Julio A. Roca, luego de su segunda presidencia. Para mayores datos biográficos, ver Schweitzer de Arzac (1993).

⁶⁸ Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, 1933, I, Reunión n.16, 22 de Junio de 1933, p.796.

⁶⁹ Esta observación de Schoo Lastra, que ironizaba acerca del contraste entre la extrema delgadez de algunos Conservadores y la obesidad de algunos Socialistas, se fundaba en la autorizada opinión del Diputado Socialista Enrique Dickmann.

⁷⁰ Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.16, 22 de Junio de 1933, p.796.

⁷¹ Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.16, 22 de Junio de 1933, p.796.

⁷² Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.16, 22 de Junio de 1933, p.796.

⁷³ Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.16, 22 de Junio de 1933, p.796.

⁷⁴ Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.16, 22 de Junio de 1933, p.797.

⁷⁵ Diario de Sesiones, Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.16, 22 de Junio de 1933, p.797.

⁷⁶ ver Rouquié, 1994, 68. En el caso de Scalabrini Ortiz, era hijo del naturalista napolitano Pedro Scalabrini y de Ernestina Ortiz, sobrino carnal de Toribio Eduardo Ortiz, quien había colaborado con su padre en la fundación museológica iniciada por el Gobernador de Entre Ríos E. Racedo, y primo lejano del escritor Manuel Gálvez (Falcoff, 1972, 79). Por este motivo colijo que los Ortiz fueron

Urquicistas y guardaban rencor a los Jordanistas. Los Ortiz descendían de Toribio Ortiz, fundador de la Villa de Concordia, y de Juliana Latorre y Quintana. Esta última, era hija del aragonés Antonio Latorre y de María Quintana, quien a su vez había sido criada como hija de padres no conocidos por el Coronel Nicolás de la Quintana (Cutolo, V, 208 y 213; y Jáuregui Rueda, 1989, ítem 7135). A pesar de provenir tanto Scalabrini como Gálvez de ascendientes de apellido Quintana, dichos ascendientes no eran parientes entre sí. Enrique Ruiz Guiñazú descendía por vía materna de Fernando Guiñazú de Altamira, oriundo de Traslasierra, región de Córdoba asolada por la Montonera; y de Dolores Silva Zavaleta, viuda del Dr. Marco Avellaneda, el mártir de Metán, e hija del Gobernador de Tucumán José Manuel de Silva Helguero y de Tomasa Zavaleta y Ruiz Huidobro (Díaz de Molina, 1947; Quien es Quien, 1950, 523; Falcoff, 1972; y Cutolo, VI, 494). Leopoldo Lugones era hijo de un terrateniente del norte de Córdoba, que había perdido sus tierras con la crisis del 90, y nieto del Coronel Lorenzo Lugones, guerrero de la Independencia y de las Guerras Civiles (Cutolo, IV, 295; y McGee Deutsch, 1986, 41). Los hermanos Irazusta heredaron sus propiedades rurales en Entre Ríos, de su ancestro Julián Echazarreta, nacido en Buenos Aires en 1816, pero radicado en Gualaguaychú, y perdieron gran parte de las mismas en la crisis agraria de la primera post-guerra (Cutolo, II, 633; y McGee Deutsch, 1986, 197). Julián Echazarreta era hijo de Francisco de Echazarreta, natural de Buenos Aires, y de Susana de Lamas, desposados en 1812, y esta última hija de José Lamas y de María Josefa Aguilar, vecina de la Cañada de Morón (Vázquez Mansilla, 1988, ítem 2472). Los Echazarreta eran Urquicistas y es muy probable que hayan sufrido el embate del Jordanismo (referencia personal del Dr. Carlos Echazarreta). Matías Guillermo Sánchez Sorondo era hijo de Matías Sánchez, un próspero empresario de origen sanjuanino y de filiación política Juarista, que se enriqueció con la provisión de durmientes a los Ferrocarriles Ingleses, pero que quebró con la crisis del 90, y yerno del Gobernador Julio A. Costa, cuyo hermano mayor el caudillo conservador Carlos Costa había sido ultimado en el Bragado (Pcia. de Buenos Aires), a fines del siglo pasado, por una partida política de filiación Radical. Por último, Ricardo Rojas era hijo del célebre Gobernador de Santiago del Estero Don Absalón Rojas. La designación de Absalón Rojas como Gobernador, a juzgar por una postrera e interesantísima carta de Félix Santillán (h) a Julio Roca, "...Santiago se estremeció, y las familias distinguidas huyeron de los bailes y de las diversiones públicas" (Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 4-VII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.70). Esta reacción de la elite Santiagueña habría ocurrido

"...no porque Rojas no fuese un sujeto bien, quizás mejor que muchos, sino porqué las sociedades buscan sus centros y quieren ser gobernadas por personas que dignifiquen a la sociedad culta que es el sensorio de los pueblos civilizados" (Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 4-VII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.70).

Sin embargo, la elite Santiagueña soportó, a juicio de Santillán,

"...diez años el gobierno de Rojas, pero llevando en el seno de su sociedad un odio profundo a mi querido general, porqué se sentía humillada con un mandatario que no le hacía 'aire' (como aquí se dice) ni era de su centro social...Era pardo!" (Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 4-VII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.70).

Estos odios y estos racismos, aunque imprudentes, según Santillán, "...corren, se agigantan, y llegan empujando pasiones hasta el crimen" (Félix Santillán (h) a Julio A. Roca, Santiago del Estero, 4-VII-1895 (AGN, Sala VII, Archivo Roca, Leg.70).

⁷⁷ Newton (1995) sostiene que en la década del 30 el antisemitismo argentino se enraizó "...en sectores sociales no pertenecientes a la elite" (Newton, 1995, 170). Para una lectura crítica del libro de Newton, ver Senkman, 1994.

⁷⁸ El Diputado Nacional Dionisio Schoo Lastra nos revela que en 1933 en la Cámara de Diputados existían quince (15) Diputados que eran ciudadanos naturalizados (Exposición del Diputado Nacional Dionisio Schoo Lastra, Diario de Sesiones, Cámara de Diputados, 1933, I, Reunión n.16, 22 de Junio de 1933, p.795). En muchos casos de hijos de italianos: José Ingenieros, Emilio Ravignani, Diego Luis Molinari, Antonio Zinny, Antonio Berni, Coriolano Alberini, Clemente Ricci, Emilio Coni, Jacinto Oddone, Nicolás Romano, Sebastián Marotta, Juan Antonio Solari, Mauricio Yadarola, Leónidas Barletta, Emilio Pettoruti, Soldi, Mantovani, Mastronardi, los hermanos Finocchietto, etc.; en otros casos de hijos de españoles: Rafael Bielsa, Rodolfo Puiggrós, Alejandro Posada, Francisco y José Luis Romero, José Arce, etc.; en otros casos de hijos o nietos de judíos: Ricardo Levene, Roberto Levillier, Alberto Gerchunov, Carlos Grumberg, Gregorio Bermann, Carlos Alberto Leumann, Samuel Eichelbaum, Marcos Satanowsky, etc; en otros de franceses: Ricardo Caillet-Bois, Abel Chaneton, Osvaldo Loudet, Leopoldo Marechal, Alberto Rougés, Héctor Lafaille, Edmundo Guibourg, etc; y en otros casos de armenios: Narciso Binayán. Ver Montserrat, 1993, 83-120; y la polémica de Ricardo Levene a propósito del Discurso de Incorporación de Carlos Ibarguren a la Junta de Historia y Numismática (La Nación, 28/9/1930, citado en Quattrocchi de Woisson, 1987, 57). Levene y Levillier, pese a sus orígenes hebreos, integraron una Comisión de Cooperación Intelectual, convocada por la Embajada Alemana, conjuntamente con Gustavo Martínez Zuviría, (a) "Hugo Wast", el ex-Ministro del Interior Matías Sánchez Sorondo, el Premio Nobel Bernardo Houssay, el criminalista Juan P. Ramos, los médicos Mariano Castex y Gregorio Aráoz Alfaro y el historiador Carlos Ibarguren (Caras y Caretas, 1-VIII-1936, n.1974; cit. en Newton, 1995, 147).

⁷⁹ para el caso Alemán, ver el antisemitismo que engendró en Alemania los éxitos académicos del físico Albert Einstein (Feuer, 1992, 12-13). Newton (1995) menciona entre los antisemitas a un numeroso grupo de publicistas católicos entre los cuales figuraban los sacerdotes Virgilio De Filippo, Julio Meinvielle y Gustavo Franceschi (Newton, 1995, 171). Para el caso Uruguayo, ver Fernández Artucio (1940); y Bouza y Mautone (1941).

⁸⁰ Turner, 1958, 187; citado en Rock, 1993, 76.

⁸¹ Médico, sirvió en la Cruz Roja de Francia en el frente aliado en la Primera Guerra Mundial. Director de Bandera Argentina (1932-40) y de La Nueva República (1927-30). Era hijo de Feliciano Carulla y de Gila Quintero (Quien es Quien, p.142).

⁸² Rock, 1993, 98. A propósito de las causas del antisemitismo argentino, ver el impacto que la trata de blancas regentada por judíos pudo haber tenido en dicho fenómeno, en Glickman (1982).

⁸³ Nacido en La Plata en 1894, hijo de Guillermo Doll y Marcela Aniza. Ministro de Hacienda en la Intervención a Tucumán en 1943, e Interventor en la Universidad Nacional de Cuyo en 1944 (Quien es Quien, p.208; y Galasso, 1989). Para más detalles de su biografía, ver Quattrocchi-Woisson, 1995, 92-94, 174-176 y 187-189.

⁸⁴ Ver Doll (1939b). En Doll (1939a), un capítulo se titula "Nosotros, Peligro Mortal para la

Judería" (Doll, 1939a, 11). A tal extremo llegaba el anti-semitismo, que en muchos casos se dió una suerte de auto-discriminación. El Diputado Nacional Enrique Dickman llegó a negar su judaísmo y sus raíces rusas (Dickmann, 1949, 43 y 88; citado en Adelman, 1992, 225, nota 44). A propósito de las causas del antisemitismo argentino, ver el impacto que la participación de judíos en los acontecimientos de la llamada Semana Trágica de enero de 1919 pudo haber tenido en dicho fenómeno (ver Rock, 1971-72; Godio, 1973; Sofer, 1982; Bilsky, 1984, cap. V; Rivanera Carlés, 1986; y Díaz Araujo, 1988). Para una bibliografía comentada sobre la Semana Trágica, ver Metz, 1990.

⁸⁵ Director de Criterio en 1931 y de la Legión Cívica, prologuista de algunos libros de Doll.

⁸⁶ Osés, 1936; citado en Buchrucker, 1987, 157.

⁸⁷ hijo pre-matrimonial de Domingo Torres, quien se graduó de Ingeniero en Alemania a los 21 años; y marido de Victoria Sal. Su padre Domingo Torres, luego de haber reconocido a su hijo José Luis, contrajo matrimonio con María Elvira Posse Ceballos (Posse, 1993, Cuadro VII, p.176). José Luis Torres fué Ministro del Gobernador de Tucumán Juan Luis Nougués (ver Páez de la Torre, 1975).

⁸⁸ Torres, 1945, 87-88.

⁸⁹ Los Bemberg, pese a su arraigo centenario en la elite porteña, fué tomado por José Luis Torres y la elite nacionalista, debido a sus orígenes hebreos, como chivo expiatorio de las culpas del gran capital. A propósito de esta circunstancia, debe recordarse que el primer Otto Bemberg actuó en el siglo pasado en la contratación de los empréstitos para financiar la Guerra del Paraguay (ver Pomer, 1968).

⁹⁰ Torres, 1973, 96.

⁹¹ Torres, 1973, 89.

⁹² como en los gobiernos de la Confederación Argentina (Rosas en 1852 y Derqui en 1862), de Tejedor (1880), de Juárez Celman (1890), de Quintana (1905), o de los golpes de estado de 1930 con Uriburu, 1942 con Ramírez y Farrell, 1962 con Guido, 1966 con Onganía y 1976 con Videla. Luna (1983) sostiene que cada relevo interno de una dictadura militar equivale a un escándalo. Para probar ello recuerda "...la sustitución de Ramírez por Farrell en 1944, la de Lonardi por Aramburu en 1955; la de Onganía por Levingston en 1970; y la de éste por Lanusse en 1971; la de Videla por Viola, la de éste por Galtieri, y la de Galtieri por Bignone" (Luna, 1983, 172).

⁹³ como durante el Modernismo (Sáenz Peña), el Concurrencismo (Justo-Ortíz), la Revolución Libertadora (1955) y el llamado Proceso (1976).

⁹⁴ En el caso de la Revolución de 1930, la Alianza de la Democracia Progresista con el Socialismo enfrentó a la Concordancia con la proscripción del Radicalismo. En el caso de la Revolución Libertadora, la UCRI desafió a la UCRP con la proscripción del Peronismo. En el caso del golpe contra Frondizi, la UCRP desafió a UDELPA también con la proscripción del Peronismo. Y en el caso del llamado Proceso la salida electoral se precipitó sin condicionamientos alguno debido a un factor exógeno, la derrota militar frente a Gran Bretaña.

⁹⁵ como fueron los casos de Buenos Aires y Cuyo en 1874, de Buenos Aires en 1890, y de

Córdoba en 1955.

⁹⁶ como fueron los casos: en 1892, 1898 y 1904 con la abstención revolucionaria del Radicalismo, en 1932 con la proscripción del Radicalismo, y en 1958 y 1963 con la proscripción del Peronismo.

⁹⁷ como fueron los casos de 1946, 1973 y 1983.

⁹⁸ ver la institución de la Concordia entablada entre las facciones integrantes de los Cabildos coloniales. Para la naturaleza pactista del poder que padecía el pensamiento político Rosista, ver Ternavasio, 1995. Para una noción crítica de la naturaleza de los pactos políticos, ver Hagopian, 1990; Remmer, 1991; y Carrizo, 1997.

⁹⁹ ver Barbosa, 1988.

TOMO VI

Capítulo 4

El proceso Bonapartista en Argentina. El peronismo y la génesis de una ruptura política (1943-1955)

A partir de la hegemonía intelectual del funcionalismo, la inestabilidad política de las repúblicas Latinoamericanas fue estudiado desde la perspectiva de la cultura electoral. Para Germani (1963, 1978), las políticas del peronismo fueron posibles en Argentina debido en primer lugar al origen geográfico y la extracción social y cultural de los migrantes internos; y en segundo lugar por no haberse agotado aún las estructuras económicas, políticas y sociales del Antiguo Régimen.¹ Sin embargo, una década más tarde, replicando a Germani pero en la misma suerte de estudios de política electoral, Halperín Donghi (1975) llegó a probar que la mayoría de los migrantes internos procedía de las zonas rurales más modernas.²

Pero en una línea de investigación más próxima a los estudios acerca de la cultura política, numerosos autores sostuvieron que las políticas progresivas fueron obstruidas por no haberse erradicado las tradiciones y fracturas pre-modernas, pre-industriales, pre-capitalistas y pre-burguesas y por haberse fundado en los poderes carismáticos.³ Los poderes carismáticos serían de origen sobrenatural y corresponderían a una concepción descendente del poder, del gobierno y del derecho.⁴ En esta corriente de pensamiento ciertos autores,⁵ sostuvieron que las políticas del Peronismo venían a combatir el mito democrático y unificador del crisol de razas, pues pretendía hegemonizar en la memoria colectiva un nuevo momento originario o mito de origen, encarnado en el "Cabecita Negra", al cual se lo hacía descender míticamente del gaucho, personificado en el héroe Martín Fierro, "raza" mestiza que había sido eclipsada y finalmente desplazada desde fines del siglo XIX por la masiva inmigración Europea.⁶ Para la imposición de esta nueva mitología o edad de oro se habría puesto en escena una batería simbólica (marchas, escudos, emblemas) y un calendario de rituales (efemérides) alrededor de una figura salvífica o providencial, es decir el dilema del Rey Cautivo (prisión de Perón en Martín García) y se habrían implantado en forma monopólica intensivas innovaciones en el campo de las comunicaciones (radiofonía).⁷ Para justificar esta prédica se habría buscado instaurar el mito del complot Sinárquico o de las fuerzas ocultas del dominio imperialista.⁸ Sobre este último mito, poco estudiado, se habría montado posteriormente la asociación con la magia ocultista de López Rega y la Logia P-2.⁹ Otros autores concluyeron que la política de Perón respondía lisa y llanamente a la ideología fascista, la cual tomaba como modelo los mitos y rituales militaristas de la antigüedad romana.¹⁰ Los mitos anti-liberales, anti-capitalistas y anti-imperialistas de un Peronismo revolucionario, que se patentizaron por un lado en la desecularización y resacralización del estado nacional, en la deslaicización de la sociedad civil (pensamientos, costumbres y planes y

programas educativos), y en la estatización y burocratización del movimiento obrero; y por el otro en la tergiversación y desajuste respecto de los principios y prácticas discursivas de la modernidad republicana,¹¹ y en las concesiones otorgadas a la burguesía nacional y al imperialismo norteamericano, las cuales habrían obedecido a la circunstancia final de intentar reproducir mecánicamente la experiencia Yanqui en un país semi-industrializado.¹²

Sin embargo, autores como Murmis y Portantiero (1971), Gaudio y Pilone (1983 y 1984) y Matsushita (1986), probaron que la burocratización de la movilización obrera y del sindicalismo peronistas tuvieron su origen en la década del 30 y no en el 45.¹³ Finalmente, para Waisman (1987), a partir del 45 se inicia en Argentina una etapa de capitalismo autárquico, y para Andrenacci (1997), lo que denomina un estado tutelar. Ultimamente, en la base del conflicto político organizado, Rokkan (1970), Panebianco (1982, 1988) y von Beyme (1995) hallaron la combinación, superposición e intersección de fracturas pre-modernas (genéticas: geográficas, religiosas, y estamentales), modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales), y post-modernas (éticas y estéticas).¹⁴ Y Ross (1995) explicó las crisis o conflictividades políticas de una sociedad como función inversa de la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados) y función directa de la intensidad de su desarrollo y diferenciación económica, política y social (teoría de la complejidad política).

Estas numerosas hipótesis, metodologías y modelos de análisis estratégicos nos han sugerido formular una extensa serie de reflexiones, no siempre susceptibles de ser aclarados, íntimamente vinculados entre sí, y en cuya pertinencia habrá de residir gran parte del éxito de este trabajo. Las fracturas pre-modernas centradas en las problemáticas étnicas y en el eje centro-periferia habrían contribuido a congelar la fractura moderna de la clase social, haciéndole perder el dinamismo. La continua adaptación de innovaciones científico-tecnológicas y las permanentes crisis o rupturas políticas que dieron nacimiento a sucesivas olas progresivas y contraolas regresivas, a sucesivas democracias participativas y populares pero no competitivas, y a democracias competitivas pero restringidas o no participativas, habría obedecido a la recepción de nuevos paradigmas ideológicos y nuevas estrategias discursivas.

La ola política peronista (1943-1955) habría sido el reflejo de un ciclo ideológico, de las fases expansivas y depresivas de las ondas largas de Kondratieff, de las luchas de clases, de la transición de la dependencia Británica a la dependencia Norteamericana, y del desajuste entre la velocidad de modernización de los subsistemas tecno-económicos y la inercia o atraso relativo de los subsistemas socio-institucionales. La naturaleza moderadora o dominante de las coaliciones autoritarias y el tipo e intensidad de resistencia y/o colaboración prestada por los partidos políticos, y el momento elegido para operar la salida electoral habría incidido en la índole continua o discontinua de las salidas electorales convocadas por las coaliciones autoritarias (1946, 1951).

Y las coaliciones políticas autoritarias que protagonizaron la quinta involución o contraola regresiva (1930-1955) revelarían la influencia ideológica externa, la inercia o persistencia de tradiciones pre-modernas, pre-burguesas y pre-republicanas, y el inicio de una decadencia política, económica y cultural que perduró hasta fines del siglo XX y que había seguido a una etapa de auge iniciada en 1880. La inercia de las tradiciones pre-modernas y pre-republicanas (dictatoriales), en el contexto de una crisis orgánica del capitalismo, habrían determinado la naturaleza moderadoras o dominantes de las coaliciones autoritarias que dieron los golpes de 1943 y 1955.

Para elucidar algunos de estos interrogantes y calibrar la inercia de los legados y tradiciones

pre-modernos, pre-republicanos, dictatoriales y totalitarios así como la combinación, superposición e intersección de fracturas genéticas (centro-periferia, campo-ciudad, iglesia-estado, clases media y alta, criollos-inmigrantes, y pobres-ricos), es preciso investigar previamente:

- a) la mayor o menor gravitación de la pluralidad de fracturas pre-modernas y modernas (teorías de los vínculos reforzantes y cruzados) en su correlación con la creciente conflictividad interna;
- b) la crisis de representación y gestión políticas manifestada en el pasaje de un clientelismo partidario a otro de índole sectorial;
- b) la potencialidad de las minorías intensas,¹⁵ integrantes de la coalición autoritaria moderadora, que dieron lugar al primer momento del golpe: GOU (Grupo de Oficiales Unidos), FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina), Junta Renovadora de la Unión Cívica Radical, y Acción Católica;¹⁶
- d) las posiciones políticas de los dirigentes Radicales, Conservadores, Socialistas, Comunistas y Trotskyistas respecto a la crisis mundial, discriminándolos en aliadófilos y neutralistas;¹⁷
- y e) la manipulación de innovaciones tecnológicas (ondas hertzianas) aplicadas a las comunicaciones (radio-telefonía),¹⁸ en perjuicio de los subsistemas políticos (estructuras movilizadoras y electorales).¹⁹

Un punto final a un "juego imposible".

La coalición autoritaria que dió el golpe de 1943, habría sido la que puso punto final a un "juego imposible" iniciado en 1930,²⁰ y la que acentuó la contraola regresiva iniciada en dicha fecha.²¹ La motivación de esta coalición autoritaria habría sido de naturaleza moderadora y el corolario de una revancha de un sector del populismo Yrigoyenista, representado por el nacionalismo corporativo Peronista, contra la Revolución de 1930 y su secuelas.²² A raíz del tercer momento del golpe de 1943,²³ el gobierno militar llamó a elecciones triunfando el Movimiento Justicialista por sobre la coalición política opositora denominada Unión Democrática.²⁴ En el origen de su derrota electoral se hallaba la división producida durante la Guerra Mundial entre neutralistas y aliadófilos, el rol colaboracionista con el golpe de estado por parte de la Iglesia Católica,²⁵ los mitos obreristas y nacionalistas,²⁶ la perplejidad ocasionada en la elite burocrático-militar por la derrota del Nazismo,²⁷ y la transición de la dependencia Británica a la dependencia Norteamericana.²⁸

La división entre neutralistas y aliadófilos.

En el seno del Radicalismo, como bien sostiene Tcach Abad (1991), la división entre neutralistas y aliadófilos operó "...como un agente catalizador del debate sobre la identidad radical".²⁹ Este mismo debate se acentuó en 1944 y llegó a forjar una entrevista entre Perón y el ex-Gobernador de Córdoba Amadeo Sabattini, quien gozaba de un inmenso prestigio popular.³⁰ Perón, sin ser afiliado al Radicalismo, pretendió que Sabatini lo acompañara en una fórmula conjunta, ofreciéndole el segundo lugar en dicho binomio.³¹ De resultas de dicha entrevista Perón se convenció que para no tener que otorgar salidas electorales semejantes a las que se vió obligado a dar el Gral. Uriburu en 1931 y 1932, debía reforzar su asimetría real conformando su propia base política. Para lograr ello, Perón intentó crear subdelegaciones de la Secretaría de Trabajo en todo el interior del país. Pero a esta estrategia se

opuso terminantemente la Corte Suprema, con el dictámen del Procurador General de la Nación Juan Alvarez, declarando inconstitucional dicho proyecto.³²

A partir del impacto ideológico de un pensamiento, una mitología y una estrategia discursiva nacionalista, anti-liberal, anti-sionista, anti-Reformista y neutralista (Maurras, Schmitt), formulado por las denominadas minorías intensas (e.g.: FORJA, GOU) nacidas en la llamada Década Infame,³³ y en medio de un fuerte proceso de migración interna provocado por una industrialización forzada, fruto de la guerra, se gestó una amplia movilización popular (17 de Octubre), que le otorgó al Peronismo un origen de clase, y que culminó en un triunfo electoral.³⁴

En esa época, los desacuerdos sobre problemas contemporáneos (Guerra Civil Española y Guerra Mundial), son el punto de partida para politizar las divergencias sobre la memoria histórica remota, materializada en las obras de Carlos Ibarguren, Rodolfo Irazusta, Ernesto Palacio y Gustavo Martínez Zuviría. Y el punto de llegada o destino serían los desacuerdos sobre el discurso o contenido de los mitos de origen, pues el Peronismo también aspiraba a instaurar un nuevo momento original.³⁵ Estas divergencias concretaron una profunda ruptura en la continuidad del discurso sobre el pasado histórico lejano, y consiguientemente tal como lo enuncia Candau (2001), se fue gestando una lenta deslegitimación de los depositarios del poder político de la denominada Década Infame.

El shock político o sustitución de fracturas de 1945.

La crisis de 1945 y su resolución en Febrero de 1946 habrían constituido lo que Mainwaring (1992) y Valenzuela (1992) titulan una transición por transacción; o lo que Goertz y Diehl (1995) denominan un shock político o sustitución de fracturas, que marcaba el fin de una antigua fractura moderna (Radicalismo versus Conservadorismo) y señalaba el comienzo de una nueva fractura (peronismo versus anti-peronismo), producto del desmembramiento de la coalición electoral derrotada. Para estudiar esta sustitución de fracturas habría que pasar a analizar quiénes, cuántos y de qué vertiente fueron los dirigentes Radicales, Conservadores, Socialistas, Comunistas y Trotskystas que desertaron o evolucionaron hacia el Peronismo.³⁶ Para Llorente (1977), la mayoría de los dirigentes Radicales --disidentes con la conducción del partido-- que desertaron pertenecieron al núcleo Alvearista y no al Yrigoyenista.³⁷

El triunfo electoral del Peronismo derivó en una democracia-popular altamente participativa pero escasamente competitiva.³⁸ Su política bonapartista, proteccionista,³⁹ corporativa (restrictiva de las libertades de asociación y agremiación),⁴⁰ y represiva (limitadora de las libertades de conciencia, opinión, cátedra y pensamiento de las minorías opositoras), se afirmó merced a acciones como el juicio político a la Corte Suprema, y estrategias tales como el control de los medios masivos de comunicación,⁴¹ la aproximación nacional-mercantilista a la modernización científica y tecnológica,⁴² el monopolio de la beneficencia pública;⁴³ la Tercera Posición en política exterior;⁴⁴ la competición geopolítica por el control de la Antártida y el Atlántico Sud;⁴⁵ la nacionalización o estatización de los ferrocarriles;⁴⁶ la estatización de los depósitos bancarios, el congelamiento de los alquileres urbanos y de los arrendamientos rurales y las confiscaciones o exacciones a grupos privados opositores.⁴⁷ Asimismo, sus políticas se afirmaron mediante estrategias de confrontación tales como la intervención a las Universidades Nacionales (con los denominados catedráticos "Flor de Ceibo"),⁴⁸ la reforma constitucional,⁴⁹ la enseñanza de la doctrina peronista en las escuelas,⁵⁰ la suspensión y clausura de más de un centenar de diarios,⁵¹ y la confiscación del periodismo opositor (La Prensa de Buenos Aires, y El Intransigente de Salta).⁵²

El Juicio Político a la Corte Suprema.

El juicio político incoado en 1946 contra la Corte Suprema, habría iniciado el pasaje de una competencia política con racionalidad democrática a una competencia con racionalidad hegemónica.⁵³ Este juicio se desató como fruto de una transacción por la cual se la eximía a las Fuerzas Armadas de toda culpabilidad en la caída o ruptura de los regímenes constitucionales; y en parte como represalia de la sentencia declarativa de inconstitucionalidad de las delegaciones provinciales de la Secretaría de Trabajo y Previsión, del 1 de Febrero de 1946.⁵⁴ Pero el juicio se fundó principalmente en las "claudicaciones y encubrimientos" que habrían significado las Acordadas dictadas con motivo de los golpes de estado de 1930 y 1943.⁵⁵ Con el fin de preservar la continuidad jurídica del estado, asaltado por la ruptura militar, y poder garantizar un retorno o transición pacífica al orden constitucional, la Corte Suprema de Justicia arguyó como doctrina para admitir la validez de los actos de los gobiernos militares las tesis del jurista canadiense Constantineau (1910, 1945), que diferenciaba los gobiernos de facto de los gobiernos usurpadores;⁵⁶ la doctrina de Herrfahrdt (1932),⁵⁷ y el fallo o acordada pronunciado en 1865 por la Corte Suprema, reconociendo la validez de una resolución dictada por el Gral. Mitre después de Pavón, en el breve interregno interino previo a su elección como Presidente.⁵⁸ Los defensores de la Corte ante el tribunal de justicia constituido por la Cámara de Senadores,⁵⁹ negaron que sus defendidos hubieren legitimado las revoluciones;⁶⁰ y argumentaron que la Corte no tenía facultades para legitimar, "...ni podía legitimar lo que no tenía ese carácter", y que

"...reconocer como válidos, de acuerdo con la doctrina defacto (Constantineau, Herrfahrdt), los actos que dicho gobierno realizara en interés general, no implica legitimar el llamado derecho a la revolución".⁶¹

La índole continuista de la transición democrática operada en 1946 la puso de manifiesto el Diputado Radical Ernesto Sammartino, uno de los diputados que integró el famoso Bloque de los 44, al alegar que se había tomado como chivo expiatorio a la Corte Suprema, en lugar de enjuiciar a los verdaderos autores de los golpes militares, ya que

"...por la misma causa que se invoca para el enjuiciamiento de la Corte Suprema habría que hacerle juicio político a todos los miembros del actual Poder Ejecutivo de la Nación. La bóveda de la República se desplomaría sobre Sansón, pero se desplomaría también sobre la cabeza de todos los filisteos".⁶²

Para justificar su acusación contra la Corte, los Diputados Nacionales del Bloque Justicialista mayoritario,⁶³ le imputaron a los integrantes de la Corte la decisión de impartir una justicia de clase.⁶⁴ El historiador Ernesto Palacio,⁶⁵ quien se había desempeñado como Ministro de Gobierno en San Juan, durante la dictadura Uriburista,⁶⁶ y pertenecía a la elite intelectual Nacionalista, sostuvo como Diputado Nacional que el principio de la soberanía popular

"...es más importante que una supuesta intangibilidad de la justicia, que es un principio capitalista y oligárquico y cuya profesión entre nosotros es un signo de colonialismo mental".⁶⁷

En la réplica a Palacio, y tras las críticas exposiciones de diversos Diputados Nacionales,⁶⁸ el Diputado Radical por Entre Ríos Silvano Santander dió a entender que mientras no se reformara la Constitución Nacional, incluyendo cambios que le imprimieran una orientación clasista (en este caso Waisman diría una orientación corporativa inclusivista), la Corte Suprema debía administrar justicia a la sombra del espíritu liberal de la Constitución, que tiene por dogma la división de poderes.⁶⁹

La reforma constitucional.

No bastando, para afirmar su políticas hegemónicas y corporativo-inclusivas, con el juicio político a la Corte, el gobierno justicialista recurrió a una reforma constitucional que, tal como lo caracteriza el trabajo de Carrizo (1996), impuso en Argentina la lógica del referéndum.⁷⁰ La Convención Constituyente de 1949, signada por los resabios nacionalistas de la post-guerra y por la reformulación y ampliación del rol del estado no fué el fruto consensuado de un pacto político sino el resultado de la imposición de una mayoría intensa.⁷¹ Los Convencionales Justicialistas Joaquín Díaz de Vivar y Arturo Sampay, fundaban sus argumentos en las tesis existencialistas de Carl Schmitt,⁷² las cuales hacían hincapié en las mayorías populares o plebiscitarias.⁷³ Fundado en la violación del régimen republicano de gobierno, el propio Presidente del Bloque de Constituyentes de la Unión Cívica Radical, Dr. Moisés Lebensohn,⁷⁴ debió cuestionar la legitimidad de la convocatoria, al sostener que

"...no existe separación de poderes cuando esos constituyentes son nombrados por el cuerpo político representativo del régimen y entre ellos se encuentran cuatro de los cinco jueces de la Corte Suprema integrando las listas".⁷⁵

Tampoco existió para Lebensohn el régimen federal de gobierno por cuanto ese cuerpo político

"...designa los candidatos a gobernadores, a miembros de las Legislaturas provinciales, y hasta a los senadores nacionales que han de investir la delegación del pueblo de las provincias".⁷⁶

Según el Convencional Radical Emir Mercader, la opinión pública tenía claro que el anteproyecto de Reforma Constitucional

"...lo hizo el Presidente de la República; lo reparten todas las oficinas del Estado, que dependen de la Presidencia de la República; lo difunden las radios al servicio de Informaciones de la Presidencia; y se lo imprime y pone a disposición de los Convencionales en nombre de la Presidencia de la República. Hay por lo tanto, muchas cosas contradictorias por encima de las cuales queda una sola evidencia: que en este momento está confundido el partido oficialista con el Estado y que es un Estado policial el que gobierna en nombre de un partido identificado perfectamente con el Estado mismo".⁷⁷

Lebensohn adjudicaba a esta Reforma Constitucional

"...Reelección presidencial, constitucionalización de la legislación represiva del régimen, culminación del proceso de centralización,...destrucción del sindicalismo independiente, avasallamiento de las universidades, humillación del régimen parlamentario, monopolio de la radio y del cine, restricción de la libertad de prensa, manejo discrecional de los fondos públicos y de los inmensos recursos sustraídos a la producción, absorción burocrática del control económico y financiero, reelección indefinida del jerarca".⁷⁸

Asimismo, Lebensohn se felicitaba, discrepando con su correligionario Jorge Albarracín Godoy, que la efigie de Perón presidiera las deliberaciones de la Convención Constituyente, pues era "...necesario que la historia sepa que una Constituyente convocada para prorrogar el mandato de un Presidente, deliberó a la sombra de su figura".⁷⁹ Estaba bien, según Lebensohn, que con la efigie de Perón a florera,

"...la voluntad de la mayoría...de imponer, como en los clanes primitivos, su sello, su marca, su designación, eliminando los sentimientos y los valores espirituales, unificadores de la colectividad democrática".⁸⁰

Posteriormente, con la Reforma Electoral de 1951, el gobierno Peronista, al decir de Carrizo (1996), institucionalizó el pasaje de la mayoría intensa hacia la unanimidad impuesta.⁸¹ Esta política, que vino a coincidir con la muerte de Eva Perón,⁸² instaló la lógica de la uninominalidad y dió lugar a que parte de la oposición pasara de estrategias de mera abstención electoral a las de conspiración revolucionaria.⁸³

La cuestión de la Libertad.

Más luego, en oportunidad de debatirse un proyecto de ley por el que se instituían premios al mérito en el arte, la ciencia y la técnica, el Diputado Nacional Santiago Nudelman sostenía que para estimular la producción intelectual era preciso resolver antes el problema de la libertad, consistente en las prisiones del filósofo Francisco Romero, el poeta Enrique Banchs, el educador Vicente Fatone, los historiadores Carlos Alberto Erro y Julio Aramburu y el periodista José Barreiro; el asunto de mil doscientos profesores de las universidades argentinas y de la Escuela Superior de Bellas Artes (Basaldúa, Spilimbergo, Larco, Butler, Berni, Castagnino, Soto Acebal, Falcini), "...exonerados por desafectos al régimen imperante";⁸⁴ y las persecuciones a las que fueron sometidos Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo, los hermanos José María y Juan José Castro y centenares de hombres y mujeres de la ciencia y del arte, a quienes por negarse a jurar por la nueva Constitución, no afiliarse al partido gobernante o atreverse a boicotear el luto obligatorio se les negaba el certificado de buena conducta.⁸⁵ Entre los exonerados de la Universidad figuraban los Dres. Pawlowsky y Romano y el Premio Nóbel Bernardo Houssay

"...desarraigado de sus cátedras, deambulando por el mundo, que se disputa el privilegio de que quiera dirigir los mejores laboratorios del extranjero, pero aceptando no obstante vivir pobremente en su propia patria, a pesar del olvido del mundo oficial".⁸⁶

Y en cuanto al arte escénico, también en él arreciaban los embates nacionalistas. En oportunidad de emplazarse un busto en el Teatro Colón, el Diputado Nacional Sr. Sainz señalaba que como director de la Escuela interna de dicho Teatro, la persistencia de Carlos López Buchardo pudo "...hacer efectiva su aspiración de que las óperas en Argentina deben ser cantadas, dirigidas y preparadas por los Argentinos".⁸⁷ En suma, concluía su exposición el Diputado Nudelman, "...mientras se han cerrado las academias de cultura, las únicas que funcionan son precisamente las academias de baile".⁸⁸

La Revolución Libertadora.

En cuanto a la coalición que dió el golpe de 1955, denominado Revolución Libertadora,⁸⁹ habría sido, en mi opinión, el inicio de una nueva ola progresiva,⁹⁰ que reaccionó contra una contraola regresiva (1930-1955); y la resultante de:

- a) un desmembramiento de la coalición Justicialista --debido a la postrer deserción de los cuadros pertenecientes a la Iglesia Católica;⁹¹
- b) un desquite del liberalismo antipersonalista contra la Revolución de 1943 y su corolario el corporativismo nacionalista peronista;

y c) un escenario dividido aún por el viejo clivaje dominante: peronismo versus anti-peronismo.⁹²

A juicio de Kvaternik (1990), el golpe de 1955 y los denominados Comandos Civiles Revolucionarios,⁹³ habrían sido producto de una coalición autoritaria de naturaleza moderadora en su contenido y provisional en su duración.⁹⁴ Paralelamente, los fusilamientos de 1956 habrían operado como resultado del desmembramiento de la coalición originaria, en oportunidad de su tercer momento, y como escarmiento y revancha por los crímenes cometidos durante el régimen Peronista a manos de la denominada Sección Especial.⁹⁵ Caído el peronismo, con su efecto dominó o de contagio sobre gran parte de América Latina, del tenor del cual nos hablan Li y Thompson (1975), se alentó en plena Guerra Fría los derrocamientos en cascada de las dictaduras personalistas de Pérez Jiménez en Venezuela, Rojas Pinilla en Colombia, Trujillo en República Dominicana, y Batista en Cuba.

La coalición que constituyó la dictadura conocida como Revolución Libertadora, de naturaleza transitoria pero no totalitaria, también se vio fragmentada apenas iniciada su gestión. Esta fragmentación obedeció a un putsch interno que descabezó a su jefe el Gral. Eduardo Lonardi, y desplazó a la Iglesia Católica de la coalición dominante, poniendo en su lugar al Gral. Pedro E. Aramburu y a los civiles integrantes de los partidos políticos laicistas y antiperonistas que habían participado en 1946 de la Unión Democrática.⁹⁶ Luego de la sangría interior que significó la caída de Lonardi, la coalición dominante se vio precisada a legitimar su hegemonía y asegurar su transición constitucional mediante estrategias reformistas, entre las cuales se destacó la restauración de la autonomía universitaria,⁹⁷ la devolución de los diarios y periódicos confiscados, la industrialización a través de estrategias de sustitución de importaciones;⁹⁸ la fundación de numerosos Centros de Investigación (CONICET,⁹⁹ INTA,¹⁰⁰ INTI,¹⁰¹ y CFI);¹⁰² la derogación de la Constitución de 1949; la convocatoria de una Convención Constituyente que encarara la Reforma Constitucional; la intervención y posterior devolución de los sindicatos a la burocracia obrera;¹⁰³ y la convocatoria a elecciones generales para restituir el orden constitucional. Sin embargo, este retorno al orden constitucional tuvo sus limitaciones y sus propias contradicciones, pues el partido Peronista, recientemente derrocado, estuvo proscripto por ley, y la legislación electoral adoptada fué la de la lista incompleta. Este régimen electoral, opuesto al proporcional, al otorgar sobrerrepresentación a la coalición triunfante, inauguró el llamado "juego imposible" formulado por O'Donnell (1972), pues suscitó una situación polarizada y fragmentada donde la alianza o pacto (e.g.: Pacto Perón-Frondizi) con la mayoría proscripta daba lugar a la llamada "oposición desleal".¹⁰⁴

La coalición dominante surgida de la revolución de 1955, al persistir el "juego imposible", y acentuarse la represión del Peronismo (Plan Conintes),¹⁰⁵ continuó fragmentándose al dividirse el Radicalismo, el Socialismo, el Comunismo y el Conservadorismo.¹⁰⁶ Pero pese a estas sucesivas fragmentaciones la Convención Constituyente de 1957 fué finalmente convocada. Y al igual que la transición a la democracia --por transacción anticontinuista-- mediante una salida electoral condicionada, operada en Febrero de 1958, esta Convención tuvo lugar con la exclusión o proscripción de la primera mayoría peronista.¹⁰⁷

Los argumentos esgrimidos para legitimar o impugnar la Convención giraron esencialmente alrededor de numerosos antecedentes históricos (Revolución de Mayo, Caseros, Pavón, las Revoluciones de 1930 y 1943, y el pasado reciente de Italia y Francia). Diferenciar lo que era una revolución de una contrarrevolución y remontarse para ello a la misma Revolución de Mayo era materia en la cual la Generación de 1837 (Echeverría, Varela, Alberdi, etc.) y la Generación del 900

(Ingenieros, 1918; Alvarez, 1914) habían contribuído con páginas decisivas. Cuando el Convencional Constituyente Carlos Guida, sin duda fundándose en la lectura de Ingenieros (1918) --que a comienzos de siglo se hallaba influenciado por la entonces naciente teoría de las elites-- se refirió al derecho que le cabía al pueblo de resistir a un gobierno que ha abrogado las instituciones republicanas.¹⁰⁸ Para resistir a dicho gobierno a nosotros

"...nos basta con acudir al mejor y más genuino de nuestros libros, y del que es autor nuestro pueblo: nuestra historia. Ella nos demuestra que la Revolución de Mayo se hizo para conquistar la emancipación nacional y las instituciones que aseguran la justicia y el goce de la libertad, fundadas en la soberanía popular; la de Caseros, para reconquistar e institucionalizar esa libertad y esa justicia, sobre dicho principio; y que para restablecer el pleno goce por el pueblo de tales instituciones, se intentaron los movimientos de 1890, 1893 y 1905, que no obstante su falta de triunfo material, figuran en la historia como verdaderas revoluciones".¹⁰⁹

Por el contrario, para el Convencional Guida, los movimientos de 1930 y 1943, no obstante su triunfo militar,

"...no figurarán nunca como revoluciones, sino como contrarrevoluciones [rupturas anti-fundacionales], como simples rebeliones triunfantes, porque perseguían desvirtuar de hecho o de derecho, las instituciones de la democracia y de la libertad, consagradas por la Constitución Nacional, objeto y fin de nuestra historia".¹¹⁰

Sin embargo, para el Convencional Comunista Rodolfo Ghioldi --fundado en una interpretación materialista de la historia-- el Movimiento de Septiembre de 1955, al igual que las revoluciones de 1930 y 1943, no eran revoluciones sino golpes de estado, por cuanto aquellas consisten necesariamente en la sustitución de una clase por otra.¹¹¹ Refutando a Ghioldi, el Convencional Demócrata Progresista Horacio Thedy alegó --basándose en una filosofía que abrevaba en el pensamiento de Weber y Veblen-- que

"...el Cristianismo, el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Revolución de Mayo y Caseros...fueron revoluciones en las que el fenómeno de la sustitución de una clase por otra no aparece como efecto determinante [y sí la incidencia]...de otros factores espirituales o místicos".¹¹²

A diferencia de la revolución de Caseros (1852), donde a juicio del Consejero y luego Convencional Radical Intransigente Oscar López Serrot, se encontraban como elementos preexistentes sólo pactos o acuerdos inter-provinciales, la revolución que ocurrió en 1955, se encontró

"...con una Constitución, la de 1853, ilegalmente reformada en 1949, pero que es un cuerpo jurídico de innegable existencia que quita la facultad de poder constituyente originario a toda convención que se convoque con tal propósito".¹¹³

Mientras la Constitución de 1853

"...ha sido el fruto de aquellos estudios realizados en las viglias por los exilados durante la dictadura rosista, viglias que casi siempre sucedían a las afiebradas jornadas de conspiración...en esta ocasión no ha ocurrido así; no fué ésa la preocupación durante la resistencia. La bandera fué distinta: defender la Constitución de 1853, restableciendo su

imperio, es decir, eliminando el fruto de una ilegal reforma".¹¹⁴

La revolución surgida con Caseros, fué la única que --en opinión del convencional López Serrot-- poseyó poder constituyente originario, pues todas las revoluciones que le siguieron sólo habrían gozado de un poder constituyente derivado y como tal restringido.¹¹⁵ Sin embargo, aplicando este mismo criterio, podríamos afirmar que Caseros poseyó también sólo un poder constituyente derivado, pues el único momento en que se gozó de un poder constituyente verdaderamente originario o fundacional fué durante el Congreso Constituyente de 1816, que declaró la independencia política de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Para los Convencionales Oscar Alende y Oscar López Serrot,¹¹⁶ el Gobierno Provisional surgido de la Revolución de 1955 carecía de poder constituyente, es decir de atribuciones para declarar por Decreto-Ley la nulidad de la Reforma Constitucional de 1949,¹¹⁷ y poner en vigencia la Constitución de 1853 aunque gozaba de facultades legislativas.¹¹⁸

La ilegitimidad del gobierno peronista, al igual que la del Rosismo en el siglo pasado, no estaba para los Convencionales Aldo Tessio y José Aguirre Cámara, fundada en la nulidad de la Reforma Constitucional realizada en 1949, ni en la ausencia de los dos tercios de los votos del parlamento necesarios para lograr dicha Reforma, sino que habría estado dada por la naturaleza pre-moderna, pre-republicana y anti-fundacional del peronismo, que

"...desoyendo la consigna de los padres de la patria, entregaron a un hombre la suma del poder público; le concedieron facultades extraordinarias, haciendo que la vida, el honor y la fortuna de los Argentinos se convirtieran en una gracia de su poder omnímodo".¹¹⁹

En relación con el caso del peronismo, las disposiciones legales de dicho régimen estaban, a juicio del Convencional Ernesto Crespo, "...destinadas a aherrojar las libertades públicas y privadas, suspendiendo la libertad civil y política del país".¹²⁰ El Convencional Crespo, basándose en las tesis acerca de la legitimidad de los gobiernos, de Duverger (1955, 1957), expresó que con estas características puede existir un gobierno legal pero éste será necesariamente

"...ilegítimo, y puede haber un gobierno revolucionario o defacto perfectamente legítimo, aunque no legal, todo lo cual conduce necesariamente, a calificar [al gobierno peronista] como un gobierno ilegítimo, aunque pueda escudarse en la carátula o en el aspecto exterior de legalidad".¹²¹

Los mecanismos para derogar las reformas de 1949 giraron alrededor de las facultades constitucionales de los gobiernos revolucionarios. Para algunos, este tipo de gobiernos poseía poderes revolucionarios ilimitados. Y para otros, por el contrario, poseía poderes restringidos tales que hacían obligatoria la consulta popular.¹²² A efectos de impedir la convocatoria de la Convención Constituyente de 1957, se esgrimían a juicio del Consejero y luego Convencional Horacio Thedy un par de argumentos, la teoría jurídica de las nulidades y el espectro político de los votos en blanco. Para un juego de paciencia, expresaba Thedy,

"...es maravilloso seguir los vericuetos de la teoría teológica de las nulidades. Pero jamás se me pudo ocurrir, ni puedo aceptar, que un proceso histórico pueda ser parado con una teoría de las nulidades. Son dos mundos distintos; son dos cosas diferentes. Parar la historia con un recurso forense solo se le ha ocurrido hasta ahora, a algún sector de este país".¹²³

No obstante ello, Thedy declaró, que cuando el Presidente Provisional Pedro E. Aramburu lo consultó

acerca de la derogación por decreto de la Constitución de 1949, él le aconsejó que no lo hiciera y que convocara al pueblo para ello. Si aceptamos, decía Thedy,

"...el hecho de que un gobierno defacto pueda derogar una Constitución, sentamos el precedente más funesto para la historia argentina futura. No le neguemos al pueblo y exijamos para él ese derecho".¹²⁴

Por el contrario, el Consejero Radical Miguel Angel Zavala Ortiz, seguido por su opositor y ex-correligionario el Consejero Oscar Alende, coincidieron respecto a la Reforma de 1949, que no era necesario derogarla porque

"...no fué la revolución la que la echó abajo, la que la hizo pedazos: fué el propio autor el que quemó su propia obra el 28 de septiembre de 1951, cuando estalló el movimiento del general Menéndez,¹²⁵ y el gobierno declaró el estado de guerra interno, que significaba la anulación o cancelación virtual de su propia Constitución".¹²⁶

Entre los argumentos para impedir la convocatoria a la Convención Constituyente de 1957, la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), dirigida por Arturo Frondizi, atribuía a la Revolución de 1955 intenciones políticas continuistas.¹²⁷ A ello replicaba, el Consejero Zavala Ortiz, perteneciente a la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP), que

"...el pensamiento, el espíritu, el sacrificio de los hombres de la revolución, que no fué para sacar un gobierno y poner otro, sino para crear instituciones que garanticen la vida democrática del país, no tienen valor para quienes niegan el derecho a la reforma".¹²⁸

Por último, el Consejero Socialista Américo Ghioldi manifestaba contra la opinión negativa a la convocatoria Constituyente expresada por el Consejero y Convencional renunciante López Serrot, que era

"...el caso de señalar la ilevantable contradicción lógica de la posición: si admitimos que el gobierno revolucionario ha tenido facultad para dejar de lado la Constitución del 49 y poner en vigencia la del 53; si esa facultad importa ya el ejercicio de un poder constituyente, porque significa poner en pie una constitución, ¿como negar al poder revolucionario la facultad de aplicar el artículo 30, que simplemente pone en movimiento el poder constituyente del pueblo?".¹²⁹

La contradicción era para Ghioldi insalvable, salvo que "...después, contradiciéndose otra vez, se diga que la Constitución vigente es la del 49. Entonces se estaría encerrado en una lógica jurídica perfecta y en una aberración política igualmente perfecta".¹³⁰

La comparación con el pasado reciente de países europeos versó sobre los casos de la transición a la democracia que se produjeron en Francia e Italia a partir de la última post-guerra.¹³¹ Como en Argentina con la Constitución de 1853; en Francia, a juicio del Convencional del Partido Demócrata Nacional José Aguirre Cámara, la dictadura de Pétain "...derogó la Constitución de 1875".¹³² Allí, en Francia, como aquí en Argentina, "...las viejas instituciones fueron sustituidas".¹³³ Allí, como aquí, "...vencida la dictadura, no quedó Constitución alguna vigente".¹³⁴ Y en el caso de Italia, para salir del fascismo, "...como nosotros, aunque parezca paradójico, tuvo que salir de la legalidad".¹³⁵

La distinción entre gobiernos defacto y gobiernos usurpadores fué crucial para lograr continuidad jurídica y frenar el avance de las concepciones corporativas, en una etapa histórica signada por la vigencia de coaliciones autoritarias. Esta distinción giró primero alrededor de las doctrinas de Jameson (1864, 1887), sobre la omnipotencia --o en términos más recientes competitividad con racionalidad hegemónica-- de las Convenciones Revolucionarias, y luego alrededor de las teorías de Constantineau (1910, 1945) y Herrfahrdt (1932).¹³⁶ Sin embargo, el Convencional Conservador Pablo González Bergez, sostenía que para definir qué es una revolución interesa poco averiguar

"...si se ha usado o no la fuerza y si el hecho ha sido incruento o no. No interesa ni el origen, ni las causas, ni los medios. Basta que haya ruptura del ordenamiento jurídico. Revolución fué la del 14 de abril de 1931 en España, hecha solamente con papeletas electorales en las urnas. Se derribó la monarquía y se instaló la República por un procedimiento que no era el previsto entonces en la ley vigente. Fué una revolución".¹³⁷

Discrepando con su correligionario González Bergéz, el Convencional Mendocino Adolfo A. Vicchi sostuvo que las rupturas de los ordenamientos jurídicos no fueron unívocas pues

"...por acción de las modernas teorías del derecho, se realiza un gran esfuerzo por dar ciertas normas a los hechos de fuerza, y de allí que se distingan diferentes tipos, diferentes categorías de gobiernos de fuerza. Un gobierno de fuerza que maneje y dirija un país y que se autolimite, es llamado dentro de la doctrina, gobierno defacto, porque se sujeta a normas; cuando no lo hace, es una dictadura o un gobierno usurpador. De allí pues que el esfuerzo por justificar la evolución y los actos de los gobiernos que han surgido de un hecho de fuerza, por el derecho, es un aporte extraordinario, no sólo para la paz social, sino para la formación del derecho mismo".¹³⁸

En resumen, las transiciones y rupturas políticas, y los ciclos ideológicos no han mantenido una correlación directa o positiva con los ciclos económicos. Entre ellos hubo notorios desfases, producto de sus diversos grados de inercia o atraso relativo. Mientras el final de la fase mundial de estancamiento y crisis de la tercer onda larga de Kondratiev (1914/20-1940/45) vino a correlacionarse positivamente con la quinta contraola regresiva (1930-1955) y con un sexto ciclo ideológico de inspiración nacionalista, iniciado en 1930 y culminado en 1955; la primer parte de dicha fase de crecimiento (1945-1955) no se correlacionó positivamente con la última etapa de la quinta contraola regresiva (1945-1955).

NOTAS

¹ Germani, 1978; citado en Neiburg, 1994, 543, nota 34. Sobre el autoritarismo, el fascismo y el nacional populismo, ver Germani, 1978.

² Halperín Donghi, 1975; citado en Gutiérrez y Romero, 1995, 165.

³ Eley, 1983, 57; Kocka, 1988; y Childers, 1990, 332 y 355-357.

⁴ ver Ullmann, 1985, 255 y 258.

⁵ Jeane Kirkpatrick, Donald Hodges, David Rock y Eldon Kenworthy.

⁶ Lewis, 1980, 242-243; y Horowitz, 1990. Ultimamente, Madsen y Snow (1991) han hecho hincapié en la naturaleza carismática del comportamiento político del peronismo. Sobre los orígenes del peronismo, ver Murmis y Portantiero, 1971. Sobre la invención del peronismo y las mitologías nacionales, ver Neiburg, 1995. Sobre la democracia, el militarismo y el nacionalismo en Argentina, ver Goldwert, 1972. Sobre las interpretaciones ortodoxas y revisionistas del apoyo inicial del peronismo, ver Kenworthy, 1975. Sobre la reversión cultural ocurrida en la Argentina a partir de 1946, ver Aizcorbe, 1976. Sobre el peronismo temprano y el estado argentino post-liberal, ver Ranis, 1979. Sobre el colapso de la democracia liberal y los orígenes del fascismo colonial en Argentina, ver Allub, 1980. Sobre sindicalismo y peronismo, ver Campo, 1983; James, 1988; y Torre, 1990. Sobre el nacionalismo en el pensamiento peronista, ver Winston, 1983; y sobre la Argentina en la crisis ideológica mundial (1927-1955), ver Buchrucker, 1987. Y para una aproximación teórica al nacionalismo católico, el fascismo y la inmigración en la Argentina (1927-1943), ver Nascimbene y Neuman, 1993.

⁷ Para el Diputado Nacional Nerio Rojas, la movilización del 17 de Octubre fué un producto de la radiodifusión, en manos del gobierno militar, pues "...la policía de la Capital, que desde las primeras horas de ese día transmitía [radiofónicamente], sincrónicamente con la marcha de los grupos, el desarrollo de los acontecimientos. Era la transmisión del jefe de policía [Filomeno Velasco] la que decía: el pueblo llega a tal altura; a esta altura está en tal parte, la manifestación se agranda. La transmisión de la policía se convertía en propaganda de ese acontecimiento" (Exposición del Diputado Nacional Nerio Rojas, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.40, 1-X-1946, VI, p.95).

⁸ Sobre el triple dilema mítico, ver Girardet, 1999, 176. Sobre el mito gaucho, ver Astrada, 1948 y 1964. Sobre el dilema del Rey Cautivo, ver Post y Robbins, 1993. Sobre la invención del peronismo y las mitologías nacionales, ver Neiburg, 1995. Para las efemérides del ritual Peronista, ver Plotkin, 1994.

⁹ Sobre López Rega y la teoría de los dos demonios, ver Feinmann, 1987. .

¹⁰ A. F. K. Organski, S. M. Lipset, Alan Cassels, Eugen Weber, J. L. Romero, G. Blanksten, Arthur Whitaker y Peter H. Smith.

¹¹ La universalidad de los derechos ciudadanos y de las garantías individuales, la divisibilidad del poder, la independencia de la justicia, la inamovilidad de los jueces, la representatividad de la democracia, la republicanidad y auto-determinación de los gobiernos provinciales y municipales, la incompatibilidad entre los cargos ejecutivos, judiciales y legislativos, la igualdad ante la ley, la periodicidad de los cargos ejecutivos y legislativos, la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad y privacidad individual, la nacionalidad del ejército y la iglesia (Patronato), la separación del estado de la sociedad civil, la obligatoriedad escolar y la autonomía de las universidades.

¹² Peña, 1973, 129-130. Para Milcíades Peña no existía contradicción alguna entre la modernización capitalista y el atraso en el régimen político y, por el contrario, este último era funcional al particular tipo de capitalismo vigente en Argentina (Tarcus, 1996, 285-286).

¹³ Tarcus, 1996, 292.

¹⁴ Bartolini, 1993, 220-224; y von Beyme, 1995, 161-162.

¹⁵ por minoría intensa debe entenderse una minoría que no es sólo numérica sino que conlleva intensidad ideológica (Carrizo, 1996, 17, nota 29).

¹⁶ ver Scenna, 1983; Ciria, 1986; y Mallimacci, 1988 y 1996.

¹⁷ ver Stemplowski, 1976; y Alzola Cvitanovic de Nilsa y Alvarez (1997).

¹⁸ ver Acosta, 1988; Horvath, 1986; y Newton, 1995, 158. Para el uso que la política y los políticos hicieron de los programas radiofónicos, ver Acosta, 1988, 68.

¹⁹ sobre el partido comunista, ver Plá, 1986-87; sobre la provincia de Buenos Aires, ver Walter, 1974; Melón Pirro, 1994; Ferrari, 1994; Bartolucci y Toroncher, 1994; y Da Orden, 1994; y sobre la provincia de Córdoba, ver Vidal, 1994.

²⁰ Esta noción fué inaugurada por O'Donnell (1972) para explicar el péndulo cívico-militar del pos-peronismo (O'Donnell, 1972, cap.IV).

²¹ Sin embargo, utilizando los mismos argumentos que utiliza Kvaternik (1978) para refutar los juicios que emite O'Donnell (1972) acerca del golpe de 1966, creo que el golpe militar de 1943 fué evitable.

²² En ese entonces, la lectura de la obra de Burnham (1943) tuvo un gran impacto en la mentalidad de la dirigencia política, ver Sidicaro, 1995, 343-344.

²³ para conocer las razones de los desplazamientos entre los Generales Ramírez, Rawson y Farrell, ver Rodríguez Lamas, 1986a; y Paso, 1987.

²⁴ Es importante aclarar, con las categorías de Dahl (1971), que si bien en este evento electoral la participación política fué amplia (es decir no hubo proscripciones), la competición política fué restringida o limitada por obra del control que el gobierno ejercía de las comunicaciones masivas. Sobre Dahl, ver Held, 1987, 228-248.

²⁵ ver Dodson, 1980; Lubertino Beltrán, 1987; Caimari, 1995; Bianchi, 1990, 1992 y 1996; y Zanatta, 1996. Acerca de la función política de las organizaciones religiosas, ver Hermet, 1973.

²⁶ Sobre el nacionalismo en el pensamiento peronista, ver Winston, 1983.

²⁷ ver Camarasa, 1995; y Ranvier, 1997.

²⁸ ver Louis, 1977.

²⁹ Tcach Abad, 1991, 21. Ver también, aunque para una opinión opuesta, Ferrero, 1979. Es interesante señalar, que en este debate, suscitado en Villa María, nació la vocación intelectual del profesor J. J. Hernández Arregui, de honda incidencia en la formación ideológica nacionalista de diversas generaciones de universitarios argentinos.

³⁰ sobre las ideas y actitudes de los Cordobeses ante la Segunda Guerra Mundial y sus

protagonistas, ver Solveira de Báez, 1997.

³¹ Tcach, 1991, 51 y 78, nota 107; y Rouquié, 1981-82, II, 58, nota 6. Sabattini alegaba que para ello Perón debía afiliarse al Radicalismo. Por cierto, ni Perón aceptó afiliarse ni Sabattini estaba en condiciones de aceptar semejante trato --debido a la fuerte asimetría que lo distanciaba con las fracciones Radicales aliadófilas a él enfrentadas-- pues ello suponía la ruptura del Radicalismo.

³² Alvarez y Sabattini, a pesar de la diferencia de edad, eran amigos, pues ambos se habían criado en Rosario.

³³ ver Senkman, 1997; y Ben Dror, 1997.

³⁴ ver Torre, 1996. El 17 de Octubre guardó grandes semejanzas con la Marcha sobre Roma. En coincidencia con las opiniones de Nerio Rojas vertidas ut supra, ver los juicios críticos de Milcíades Peña en Tarcus, 1996, 358-359. Para mayor información sobre las agresiones de la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN), ver la inserción solicitada por el Diputado Silvano Santander en el Diario de Sesiones (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 1946, I, Reunión n.10, 24-VII-1946, pp.762-764).

³⁵ Sobre el momento de origen, ver Candau, 2001, 92-94.

³⁶ sobre la Junta Renovadora, ver Moira Mackinnon, 1995, 240-241. Sobre los conservadores, ver Azaretto, 1983. Entre los conservadores que se pasaron al Peronismo estuvo José Emilio Visca y en Córdoba las familias tradicionales y católicas como los Frías o los Díaz de la estancia Santa Catalina (Tcach, 1991, 88); y entre los que tuvieron una actitud condescendiente hacia el peronismo se encontraban Solano Lima, Amoedo, Eduardo (a) "Lalo" Paz, Sánchez Elía, Arq. Miguens, etc. Entre los socialistas que siguieron la misma huella se encontraban en la primer época: de la rama gremial Borlenghi, Santín, Coca, Domenech, Unamuno, Freire, Gay, Argaña, Diskin, Reynés, etc.; y de la rama política: Unamuno, Bramuglia, Alfredo López, etc. En la segunda época, Dickman (padre e hijo), Cavallieri, Carlos M. Bravo (hijo de Mario Bravo), etc. (sobre Dickman, ver Béjar, 1979). Muchos de ellos integraron el llamado Partido Socialista de la Revolución Nacional (PSRN), que dió un franco apoyo al Peronismo. Entre los comunistas, se encontraban Puiggrós y Astesano; y entre los Trotskistas Angel Perelman y Niceto Andrés, seudónimo de Mauricio Prelooker (Debo esta información a Víctor García Costa, Emilio J. Corbiere, Enrique Pugliese y Carlos Merino).

³⁷ Sin embargo, Llorente (1977) omite mencionar más de una veintena de casos de relevantes Yrigoyenistas --que profesaban el neutralismo-- que se pasaron al Peronismo: Eduardo Colom, Arturo Jauretche, Raúl H. Colombo, Jorge del Río, Raúl Luzuriaga, Salvador Cetrá, Homero Manzi, Diego Luis Molinari, Víctor J. Guillot, Antonio Guardo, Eduardo Guzzetti, Albino Pugnalin, Eduardo Confalonieri, Atilio García Mellid, Gabriel Kayrúz, Francisco Lagomarsino, Manuel Oscar Marthol, Leopoldo Bard, Claudio Martínez Payva, Fernando Ochoa, Oscar Semino Parodi y el Mayor Alvarez Pereira. En Mendoza, Enrique Zuleta Alvarez (sobrino nieto de José S. Alvarez (a) "Fray Mocho"), y en Salta, los hermanos Cornejo Linares. Entre los Alvearistas que se pasaron al Peronismo (Quijano, Cooke y Sampay), Llorente (1977) omite mencionar la figura de los dirigentes Mario Posse, Maya y Joaquín Díaz de Vivar, este último cuñado de H. Quijano (Llorente, 1977, 67; y datos gentilmente proveídos por José González Ledo y Horacio D. Molinari). De todos los Radicales que se pasaron al Peronismo, el más célebre en ese tiempo fué Luzuriaga, no sólo por haber dejado un testimonio escrito

pleno de información valiosa (Luzuriaga, 1940) sino por su aguerrida militancia, la cual le costó la pérdida de una mano, en un atentado con explosivos, de resultas del cual se lo conoció siempre como "El Manco" Luzuriaga. Desempeñó el cargo de Director de Provincias en el Ministerio del Interior durante toda la gestión del Peronismo. Otro de los Radicales sobre el cual más dudas recaen es el del ex-Diputado Nacional y ex-Ministro de Agricultura de la primera presidencia de Yrigoyen, Dr. Carlos J. Rodríguez, autor de cuatro libros, impresos en 1934, 1945, 1946 y 1963. El penúltimo, titulado *El Capital. Wagner contra Marx*, es un estudio crítico de la obra del economista alemán Adolf Wagner, uno de los llamados socialistas de cátedra tan anatematizados por Marx, como alabados por Hitler, que sin duda debe haber incidido profundamente en los orígenes ideológicos del Peronismo, pero que paradójicamente ni Llach (1984), ni Buchrucker (1987) ni Tcach (1991) han tomado en cuenta. Recientemente, Piñero (1993) ha hecho referencia a la actividad intelectual y política del Dr. Rodríguez, así como a la de Felipe Pérez, Orestes Confalonieri, Carlos Noel y Arturo Sampay, en las filas del Radicalismo, para desmentir las acusaciones de que los Radicales no tuvieron en cuenta en ese entonces la cuestión social. Cabe aclarar que Rodríguez conoció a Perón con quien mantuvo una entrevista personal y de la cual salió muy gratamente impresionado, pero que ello no significó que abdicara del Radicalismo. Finalmente, Rodríguez militó en las filas del Frondizismo, donde se desempeñó como primero en la lista de candidatos a Convencional en las elecciones de Convencionales Constituyentes de 1957, y presidió la Convención previo al retiro del Bloque Radical Intransigente, falleciendo en 1962 a la edad de 92 años (Comunicaciones personales gentilmente brindadas por el Profesor Eugenio Gabriel Piñero, el Embajador Carlos Rodríguez Baigorria y el periodista Enrique Pugliese).

³⁸ A juicio de Sartori (1988), y tomado de Burnham (1941), la democracia no es el gobierno mayoritario incondicional, sino aquél que respeta los derechos soberanos de las minorías opositoras (Sartori, 1988, 56). Para Carrizo (1996) el pasaje de una democracia competitiva a una democracia hegemónica se dio con la Reforma Constitucional. Sin embargo, el Diputado Nacional Nerio Rojas planteaba que dicho pasaje no se dio por la simple razón que entre la Revolución de 1943 y las elecciones de 1946 no hubo solución de continuidad.

³⁹ ver Llach, 1984.

⁴⁰ ver Doyon, 1977; Little, 1979; y Torre, 1990.

⁴¹ ver Sirven, 1984; y Plotkin, 1994, cap.IV y Apéndice I. Acerca del control monopólico que el estado ejerciera del medio televisivo durante el régimen peronista y del desmantelamiento del mismo durante la Revolución Libertadora, ver Guillani, 1988, 32.

⁴² Solingen, 1993, 46. Ver el impacto causado por la entrada de técnicos alemanes nazis, el Centro Atómico de Bariloche y el falso sabio nuclear Alemán Ronald Richter, en Rouquié, 1981, II, 81, nota 51; Mariscotti, 1985; y Senkman, 1995.

⁴³ ver Ferioli, 1990. Sobre el rol de las Unidades Básicas como prestadoras de servicio social, ver Romero, 1995, 128.

⁴⁴ sobre los refugiados nazis en Argentina, ver Jackisch (1997); y sobre la fuga de alemanes y austríacos nazis a la Argentina, ver Meding, 1992.

⁴⁵ Dodds, 1994.

⁴⁶ ver Ortiz, 1955; Cuccorese, 1969; Wright, 1974; y García Heras, 1985.

⁴⁷ sobre el caso Bemberg, ver Silvestre, 1947; Musacchio, 1948; Oliver, Villafañe y García Puló, 1950; y Saravia, 1953. Sufrieron persecución patrimonial la Fábrica de Caramelos Mumú, de la familia Groisman, los Laboratorios Químicos Massone y la Industria Textil Lamuraglia. Existió también el caso de los Pereyra Yraola, cuya estancia San Juan fué expropiada con fines públicos; y el caso de Los Tapiales, propiedad del ex-Senador Provincial e Intendente Conservador de La Matanza Agustín I. de Elía. Sobre la prisión de Ricardo Balbín en 1950, ver Arrondo, 2002.

⁴⁸ ver Halperín Donghi, 1962, 160-196; y Mangone y Warley, 1984.

⁴⁹ ver Sánchez Zinny, 1959, Libro Segundo, segunda parte; Campo, 1983; y Callelo, 1986.

⁵⁰ ver Gvirtz (1997) y Esti Rein (1997).

⁵¹ Quienes recuerdan los editoriales de La Vanguardia, redactados por Luis Pan y Américo Ghioldi entre otros, sostienen que superaban en enjundia opositora a los de La Nación y La Prensa, al extremo de ser la causante del incendio de la Casa del Pueblo (Referencias personales de José González Ledo y Donato Muscio).

⁵² sobre el caso de La Prensa, ver Gainza Paz, 1957; Sánchez Zinny, 1959, III parte, cap. II; Jauretche, 1966; y Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 20 de marzo y 11 y 12 de Abril de 1951, citado en Sirvén, 1984, cap. VIII; y sobre el caso de El Intransigente, ver Michel Torino, 1953; y Cornejo Linares, s/l.

⁵³ se fundaba en la supuesta supremacía del principio de la soberanía popular por sobre el de la independencia de la justicia. Carrizo (1996) atribuye este pasaje al momento en que se reformó la Constitución Nacional, tres años después en 1949.

⁵⁴ Ver la prueba e) del Proyecto de Resolución y exposición de motivos del Diputado Dr. Rodolfo A. Decker (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Reunión n.32, 18 y 19-IX-1946, pp.679-680). Para el fenómeno de la organización obrera peronista, limitatoria de la libre agremiación, y el estado justicialista, ver Doyon, 1977; y Little, 1979. Llama la atención que Little (1979) no se haya percatado del conflicto suscitado con las delegaciones del interior del país en el más alto nivel de la administración de justicia.

⁵⁵ Llama la atención que Rouquié (1981) no haya contemplado este hecho crucial.

⁵⁶ Smulovitz, 1995, 90-91.

⁵⁷ Constantineau, 1910, 35 y 411, citado en Congreso Nacional, Cámara de Diputados, Diario de Sesiones, 18 y 19-IX-1946, Reunión 32a., p.720); y en Palacios, 1947, 55; Drago, 1946, 51-57; Quiroga Lavié, 1978; y Cayuso y Gelli, 1988, 71-74.

⁵⁸ Fallos, II, 121-127; citado en Palacios, 1947, 50. Es extraño que Rouquié no haga ninguna

referencia a este hecho.

⁵⁹ Doctores Alfredo Palacios, Mariano J. Drago y Juan José Díaz Arana.

⁶⁰ el Dr. Alfredo Palacios, en defensa del Ministro Antonio Sagarna, se fundó en las obras de Jéze (1949), Vázquez (1946), Bielsa (1936) y Ramella (1946); el Dr. Drago, en defensa del Ministro Benito Nazar Anchorena, se fundó en los trabajos de Anderson (1925); y el Dr. Díaz Arana, en defensa del Ministro Francisco Ramos Mexía, se fundó en las citas de Hallan (1828-29) y Blackstone (1823), mencionadas en Gallo, 1897, cap. I, así como en la obra de Dana Montaña (1937).

⁶¹ Congreso Nacional, Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, 5-XII-1946, t.IV, 78a. Reunión, continuación de la 3a. sesión, pp.100-102; y Palacios, 1947, 87-111.

⁶² Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 18 y 19-IX-1946, IV, Reunión 32a., p.805.

⁶³ Raúl Bustos Fierro, Ernesto Palacio y José M. Argaña.

⁶⁴ Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 18 y 19-IX-1946, IV, Reunión 32a., p.811. De acuerdo a las teorías de Bickel (1986), los jueces de la Corte Suprema, cuya elección no proviene del pueblo, y cuyos mandatos no están sujetos al escrutinio público, a través del control de constitucionalidad, "...tienen la atribución de revertir decisiones de los otros dos poderes que dependen para su constitución de la voluntad mayoritaria" (Bickel, 1986, citado en Smulovitz, 1996, 182). Para entender el clima de movilización política de la clase obrera vigente en ese entonces, ver Halperín Donghi, 1975.

⁶⁵ autor de Catilina contra la oligarquía (Buenos Aires: Ed. Rosso, 1935); y El Espíritu y la Letra (Buenos Aires, 1936), libros donde se explaya contra el sufragio y donde proclama a Hitler y Mussolini como democráticos. Para mayor información sobre las actividades políticas posteriores de Palacio al frente de la Comisión Nacional de Cultura, ver Quattrocchi-Woisson, 1995, 260-269.

⁶⁶ en la Intervención de Marco Aurelio Avellaneda.

⁶⁷ Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 18 y 19-IX-1946, IV, Reunión 32a., p.811.

⁶⁸ Enrique Martínez Luque, Justo Díaz Colodrero, José Benito Fajre, Reynaldo Pastor, Julio J. Busaniche, Mario Mosset Iturraspe y Manuel J. Mántaras, Diputados por Córdoba, Corrientes, Tucumán, San Luis y Santa Fé respectivamente.

⁶⁹ Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 18 y 19-IX-1946, IV, Reunión 32a., p.821.

⁷⁰ Dicha Reforma suprimió el Colegio Electoral para la elección del Presidente y el rol de las Legislaturas provinciales para la elección de Senadores Nacionales (Carrizo, 1996, 29).

⁷¹ Para Carrizo (1996), fué dicha Convención la que institucionalizó el pasaje de la mayoría numérica a la mayoría intensa (Carrizo, 1996, 13 y 22). Por mayoría intensa debe entenderse una mayoría que no es sólo numérica sino que implica intensidad ideológica (Carrizo, 1996, 17, nota 29). Sobre la teoría decisional de la democracia, la intensidad de las preferencias y la regla de la mayoría,

ver Sartori, 1988, capítulo VIII y pp.275-278; y sobre la teoría de los Juegos y la lógica política de los pactos constitucionales, ver Acuña, 1995b, 115.

⁷² Argentina, Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Reuniones 5a. y 6a., 15 de Febrero y 8 de Marzo de 1949, p.181-182, 184 y 271. Sampay también citaba a Jameson (1864, 1887) y recordaba que Joaquín V. González también citaba a Jameson (Argentina, Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Reunión 5a., 15 de Febrero de 1949, pp.189 y 192).

⁷³ para el debate en la ciencia política contemporánea sobre la relación entre la regla de la mayoría y la división de poderes, ver Carey, 1978.

⁷⁴ para el análisis de su personalidad, ver Alvarez Guerrero (1986, 1992).

⁷⁵ Argentina, Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Reunión 7a., 8 de Marzo de 1949, p.330.

⁷⁶ Argentina, Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Reunión 7a., 8 de Marzo de 1949, p.330.

⁷⁷ Argentina, Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Reunión 4a., 15 de Febrero de 1949, p.157.

⁷⁸ Argentina, Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Reunión 7a., 8 de Marzo de 1949, p.335.

⁷⁹ Moisés Lebensohn, Argentina, Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Reunión 3a., 1 de Febrero de 1949, p.60.

⁸⁰ Moisés Lebensohn, Argentina, Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Reunión 3a., 1 de Febrero de 1949, p.60.

⁸¹ Carrizo, 1996, 22. Para comprender esta época, leer los discursos de Ricardo Balbín previos a su expulsión de la Cámara de Diputados, en Balbín (1986).

⁸² Acerca de la desmovilización del pueblo peronista por medio del renunciamiento de Eva Perón, ver Eickhoff (1996).

⁸³ Carrizo, 1996, 36.

⁸⁴ Exposición del Diputado Nacional Santiago Nudelman, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 49, 9-XII-1953, p.2472. Sobre la literatura argentina y el peronismo, ver Stabb, 1971.

⁸⁵ documento imprescindible para renovar el pasaporte.

⁸⁶ Exposición del Diputado Nacional Santiago Nudelman, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 49, 9-XII-1953, p.2472.

⁸⁷ Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión n.27, 19-VIII-1953, p.1174.

⁸⁸ Exposición del Diputado Nacional Santiago Nudelman, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, Reunión 49, 9-XII-1953, p.2472.

⁸⁹ Esta revolución estuvo precedida, a juicio del Consejero Américo Ghioldi, "...de varios movimientos: el de mayo de 1945; el de Córdoba, de septiembre de 1945; el movimiento posterior de Suárez; el de Menéndez, de septiembre de 1951; el de Lonardi, que debía estallar pocas semanas después, a más tardar en octubre de 1951; el de la armada, del mes de Junio de 1955, y, finalmente, la revolución de septiembre de 1955" (Reforma de la Constitución Nacional [Debate], Buenos Aires: Junta Consultiva Nacional, 1957, p.109). Para el estudio de la llamada Revolución Libertadora, ver Carril, 1959; Moreno, 1974; Budeisky, 1973; Rouquié, 1981-82, II, cap.3; Rodríguez Lamas, 1986b; y Ruiz Moreno, 1994.

⁹⁰ correspondiente a la segunda ola de Huntington (1991), y a la última parte de la fase mundial de crecimiento de la cuarta onda larga de Kondratiev (1955-1967) (Mandel, 1978, 130-132; y 1986, 25; y Prelooker, 1996, 80-86).

⁹¹ ver Frigerio, 1984; Sigal, 1991, 140-144; y Caimari, 1995.

⁹² como expresión literaria del estado de ánimo que la llamada oligarquía vivía en dicha época, con motivo del incendio del Jockey Club, ver Guido, 1965. Para mayores detalles de la narrativa de ese período, ver Portantiero, 1961.

⁹³ hasta el momento no existe un trabajo que trate este fenómeno cívico-militar, aunque numerosas referencias pueden hallarse en Lamas, 1955, 105-112; Carril (1959) y Ruiz Moreno (1994).

⁹⁴ Kvaternik, 1990, 11. Para el esclarecimiento del período que se inicia con el golpe de 1955 es imprescindible la lectura de la polémica entablada entre Kvaternik (1978) y O'Donnell (1979). Para Kvaternik la causa de la inestabilidad política del período que se inauguró con la caída de Perón obedeció a la falta de "morigeración en la competencia abierta" y a la "excesiva alternancia" y también a la "falta de capacidad negociadora por parte de los políticos"; y para O'Donnell (1979) obedeció a la proscripción de la primera pluralidad del electorado, es decir el peronismo (Kvaternik, 1978, 430; y O'Donnell, 1979, 610). Asimismo, es importante aclarar --con las categorías de Dahl (1971)-- que mientras en el primer Peronismo la participación política fué amplia y la competición política restringida o limitada, en el primer pos-Peronismo el orden fué el inverso, la competencia política fué amplia y la participación limitada. (Debo el conocimiento de la polémica Kvaternik-O'Donnell a mi ex-discípulo Gastón Wright).

⁹⁵ sobre los crímenes y tormentos en las cárceles del peronismo, ver Lamas, 1956; Nudelman, 1960; y Aráoz Alfaro, 1967; sobre las bombas y los incendios ocurridos en 1953, ver Luna, 1986b; sobre el crimen del Dr. Ingalinella, ver Raffo, 1989; sobre la quema de las Iglesias de Buenos Aires, ver Anónimo, 1955; y sobre los fusilamientos de 1956, ver Walsh, 1972; y Rouquié, 1982, II, 137.

⁹⁶ Rouquié, 1982, II, 122-128.

⁹⁷ Para los pormenores de la reconstrucción universitaria, ver Halperín Donghi, 1962, Cap.V. Entre otras instituciones progresistas que nacieron en dicha época se destacan el Departamento de Sociología y el Instituto Torcuato Di Tella (ver King, 1985). Debe señalarse que de dicho Instituto se desprendieron con el tiempo, y debido a diferencias políticas, otros numerosos centros de investigación, tales como el CEUR, el CEDES, y el CISEA. Los profesores exonerados de las universidades públicas por su vinculación con el régimen peronista pasaron a integrar las Universidades confesionales, reconocidas a partir de un Decreto firmado por el Ministro Dell'Oro Maini.

⁹⁸ ver Sunkel, 1989.

⁹⁹ El Consejo Nacional de Investigaciones Científico y Técnicas (CONICET) fué iniciativa del Premio Nobel de Medicina Bernardo Houssay, y obedeció su origen a la triste experiencia de Houssay como Profesor de la Universidad de Buenos Aires. En esta Universidad Houssay había sido primero exonerado en 1943 y luego cesanteado en 1946 por los celos que le ocasionaba a su Rector el cirujano Oscar Ivanissevich (Halperín Donghi, 1962, 166 y 185). Sobre la ciencia y las instituciones científicas en una perspectiva comparada, ver Solingen, 1993.

¹⁰⁰ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

¹⁰¹ Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

¹⁰² Consejo Federal de Inversiones (Smulovitz, 1988, II, 177).

¹⁰³ ver Carri, 1967.

¹⁰⁴ Linz, 1978, II, 149, nota 11.

¹⁰⁵ Smulovitz, 1988, II, 101.

¹⁰⁶ ver R. Gallo, 1983. Sobre la fractura Radical, ver Rodríguez Lamas, 1985, 79-88; sobre la disgregación del Partido Demócrata, ver Rodríguez Lamas, 1985, 76-79; y sobre la fragmentación del partido Socialista, ver Hilb y Lutzky, 1984, 17. Sobre el Partido Socialista en la Argentina peronista: oposición y crisis de representación política (1946-1951), ver García Sebastiani, 2002. Sobre elites políticas en la provincia de Buenos Aires: peronistas y radicales en las elecciones de 1948, ver Aelo, 2002.

¹⁰⁷ Kvaternik, 1978; y Acuña, 1995b, 115.

¹⁰⁸ Exposición del Convencional Constituyente Carlos Guida, Convención Nacional Constituyente, 20-IX-1957, 13a. Reunión, p.606.

¹⁰⁹ Convención Nacional Constituyente, 20-IX-1957, 13a. Reunión, p.606.

¹¹⁰ Convención Nacional Constituyente, 20-IX-1957, 13a. Reunión, p.606.

¹¹¹ Para la intelectualidad Marxista de entonces, que hizo un culto de las nociones de clase y de masa, las estructuras políticas (parlamentos, partidos, periódicos, institutos educativos, etc.) eran meros

instrumentos de clases dominantes y no de elites. Y los orígenes de las tensiones en los sistemas políticos había que buscarlos no en las formas de gobierno o en las estructuras del poder, sino en la estructura del capital, es decir, en la desigual composición orgánica del capital.

¹¹² Convención Nacional Constituyente, 18-IX-1957, 11a. Reunión, p.416.

¹¹³ Reforma de la Constitución Nacional [Debate], Buenos Aires: Junta Consultiva Nacional, 1957, p.69.

¹¹⁴ Reforma de la Constitución Nacional [Debate], Buenos Aires: Junta Consultiva Nacional, 1957, p.69.

¹¹⁵ acerca del poder constituyente, ver Díaz Doin (1956).

¹¹⁶ fundados en las opiniones formuladas por los constitucionalistas oficiales Doctores Sebastián Soler y Juan A. González Calderón (integrantes de la citada Comisión de Estudios Constitucionales). Según Alfredo Palacios, las primeras impugnaciones de la Convención Constituyente de 1957 fueron las formuladas por los integrantes de esta Comisión a partir de la renuncia que Carlos Sánchez Viamonte hizo de ella (Convención Nacional Constituyente, 13-IX-1957, 9a. Reunión, p.318 y 321).

¹¹⁷ esta actitud de la revolución de excluir la Reforma de 1949 provocó el fallido y cruento golpe cívico-militar peronista del 9 de Junio de 1956 cuyo Manifiesto establecía como primer punto la vigencia de la Constitución de 1949. La Proclama del 27 de Abril de 1956, había creado, a juicio del Dr. Julio Oyhanarte (reproducido por el Consejero Oscar Alende en la sesión de la Junta Consultiva del 4 de Abril de 1957) "...una nueva categoría jurídica de los poderes revolucionarios", parecida a la condición "...que tuvieron los gobiernos revolucionarios del 30 y del 43". Respecto de dichos golpes, la jurisprudencia había resuelto cuatro ítems de gran importancia, a saber: 1) que no investían poderes constitucionales; 2) que eran fundamentalmente poderes ejecutivos de naturaleza unipersonal y carecían de representatividad popular; tercero, que no contaban con ninguna de las atribuciones del poder judicial; 4) que excepcionalmente y sólo en determinadas circunstancias podían usar facultades de contenido legislativo mediante el dictado de determinadas leyes". Como resumen de esa autolimitación, Oyhanarte "...establecía como conclusiones: a) la democracia política está muerta cuando se renuncia a diferenciar lo que es derecho de lo que es usurpación; b) el gobierno defacto se convierte en usurpador cada vez que trasciende la zona de su competencia; c) los actuales gobernantes, que limitaron sus facultades por propia determinación, están sujetos a contralor judicial y los jueces deben anular todo acto producido fuera de esa órbita de competencia; d) tarde o temprano habrá un gobierno de jure en el país y entonces nada de lo que haya sido usurpación podrá ser convalidado" (Consejero Oscar Alende, Reforma de la Constitución Nacional [Debate], Buenos Aires: Junta Consultiva Nacional, 1957, p.185 y 186).

¹¹⁸ Convención Nacional Constituyente, 13-IX-1957, 9a. Reunión, p.318 y 321.

¹¹⁹ Aldo Tessio, Convención Nacional Constituyente, 19 y 21 de Septiembre de 1957, 12a. y 14a. Reunión, p.525 y 641.

¹²⁰ Convención Nacional Constituyente, 14-IX-1957, 10a. Reunión, p.396.

¹²¹ Convención Nacional Constituyente, 14-IX-1957, 10a. Reunión, p.396.

¹²² Por el contrario, a juicio del Convencional Radical Ricardo Bassi, la Reforma de 1949 fué derogada, "...no en ejercicio de facultades legislativas ni en ejercicio de facultades ejecutivas, sino en ejercicio de su poder revolucionario" (Convención Nacional Constituyente, 13-IX-1957, 9a. Reunión, p.335). Los enemigos de la Revolución Libertadora, querían a juicio del Convencional Bassi "...encapsular a la Revolución en la doctrina [Constantineau y Herrfahrdt] y en la jurisprudencia de los golpes de estado de los años 1930 y 1943" (Convención Nacional Constituyente, 13-IX-1957, 9a. Reunión, p.334).

¹²³ Convención Nacional Constituyente, 18-IX-1957, 11a. Reunión, p.420.

¹²⁴ Convención Nacional Constituyente, 18-IX-1957, 11a. Reunión, p.422; reproducido por el Consejero Oscar Alende en la Junta Consultiva Nacional del 4 de Abril de 1957, p.184.

¹²⁵ sobre la revolución de Menéndez, ver Tussie y Federman (1972).

¹²⁶ Reforma de la Constitución Nacional [Debate], Buenos Aires: Junta Consultiva Nacional, 1957, p.167 y 187.

¹²⁷ ver Hoffmann (1956). Sobre la división del Radicalismo, ver Gallo, 1983.

¹²⁸ Reforma de la Constitución Nacional [Debate], Buenos Aires: Junta Consultiva Nacional, 1957, p.165.

¹²⁹ Reforma de la Constitución Nacional [Debate], Buenos Aires: Junta Consultiva Nacional, 1957, p.105.

¹³⁰ Reforma de la Constitución Nacional [Debate], Buenos Aires: Junta Consultiva Nacional, 1957, p.105.

¹³¹ para el caso de Francia, ver Paxton, 1974; y para el de Italia, ver Farneti, 1978; y Stepan, 1886, 1994.

¹³² El Convencional José Aguirre Cámara, argumentaba al igual que lo hiciera en la Junta Consultiva el Consejero Américo Ghioldi --rebatido por Oscar Alende (Reforma de la Constitución Nacional [Debate], Buenos Aires: Junta Consultiva Nacional, 1957, p.118 y 181)-- que la Constitución de 1875, "...derogada por Pétain, y la de Pétain, derogada, como entre nosotros, por el gobierno de hecho, apenas constituido. La posibilidad de la vuelta a la de 1875 tampoco fué posible, porque la de 1875, a la vez, había sido derogada por Pétain y lo había sido con los poderes que le dió una Asamblea Constituyente legítima" (Convención Nacional Constituyente, 21 de Septiembre de 1957, 14a. Reunión, p.644 y 645).

¹³³ Convención Nacional Constituyente, 21 de Septiembre de 1957, 14a. Reunión, p.644 y 645.

¹³⁴ Convención Nacional Constituyente, 21 de Septiembre de 1957, 14a. Reunión, p.644 y 645.

¹³⁵ Italia, como nosotros, "...debió reemplazar la legalidad totalitaria por una ilegalidad que buscaba restaurar la democracia. Mussolini creó su sistema dentro de una legalidad aparente, en la que hubo continuidad con la anterior, y para deponerlo se necesitó romper con esa legalidad y entrar en una ilegalidad real y aparente, pero ilegalidad que conduciría a la democracia" (Convención Nacional Constituyente, 21 de Septiembre de 1957, 14a. Reunión, p.644 y 645). Las afirmaciones del Convencional Aguirre Cámara respecto a Italia fueron estrictamente ciertas, si tenemos en cuenta que Linz (1987) sostiene que Mussolini inventó el "...modelo de la conquista legal del poder" o de la "pauta de revolución legal" (Linz, 1987, pp.135, 139, 140 y 146; y Farneti, 1978, 21). Acerca de la Marcha sobre Roma, ver Lyttleton, 1973, 85-93. También Lepsius (1978) extendió el concepto de revolución legal al caso de Alemania, para entender la toma del poder por Hitler (Lepsius, 1978, 50). Lepsius sostiene que la confusión de las categorías de legalidad y legitimidad formuladas en 1932 por Carl Schmitt también sirvieron para justificar la gradual reinterpretación de la Constitución de Weimar desde una perspectiva parlamentaria a una plebiscitaria (Lepsius, 1978, II, 75, nota 20). Para mayores detalles, ver Bracher, 1973, I, 259-268. Ultimamente, Schmitt (1997) volvió sobre el tema aclarando su participación en 1932.

¹³⁶ Las opiniones jurídicas de Jameson (1864, 1887, 1972) utilizadas por el jurista Manuel A. Montes de Oca para justificar el veto a la Constitución de Santa Fé fueron mencionadas en 1922 por el Diputado Lisandro de la Torre (Congreso Nacional, Cámara de Diputados, 22-IX-1922, Reunión No.37, p.497); y en 1957 por los Convencionales Alfredo Palacios y Antulio Pozzio (Convención Nacional Constituyente, 13 y 18-IX-1957, Reuniones n.9a. y 11a., pp.327-328 y 467). Y las doctrinas jurídicas de Constantineau (1910) y Herrfahrdt (1932) fueron citadas por los Convencionales Reynaldo Pastor, Antulio Pozzio y José A. Ghioldi (Convención Nacional Constituyente, 13, 18 y 19 de Septiembre de 1957; 9a., 11a. y 12a. Reunión; p.346, 469 y 550 respectivamente); y por los juristas Linares Quintana (1970), Quiroga Lavié (1978) y Cayuso y Gelli (1988), las cuales a su vez habían sido citadas en los alegatos de la defensa de los Ministros de la Corte Suprema en 1946.

¹³⁷ Convención Nacional Constituyente, 18-IX-1957, 11a. Reunión, p.435.

¹³⁸ Convención Nacional Constituyente, 18-IX-1957, 11a. Reunión, p.449.

TOMO VI

Capítulo 5

Los golpes o rupturas políticas crónicas y el terrorismo de estado en la Argentina pos-Peronista (1962-1999)

Para la escuela institucionalista de la Rational Choice y la Teoría de los Juegos, los análisis acerca de los conflictos intra-elites y las tensiones entre capitalismo y democracia liberal sirven para conocer la historia de las coaliciones, las facciones y los partidos políticos. En estos análisis tienen cabida numerosas teorías, tesis, leyes, modelos, esquemas, correlaciones y métodos.¹

Las coaliciones democráticas enfrentaban el dilema de transigir (pactar) con las salidas políticas ofrecidas por las coaliciones autoritarias o de boicotear las mismas,² de la misma manera que algunas corporaciones económicas se enfrentaban también a la disyuntiva de aceptar las políticas discriminatorias y proteccionistas o combatirlos.³ A cambio de concesiones, las coaliciones autoritarias ofrecían incentivos selectivos a las coaliciones democráticas, compuestas por los partidos políticos, que pactaban o transigían; y prometían castigos o penas a los que se mantenían en una posición intransigente.⁴

Para una lectura institucionalista Olsoniana --reflejada en la tesis de Walt (1987), de la capacidad agregativa de las coaliciones; y en el índice de la fuerza o debilidad de los partidos políticos, formulada por Sartori (1992); que mide su indispensabilidad y/o capacidad de intimidación-- cuanto mayor era la fuerza o capacidad relativa de un partido político, tanto más atractivo era ser su aliado.⁵ Las coaliciones duraban tanto como eran útiles para contrarrestar las amenazas que enfrentaban. A medida que la fuerza de un partido aumentaba, su habilidad para por mano propia disuadir o derrotar las amenazas, crecía. Por el contrario, a medida que disminuía la fuerza de un partido, su valor como aliado o elemento disuasivo declinaba, incitándolo a formalizar coaliciones.⁶

Extrapolable a todos los golpes de estado exitosos del siglo,⁷ O'Donnell (1972) y posteriormente Acuña y Smulovitz (1995), revelaron que la estrategia política de las coaliciones autoritarias tuvieron --a semejanza de las coaliciones democráticas-- tres momentos diferenciados en donde se pretendía: 1) subordinar la sociedad civil; 2) diseñar un orden político futuro; y 3) retirarse del poder retornando al orden constitucional, acudiendo para ello a la llamada "salida electoral".⁸ La variabilidad de opciones estratégicas que se les presentaría a los partidos políticos estaría co-determinada entonces, a juicio de Acuña y Smulovitz (1995), por: a) la estructura costo-beneficio; b) la

estructura de preferencia de los actores; y c) la interdependencia en la toma de decisiones estratégicas.⁹ La sociedad política (esto es, todos los partidos políticos participantes del juego estratégico) estaría en una situación óptima en caso de que todos los partidos y coaliciones democráticas transigiesen con el gobierno autoritario, pero el riesgo de transigir o pactar mientras que los otros potenciales participantes no lo hicieren determinaba una estrategia individual defensiva o maximizadora que, al generalizar la intransigencia, por ser todos los actores supuestamente racionales, resultaba en la peor de las posibles alternativas de utilidad/beneficios colectivos. Sin embargo, a partir de racionalidades individuales, el resultado colectivo redundaría en un equilibrio subóptimo: en los casos en que la estrategia dominante para ambos actores fuera la de no transigir o pactar, determinaría la más mínima distribución de beneficios colectivos, inferior a la distribución que lograrían si ambos hubiesen transigido. Para solucionar las consecuencias colectivas que resultan de la articulación de racionalidades individuales, C. H. Acuña (1995) propone algunas variantes alternativas que parafraseadas para nuestro propio análisis, resultarían

- a) la Hobbesiana, que se refiere a un tercer actor colocado por sobre el análisis estratégico y con capacidad de aumentar en forma autoritaria los costos de los jugadores intransigentes (e.g.: en nuestro caso el tercer actor podría ser la Sociedad de las Naciones, la ONU, la OEA o los diplomáticos Ingleses o Norteamericanos, léase Runciman, Braden o Haig);
- b) la endógena, que permite a los jugadores aprender que la transigencia, si bien obtura la posibilidad de maximizar ventajas individualmente, a la larga ofrecería más retornos que la intransigencia;
- c) la redefinición de la estructura costo/beneficio de la transigencia y la intransigencia, por medio de incentivos colectivos y selectivos (positivos para los que transigen y negativos para los que se niegan);

y d) la redefinición de las preferencias de los actores fundada en la reformulación de la relación estratégica explicable a partir de teorías psicosociológicas.

Por último, para los autores influídos por el espíritu de la post-modernidad,¹⁰ las reiteradas revoluciones, involuciones, dictaduras y terrorismos de estado ocurridas en Argentina y América Latina estarían ligadas no con las fracturas y las supervivencias de los legados y las estructuras socio-políticas pre-modernas, pre-burguesas y pre-capitalistas, como surgiría de las tesis de Moore (1966), Gerschenkron (1968) y Germani (1963, 1978); ni con las respectivas crisis o fracturas modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales), como lo proponía la lectura estructuralista,¹¹ sino con la alteración radical de los principios, prácticas o estrategias ético-discursivas de la modernidad,¹² las cuales incluían cambios políticos, sociales y culturales, susceptibles de ser deconstruídos buceando en la genealogía de sus elementos constitutivos.¹³ Es mediante la articulación de estrategias discursivas, que diversos intereses sociales han pretendido a lo largo de la historia la supervivencia de determinada combinación de estructuras pre-modernas y modernas. Para liberales como Gutmann (1987), Macedo (1990) y Galston (1991), y posmodernos como Santos (2002), la llegada de eventuales opresores y de futuros desajustes o involuciones no se impediría sólo mediante los mecanismos institucionales clásicos,¹⁴ sino que serían imprescindibles ciertas virtudes cívicas y cierto grado de compromiso por lo público.¹⁵ De la misma forma, podríamos agregar que para salir de situaciones de opresión fueron precisas también fuertes dosis de virtudes cívicas.

Las causales de la transición política progresiva que dió lugar a la resurrección liberal (1955-1966), que se instaló como reacción contra la crisis del estado liberal (contraola regresiva, 1930-55), la encuentran diversos autores en el impacto de acontecimientos aceleradores externos con la prolongada coexistencia pacífica o la ecuación del equilibrio estable;¹⁶ la Revolución Cubana;¹⁷ las guerras de liberación en Argelia y Vietnam;¹⁸ la ruptura entre la China y la Unión Soviética; y el influjo de una nueva estética dictada por el auge del folklore y del movimiento Espartaco.¹⁹

Las metodologías y modelos de análisis estratégicos nos han sugerido formular una extensa serie de reflexiones, íntimamente vinculados entre sí, no siempre susceptibles de ser contestados, y en cuya pertinencia habrá de residir gran parte del éxito de este trabajo. La fractura étnica, dominada por los opuestos orígenes migratorios de porteños y provincianos, habría sido absorbida por nuevas fracturas étnicas polarizadas ahora entre argentinos y migrantes de países periféricos (Paraguayos, Bolivianos y Chilenos).

Los ciclos ideológicos pendulares, de fases expansivas y depresivas de las ondas largas de Kondratieff, de luchas de clases, o del desajuste entre la velocidad de modernización de los subsistemas tecno-económicos y la inercia o atraso relativo de los subsistemas socio-institucionales, habrían incidido en las sucesivas olas e involuciones o contraolas políticas (1955, 1962, 1966, 1976).²⁰ La naturaleza moderadora o dominante de la coalición autoritaria, el tipo e intensidad de resistencia y/o colaboración prestada por los partidos políticos, y el momento elegido para operar la salida electoral, habría incidido en la índole continuista o anticontinuista de las salidas electorales convocadas por las coaliciones autoritarias (1958, 1963, 1973, 1983). Y la inercia de tradiciones pre-modernas y pre-republicanas (dictatoriales), en el contexto de una crisis orgánica del capitalismo, habrían incidido en la naturaleza moderadoras o dominantes de las coaliciones autoritarias que dieron los golpes de 1962, 1966 y 1976.

Las etapas que se iniciaron con los golpes de 1962, 1966 y 1976 podrían entonces relacionarse con los antecedentes y configuraciones que señalamos: a) en el caso del golpe de 1962, este habría sido la revancha del neo-liberalismo contra la derrota electoral de 1958 y el Pacto Perón-Frondizi; b) en el caso del golpe de 1966, este habría sido el inicio de una involución o contraola regresiva que habría de perdurar con altibajos hasta 1983 o mera revancha del nacionalismo fascista contra la Revolución de 1955, el golpe de 1962 y su beneficiario político inmediato, el Radicalismo del Pueblo; y c) en el caso del golpe de 1976, este habría sido la revancha del liberalismo fascista contra la Revolución de 1966 y su beneficiario político inmediato el Peronismo y sus diferentes variantes.

Planteos militares, golpes y dictaduras.

Con el crecimiento de la izquierda en América Latina en general y en Argentina en particular, producto de la resurrección liberal que se vivía (1955-66); se desarrollaron los factores desencadenantes de una involución o contraola regresiva. La ruptura política que dió lugar a dicha contraola o involución, coincidió con la fase mundial de estancamiento de la cuarta onda larga de Kondratieff (1967/71-?),²¹ y trajo su corolario de resistencia popular y de planteos militares, golpes y dictaduras, cada vez más sangrientos.

Al amparo de la deslegitimación y proscripción del Peronismo, tuvo lugar un renacimiento de los mitos del caudillo, el gaucho y la montonera, y del líder desterrado (una versión vernacula del mito del rey cautivo), un crecimiento general de las llamadas minorías intensas,²² un alto grado de

organización de las que actuaban en su interior (62 Organizaciones, Peronismo de Base, etc.),²³ una baja institucionalización del partido proscripto, y un desequilibrio en los incentivos distribuidos en favor de los incentivos de identidad colectiva. En el caso de la Revolución Libertadora, la salida electoral se operó en su postrer momento, cuando la coalición dominante se había fragmentado hasta alcanzar una profunda asimetría entre la Unión Cívica Radical del Pueblo (Balbín) y la Unión Cívica Radical Intransigente (Frondizi). Dicha salida se produjo en el gobierno del Gral. Aramburu, durante el cual se orquestó el Pacto Perón-Frondizi (1958).²⁴ Este pacto fue eficiente en términos electorales, pero configuró una situación de cooperación explícita que no fue funcional para controlar la incertidumbre, es decir para incorporar al Peronismo y afianzar la institucionalidad.²⁵ La involución o contraola iniciada con el efímero golpe de estado (1962) que derrocó a Frondizi,²⁶ fué consolidada --luego del breve interregno democrático (Illia)-- por la llamada Revolución Argentina (1966-1972), alimentada como por efecto de cascada por el golpe de estado ocurrido en Brasil (1964). Dicha última revolución fué continuada y agravada a una escala insospechada por el llamado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), sustentado éste en el golpe de estado acontecido en Chile (1973).²⁷

En cuanto a la coalición autoritaria responsable del golpe de 1962, el mismo habría sido precipitado por el voto argentino en la Conferencia de Punta del Este, donde se abstenía de votar la Resolución que promovía la expulsión de la representación Cubana del sistema interamericano.²⁸ Este golpe habría inaugurado, según O'Donnell, una democracia limitada; según Halperin Donghi (1964) una guerra civil larvada; y según Kvaternik (1990), habría sido también de naturaleza moderadora.²⁹ Sin embargo, en el plano de la cultura, se observaron claros indicios de una actitud reaccionaria y dominante, preludio de la hecatombe que se avecinaba.³⁰ El conflicto acontecido a posteriori del golpe, en el seno de las Fuerzas Armadas, entre la facciones azul y colorada, tuvo por objeto alterar las reglas del juego e intentar hacer factible --mediante el incentivo colectivo prestado por el afamado Comunicado 150-- lo entonces "imposible", vale decir la incorporación del Peronismo.³¹ Frustrado el intento, la primera facción emergió militarmente triunfante, pero se constituyó en un factor de poder que muy prontamente iba a producir una nueva ruptura en la estabilidad institucional.

La coalición autoritaria que produjo la ruptura institucional de 1966, llamada Revolución Argentina, habría sido --al decir de O'Donnell (1972)-- la que puso punto final al "juego imposible" iniciado en 1955 y la que comenzó una contraola regresiva (1966-1983), que correspondía a la segunda contraola de Huntington (1991).³² Esta contraola se habría originado como reflejo del rol desempeñado por Francia y los Estados Unidos en Argelia y el Sudeste Asiático (guerra de Vietnam) y como reacción contra la resurrección liberal (1955-1966), y que perduraría desde 1966, con un breve y sangriento interregno Peronista, hasta 1983.³³ En el golpe de estado de 1966 predominó una coalición de naturaleza dominante, titulada por O'Donnell (1978) burocratismo autoritario,³⁴ y producto de la doctrina militar de la Seguridad Nacional, de la cruel inercia de tradiciones pre-modernas y pre-políticas, y de una revancha del nacionalismo fascista contra:

a) la Revolución de 1955;

b) la coalición autoritaria que produjo la ruptura institucional de 1962 contra Frondizi;

y c) el beneficiario político inmediato de la salida electoral condicionada, orquestada en 1963, el Radicalismo del Pueblo (UCRP).³⁵

La resistencia popular insurreccional.

Paralelamente, a partir del impacto ideológico de un pensamiento y una estrategia discursiva existencialista y tercermundista (Fanon, Debray),³⁶ se gestó una resistencia popular insurreccional (Cordobazo, Tucumanazo, etc.), un proceso de relegitimación del peronismo y de deslegitimación de la burocracia obrera,³⁷ la aparición de numerosas minorías de las denominadas intensas, que desembocaron por un lado en una rebeldía clandestina y armada (ERP, FAR y Montoneros),³⁸ y por otro lado en rebeldías partidarias dentro de los partidos tradicionales (Movimiento de Renovación y Cambio, Junta Coordinadora, Franja Morada, etc.), y un desequilibrio en los incentivos distribuidos en favor de los incentivos de identidad colectiva. En algunas regiones, como el Tucumán, esta rebeldía llegó a alcanzar instancias de un doble poder.

En medio de la conmoción política provocada por la insurrección popular ocurrida en Córdoba y conocida como el Cordobazo, el posterior secuestro y ejecución del ex-Presidente Gral. Pedro Eugenio Aramburu habría obrado a juzgar por los comunicados Montoneros como represalia por los fusilamientos de 1956 y --en analogía con las causales del crimen de Urquiza en 1870-- como una resultante de la entonces llamada lucha de clases.³⁹ En esa época, los desacuerdos sobre problemas contemporáneos (proscripción del Peronismo), con la publicación de la correspondencia epistolar entre John W. Cooke y Perón, son el punto de partida para politizar las divergencias sobre la memoria histórica remota, materializada en las obras de Astrada, Jauretche, Hernández Arregui, Palacio y José María Rosa.⁴⁰ Y el punto de llegada o destino serían los desacuerdos sobre el discurso o contenido de los mitos de origen, pues el Peronismo también aspiraba a instaurar un nuevo momento original.⁴¹ Estas divergencias concretaron una profunda ruptura en la continuidad del discurso y la memoria del pasado histórico próximo y lejano, y consiguientemente tal como lo enuncian Candau (2001) y Rinesi (2003), se fue gestando una lenta deslegitimación de los depositarios del poder político presente, es decir de la democracia post-Peronista.⁴² En particular, a propósito de un libro de Leon Pomer (1968) sobre la Guerra de la Triple Alianza, se suscitó en el Boletín del Instituto Juan Manuel de Rosas una trascendental polémica entre Jose Maria Rosa (1964), viejo amigo de Cooke, y Juan Pablo Oliver (1969, 1977), donde este último tomó partido por Mitre y Buenos Aires, y Ortega Peña y Duhalde (1969) por el Mariscal López y el Paraguay. Estos dos últimos autores señalaban que la Montonera de Felipe Varela, que distrajo las fuerzas destinadas a combatir el Paraguay, constituía una expresión de la "lucha de clases" del campesinado proletario contra la oligarquía terrateniente. Estos autores, con los que Rosa coqueteó, pertenecieron a la izquierda nacionalista del Peronismo Revolucionario, dirigían el periódico Militancia, y aunque ostentaron una actitud crítica frente a la Organización Montoneros tuvieron una responsabilidad indirecta en la gestación intelectual de la misma.⁴³

Para que la ya aludida Revolución Argentina, encabezada en su primer momento por el Gral. Juan Carlos Onganía, al igual que diez años más tarde la dictadura conocida como el Proceso de Reorganización Nacional (PRN) (1976-83), no cayera en los equívocos incurridos por las Revoluciones o Contrarrevoluciones de 1930 y 1943 --que reconocieron la vigencia de la Corte Suprema-- procedieron a destituir a los tres Poderes, disolver a todos los partidos políticos, prohibir sus actividades, intervenir las Universidades Nacionales,⁴⁴ otorgar a la burocracia sindical el control de las obras sociales;⁴⁵ imponer una severa censura ideológica y adoptar Actas y Estatutos que se caracterizaron por subordinar la Constitución Nacional y no imponer cronograma ni plazo alguno.⁴⁶ En el caso de la Revolución Argentina, la salida electoral se operó en su postrer momento, cuando la coalición dominante se había fragmentado escandalosamente.⁴⁷ Dicha salida se produjo en el gobierno del Gral. Lanusse, quien en 1972 convocó a un frustrado pacto, denominado Gran Acuerdo Nacional (GAN), para lo cual dictó una Enmienda Constitucional Provisoria de efectos temporales y limitación

de contenido revisorio, sujeta a una convalidación posterior, que modificó

"...los términos de duración de los cargos electivos, reincorporó la reelegibilidad presidencial aunque por término menor al de 1949, amplió la representación del Senado de las provincias, incorporó la autoconvocatoria parlamentaria, etc".⁴⁸

La hora de la conciliación.

Sin embargo, la coalición autoritaria dominante, pese a las reformas constitucionales introducidas, y debido a la presión de los sectores radicalizados de la coalición opositora, debió aceptar una transición anticontinuitista pues no estuvo ya en condiciones de imponer restricción ni proscripción política alguna. Esta circunstancia se debió fundamentalmente al cierre de filas que los partidos políticos practicaron en la conciliación denominada Hora del Pueblo (1973).⁴⁹ El único condicionamiento real fué puramente militar, al no descabezarse las cúpulas de las tres Fuerzas Armadas.⁵⁰ La conciliación, titulada La Hora del Pueblo, a diferencia del Pacto Perón-Frondizi, clausuró definitivamente una vieja rivalidad (produjo el histórico abrazo de Perón y Balbín), configurando una situación de cooperación implícita, eficiente y sin coacción ni coincidencia en las preferencias políticas.⁵¹

Tras la masacre de Ezeiza, ocurrida al retornar Perón por segunda vez de su larga residencia en España, tuvo comienzo el proceso de desmovilización y deslegitimación de las organizaciones armadas (Montoneros). Es importante destacar que la conciliación no nació de un Pacto o Acuerdo político explícito, con miras a la conformación de un binomio presidencial que garantizara una sucesión pacífica.⁵² Los sectores radicalizados del Peronismo y del Radicalismo conjuntamente con la extrema derecha del primero lo impidieron. Más luego, una vez garantizada la sucesión en manos de la extrema derecha, se desató en el seno de la coalición electoral triunfante (FREJULI) una furiosa lucha interna, donde las organizaciones armadas (Montoneros), convocadas en el espacio simbólico (Plaza de Mayo), fueron definitivamente deslegitimadas por el líder supremo.⁵³ Este profundo desgaste político generó una desmovilización popular, que una vez muerto Perón llevó a una represión sangrienta ejecutada clandestinamente por un terrorismo blanco (Triple A), lo cual dió lugar a un nuevo golpe de estado, pero esta vez dotado de una naturaleza hegemónica con planes de aniquilación o solución final.⁵⁴

El pasaje del clivaje ideológico al cultural.

Finalmente, con la descomposición de los discursos políticos Marxistas y Populistas, con el auge de la Nueva Derecha, y con la "caída" del Muro de Berlín (1989), la finalización de la Guerra Fría y la comprobación de la teoría de la interdependencia compleja,⁵⁵ se inició en América Latina una ola progresiva,⁵⁶ que se habría originado como reacción contra la contraola regresiva que había comenzado en 1966.⁵⁷ Como consecuencia de esta nueva ola política se dió:

- a) el pasaje en los conflictos internacionales de un clivaje ideológico a uno cultural (lucha de civilizaciones);
- b) la disolución de viejas distinciones entre el capital y el trabajo, el estado y la sociedad civil, el arte de elite o vanguardia y el arte popular,⁵⁸ y de categorías fundacionales tales como: familia, capitalismo, feudalismo, tercer mundo, estado, nación y progreso;⁵⁹

- c) la formulación de un nuevo rol del estado, que de una versión ampliada pasó a una versión donde los derechos humanos, la desregulación del estado, la liberalización del comercio y la privatización de las empresas estatales ocuparon el centro de la escena;⁶⁰
- d) una crisis de representación política manifestada en el pasaje de la política del partido burocrático de masas (muerte del clientelismo partidista) al partido profesional-electoral, de Kirchheimer (1980);⁶¹ y del espacio político unidimensional al multidimensional compuesto de fracturas estructurales superpuestas (pre-modernas, modernas y post-modernas), de Rokkan (1970), Panebianco (1988) y von Beyme (1995);

Así como el pasaje del conflicto entre naciones al conflicto entre ideologías, dió lugar a las políticas neutralistas de los países periféricos, el pasaje del clivaje ideológico al cultural llevó a la América Latina a enfriar su pasión por el bloque de los llamados Países No Alineados y a limar las asperezas que mantenía con las potencias Occidentales.

A diferencia de la Revolución Argentina, el llamado Proceso (PRN), encaró la cuestión de la llamada subversión mediante una suerte de decisionismo genocida o **solución final**,⁶² fundada en el fatalismo cíclico de una teoría generacional (Perrioux, 1970); y en la experiencia colonial y neo-colonial Europea y Norteamericana, y la cuestión fiscal mediante fórmulas financieras que no alcanzaban medidas estructurales, viéndose en ello sometido a la tenaza de un cuoteo en la distribución del poder entre sus tres Fuerzas represoras.⁶³ Una vez fragmentada y derrotada militarmente en un conflicto internacional con una potencia extranjera la coalición autoritaria que le dió vida,⁶⁴ y convocada la salida electoral, el PRN no estuvo en condiciones de imponer restricción o proscripción política alguna. La transición a la democracia participativa lograda en 1983 inauguró una nueva forma de hacer política,⁶⁵ desequilibró la distribución de los incentivos en favor de los incentivos selectivos, y si bien denunció el Pacto militar-sindical --que en lugar de disminuir acentuaba la incertidumbre política-- aceptó: a) que en el juzgamiento de dichos crímenes se omitieran aquellos practicados por la Triple A durante el gobierno de la viuda de Perón; b) tuviere prelación el fuero militar; c) no se debatieran en el parlamento las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad; y d) no se dieran de baja los oficiales involucrados en dichos crímenes.⁶⁶

Pero para que en Argentina la transición desde la contraola regresiva (1966-1983) a la ola progresiva (1983-?) fuera creíble a escala nacional e internacional, fué preciso que a diferencia de transiciones anteriores --como en 1946 cuando el Peronismo le hiciera juicio político sólo a la Corte Suprema-- la facción más radicalizada de la coalición opositora (el Radicalismo) gestara una estrategia de confrontación con el régimen militar desplazado del poder alimentada por el mito republicano que la lectura del Preámbulo de la Constitución suscitaba.⁶⁷ Dicha estrategia de radicalización la encabezaba -por vez primera en los anales de la historia latinoamericana-- la revocación de la auto-amnistía y el proceso judicial a los miembros de la Junta Militar responsables tanto del genocidio practicado entre 1976 y 1982 como de la derrota militar en la Guerra por las Islas Malvinas.⁶⁸

En dicha estrategia también se incluía la modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales (de sindicalización obligatoria),⁶⁹ pero se ignoró la progresiva crisis fiscal, que incluía una moratoria internacional en el pago de la deuda externa,⁷⁰ supeditando el manejo de la crisis económica a "...la racionalidad política de la transición democrática".⁷¹ Los efectos provocados por estos intentos reformistas en el seno de la burocracia sindical, los frustrados propósitos de revisión de la ingente

deuda externa contraída con las metrópolis financieras del mundo, y los intentos punitivos en el seno de la burocracia militar, propiciaron un crónico clima de boicot y golpe que obligó al gobierno Radical a acordar una serie de claudicaciones. Estas fueron: a) con los sindicalistas un efímero Pacto Social y un fugaz gabinete de coalición; b) con los acreedores internacionales el abandono de la distinción entre deuda legítima e ilegítima y el reconocimiento de dicha deuda; y c) con los militares el llamado Pacto de Semana Santa (cláusulas del Punto Final y Ley de Obediencia Debida), que vino a acentuar el grado de incertidumbre política al alentar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado.⁷² Más precisamente, las leyes del Punto Final y de Obediencia Debida legitimaron el avance de los Poderes Ejecutivo y Legislativo sobre la independencia del Poder Judicial.⁷³ Aunadas estas coyunturas a la galopante crisis económica, causada por una deuda externa varias veces millonaria; a la resistencia a celebrar un necesario ajuste en el aparato del estado; y a una inflación desenfrenada, que culminó en una hiperinflación,⁷⁴ y en saqueos a los supermercados, la base política del Radicalismo se desmoronó, dando la victoria electoral al Peronismo.⁷⁵

Esta primera transición electoral --en medio de una profunda crisis de representación y gestión políticas, y de massmediatización de la vida política, que provocó el adelantamiento del traspaso del mando-- fué al decir de Novaro (1994), "...una crisis de las formas de participación y de identificación tradicionales".⁷⁶ No siempre, al decir de Novaro (1995), los regímenes representativos de gobierno (cuya función es la de preservar los vínculos en constante disgregación) concilian los intereses divergentes, ni la participación electoral "...y demás procedimientos institucionales bastan para controlar su accionar".⁷⁷ Esta crisis permitió practicar la tesis de la inversión de posiciones, de Sartori (1992);⁷⁸ o del enroque político, formulada por Kvaternik (1995); y transformar la estructura económica del país, invirtiendo las tradicionales políticas estatistas del Peronismo y del Radicalismo, privatizando todos los servicios públicos (incluida la seguridad y las recaudaciones fiscales), acelerando la movilidad social descendente de grandes sectores sociales, fortaleciendo a una nueva burguesía y debilitando la estructura sindical corporativa.⁷⁹

Sin embargo, estas profundas reformas, al debilitar el estado, y alimentar el "catch all party", o partido "atrapatodo", o partido escoba de centro,⁸⁰ la democracia audiovisual o videopolítica con su régimen de partidos profesional-electorales,⁸¹ y una forma de gobierno que O'Donnell (1994) ha denominado democracia delegativa, y el ex Vicepresidente Carlos Alvarez democracia tarifada, habrían afectado seriamente los niveles de competitividad política y de consolidación de la democracia,⁸² radicalizado a los intérpretes de las culturas subalternas,⁸³ alentando el nepotismo,⁸⁴ corrompiendo y comprometiendo la independencia del Poder Judicial,⁸⁵ abdicando el estado el monopolio de la violencia, y desmintiendo la tesis de Stephens (1988) de que ninguna democracia competitiva y participativa ha sido reemplazada por otra democracia más restrictiva y oligárquica.⁸⁶ La vigencia de esta suerte de democracia delegativa o tarifada se revela, para Naishtat y Kitzberger (1995), en: a) la caída en la participación política, b) la baja en las expectativas depositadas en la democracia liberal, c) la creciente despolitización, impopularidad de la política e ignorancia de su naturaleza y funcionamiento, y d) la indiferencia y desinterés cívicos, y el cinismo e ironización de la escena política.⁸⁷ La desocupación y marginación creciente de gruesos segmentos de la población ha dado nacimiento a nuevos sujetos sociales antes inexistentes (piquetero, cacerolero, cartonero), cuyas prosapias se las haría descender del mítico Cabecita Negra, protagonista social de los albores del Peronismo.⁸⁸ Paralelamente, las crecientes prácticas clientelísticas y la anemia participativa y deliberativa en la vida interna de los partidos llevó a un descenso significativo en las tasas de afiliación partidaria.⁸⁹ El cambio en la naturaleza de las acciones colectivas en detrimento del contenido político ha llevado a una indiferencia y marginación de la política como espacio público compartido en

términos de una disminución significativa de conferencias, debates, mesas redondas, y en el creciente peso en la opinión pública de la imagen y el personalismo de los políticos en detrimento de las políticas programáticas y las instancias partidarias colectivas.⁹⁰ Por el contrario, para Palermo y Novaro (1996), se ha recuperado la autoridad, unidad y efectividad de la gestión pública, lográndose "...una renovada autonomía frente a los grupos de interés".⁹¹

Estrategias Transformistas.

Para legitimar la continuidad de su proyecto, y merced a su mayor capacidad potencial de intimidación,⁹² el gobierno neo-liberal del Justicialismo ensayó una estrategia transformista, y mediante una suerte de extorsión forzó al Radicalismo a revivir el frustrado Acuerdo Alfonsín-Cafiero y entablar una concertación,⁹³ titulada Pacto de Olivos, donde se convalidó una nueva Reforma de la Constitución.⁹⁴ En dicha reforma se acordó un llamado Núcleo de Coincidencias Básicas,⁹⁵ que incluía nuevas instituciones e incentivos,⁹⁶ y la reelección presidencial.⁹⁷ Este Pacto --con lejanas reminiscencias al ensayado por Mitre y Roca como consecuencia de la Revolución del 90-- tuvo como involuntarias derivaciones una fuerte pérdida de identidad en el Radicalismo, que derivó en una intensa desmovilización partidaria, y el lanzamiento político de una nueva agrupación política denominada Frente Grande, más luego conocida como FREPASO, que vino a disputar al Radicalismo la hegemonía de la oposición.⁹⁸ Tal fue éxito del FREPASO, que la UCR no tuvo más remedio que ir al pie y celebrar con él en septiembre de 1997 una Alianza política, que tuvo la desgracia de ser sólo un acuerdo electoral.

Con el fin de justificar su sometimiento a la extorsión Menemista, materializada en el Pacto de Olivos, el Convencional Constituyente y ex-Presidente Raúl R. Alfonsín ocultó la debilidad política del Radicalismo --a la que se llegó por su endeble gestión presidencial-- bajo el sofisma de que el clima político de empate, o del péndulo cívico-militar, propicio para el golpismo en Argentina, había obedecido a la vigencia de estrategias de confrontación salvajes, donde no regían pactos ni acuerdos, pues "...en 1949 se lleva a cabo una reforma constitucional sin los radicales, y en 1957 los antiperonistas promovieron otra sin los peronistas".⁹⁹ Y para el Convencional Humberto Quiroga Lavié, los golpes de estado como los que derrocaron a Hipólito Yrigoyen, Arturo Illia y María Estela Martínez de Perón no habrían ocurrido "...si hubiera habido una alternativa a ser negociada con la oposición a los efectos de integrar una descentralización del poder en una figura nueva como un jefe de gabinete".¹⁰⁰ Recientemente, Alfonsín (1996) ha incurrido en argumentos personalistas para juzgar el pasado reciente en que le tocó ser protagonista, abundando en juicios auto-justificatorios, cayendo para ello en una caprichosa y contradictoria clasificación de los gobiernos argentinos, según la relación que practicaron entre la moral y la política, y asignándose a sí mismo el rol de continuador de la tradición ética del radicalismo histórico.¹⁰¹

En resumen, los ciclos ideológicos y las olas y contraolas políticas no han mantenido una correlación directa o positiva con los ciclos económicos. Entre ellos hubo notorios desfasajes, producto de sus diversos grados de inercia o atraso relativo. Mientras la última parte de la fase de crecimiento de la cuarta onda larga de Kondratiev (1955-1967/71) vino efectivamente a correlacionarse en forma positiva con el inicio de una ola progresiva (1955-1966); la contraola regresiva, que se inició con la dictadura de Onganía (1966-1983), se correlacionó positivamente con la fase de estancamiento de la cuarta onda larga de Kondratiev (1967/71-?), y con un séptimo ciclo ideológico de inspiración marxista y existencialista.¹⁰²

No obstante las opiniones acerca de los supuestos beneficios de las estrategias conciliatorias (pactos o acuerdos), que dieron lugar a reformas constitucionales y legislativas (electorales y reglamentarias de las incompatibilidades republicanas) concluimos que la política Acuerdista, de naturaleza elitista, se compadece con las tradiciones del Antiguo Régimen Colonial, la dictadura Rosista,¹⁰³ y la República oligárquica. Por otro lado, durante el período de gestación de la Modernidad, el hipotético Acuerdo Mitre-Urquiza (1862) no impidió las rebeliones del Chacho Peñaloza y de Felipe Varela; ni el Acuerdo Roca-Mitre (1891) disuadió las revoluciones Radicales de 1893 y 1905 ni apartó del suicidio a Leandro Alem; ni el Acuerdo Sáenz Peña-Yrigoyen (1910), obstruyó el crecimiento del anarco-sindicalismo (Semana Trágica y huelgas Patagónicas),¹⁰⁴ las revueltas Lencinistas y Cantonistas en Mendoza y San Juan y el golpe de Uriburu en 1930;¹⁰⁵ ni el levantamiento de la abstención electoral, por parte de Alvear en 1935, evitó el fraude electoral, los crímenes políticos, el suicidio de Lisandro de la Torre y de Leopoldo Lugones, el crimen de Bordabehere, y el golpe de 1943; ni el Pacto Perón-Frondizi (1958) desbarató el golpe de 1962; ni el Acuerdo Perón-Balbín (1972) impidió el acceso al poder de la extrema derecha Lopezreguista y el golpe de Videla de 1976; ni el Pacto de Semana Santa (Punto Final y Obediencia Debida) neutralizó o desmovilizó a las fuerzas militares golpistas; ni el Pacto Menem-Alfonsín o Pacto de Olivos (1994) ha obstaculizado la creciente corrupción de la sociedad civil y de la esfera pública,¹⁰⁶ el fortalecimiento del presidencialismo, la abdicación por parte del estado del monopolio de la violencia (privatización de la seguridad), el nepotismo, el amiguismo, la connivencia con el narcotráfico y el narcolavado internacional,¹⁰⁷ las insurrecciones regionales,¹⁰⁸ una potencial insurrección popular y la eventual recaída en una nueva contraofensiva regresiva.¹⁰⁹ Queda entonces en manos de las fuerzas progresistas frenar esta crisis e impedir --mediante fuertes políticas moralizantes y reformistas-- que la crisis democrática se transforme en catastrófica caída.

NOTAS

¹ los procesos de legitimación, deslegitimación y relegitimación de los partidos anti-sistema, de Sartori (1992); el pasaje del régimen de partidos burocráticos de masas a los partidos profesional-electorales, de Kirchheimer (1980); y las líneas de fracturas pre-modernas (etno-lingüísticas, estamentales, religiosas y geográficas), modernas (ideológicas, políticas, económicas y sociales) y post-modernas (éticas y estéticas) en la base del conflicto político organizado, de Rokkan (1970), Panebianco (1982, 1988) y von Beyme (1995). También tienen cabida la relación entre el grado de institucionalización de los partidos y el grado de cohesión, estabilidad y organización de los grupos que actúan en su interior, de Panebianco (1988); el grado de asimetría (fuerza o debilidad) en la distribución del poder entre los partidos políticos (indispensabilidad y capacidad de intimidación, afiliación y movilización), de North, 1990; Sartori, 1992; y Carrizo, 1997; la gestación de partidos y facciones políticas desde el poder o desde la oposición; de legitimación externa o interna; y de hegemonía parlamentaria o partidaria, de Panebianco, 1988; y Sartori, 1992; la incapacidad de controlar el conflicto en función de la multiplicidad de los espacios no institucionales vigentes, de Smulovitz (1988); la distinción entre crisis con caída o transición discontinua, y crisis sin caída o transición continua, de Morlino (1988a y 1988b) y Sartori (1992); las transiciones a la democracia por colapso, transacción y destape (extrication), de O'Donnell (1989), Linz (1990), Mainwaring (1992), Valenzuela (1992) y Munck y Leff (1997); y la intensidad de la competitividad política en función inversa a la multiplicidad de espacios institucionales, de Dahl (1966).

² Este fué el caso de la coalición de Rochistas e Irigoyenistas contra los Juaristas en el Tucumán

de 1886; de la Alianza Civil entre Socialistas y Demócratas Progresistas contra la llamada Concordancia en 1932; o de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) versus la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) en 1958.

³ El caso de la Sociedad Rural Argentina, ver Randall, 1964, 141; citado en Manzetti, 1992, 605.

⁴ ver Pfeffer, 1992, 140ss. Acerca de la noción de premios y castigos como incentivos selectivos para la acción colectiva, ver Oliver, 1980.

⁵ parafraseado de Morrow, 1991, 907.

⁶ Morrow, 1991, 907. Este fue el caso de la Unión Cívica Radical en oportunidad de tener que enfrentar al Justicialismo en 1946.

⁷ tales como los de 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976.

⁸ O'Donnell, 1972, capítulo IV; y Acuña y Smulovitz, 1995, 89-90.

⁹ Acuña y Smulovitz, 1995, 18.

¹⁰ Nancy y Lacoue-Labarthe, 1983; Deleuze, 1987; y Lefort, 1990.

¹¹ Wright, 1975; Peralta Ramos, 1978; y Sábato, 1988. Acerca de las estrategias políticas, económicas y culturales implementadas por la elite argentina frente a la inestabilidad política y la consiguiente ruptura institucional (golpes, asonadas, motines, etc.), los estudios de Waisman (1987) bucearon en el excepcional y cíclico (curvilíneo) desarrollo político y económico argentino (auge entre 1880 y 1930; y decadencia a partir de 1930).

¹² La universalidad del sufragio, de los derechos ciudadanos y de las garantías individuales, la divisibilidad del poder, la independencia de la justicia, la inamovilidad de los jueces, la representatividad de la democracia, la republicanidad y auto-determinación de los gobiernos provinciales y municipales, la incompatibilidad entre los cargos ejecutivos, judiciales y legislativos, la igualdad ante la ley, la periodicidad de los cargos ejecutivos y legislativos, la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad y privacidad individual, la nacionalidad del ejército y la iglesia (Patronato), la separación del estado de la sociedad civil, la obligatoriedad escolar, y la autonomía de las universidades.

¹³ ver Nancy y Lacoue-Labarthe, 1983, 11-28; cit. en Fraser, 1984, 129, 137 y 140-143; y ver Deleuze, 1987, 56.

¹⁴ federalismo, representatividad democrática, división de poderes, independencia de la justicia, parlamentarismo, bicameralismo, incompatibilidades, etc.

¹⁵ Galston, 1991, 217 y 244; y Macedo, 1990, 138-139; citados en Kymlica y Norman, 1996, 89. Ultimamente, los trabajos más elocuentes sobre la relevancia de la virtud cívica fueron escritos por liberales como Gutmann (1987), Macedo (1990) y Galston (1991). Para Galston (1991), las virtudes requeridas para el ejercicio de la ciudadanía pueden ser clasificadas en cuatro conjuntos: a) virtudes

generales: coraje, respeto de la ley, lealtad; b) virtudes sociales: independencia, apertura mental; c) virtudes económicas: ética del trabajo, capacidad de postergar las gratificaciones, adaptabilidad al cambio económico y tecnológico; y d) virtudes políticas: capacidad de percibir y de respetar los derechos de los demás, disposición a no exigir mas de lo que se puede pagar, capacidad de evaluar el desempeño de quienes ocupan cargos públicos, disposición a participar en el debate público (Galston, 1991, 221-224; citado en Kymlica y Norman, 1996, 95).

¹⁶ ver Snyder, 1961; Schelling, 1960; y Wohlstetter, 1959; citados en Hoffmann, 1991, 111.

¹⁷ Sobre el conflicto entre la democracia y la doctrina de la seguridad nacional en América Latina, ver Zagorski, 1988 y 1992.

¹⁸ acerca del impacto del pensamiento de Fanon, ver Fashina, 1989; Parry, 1992; Lazaries, 1993; y Robinson, 1993. Sobre el impacto del pensamiento de Camus, ver Said, 1993, 169-185. Y acerca de la revolución Vietnamita, ver Tai, 1992.

¹⁹ ver Carpani, 1962; y Vila, 1987. Sobre el complejo de culpa y la melancolía porteña en Cortázar, ver O'Connor, 1995; y sobre la recepción de Walter Benjamin en la Argentina, ver Wamba Gaviña, 1993.

²⁰ Sobre las ideas fuerza en el debate político durante los años de la "Libertadora", 1955-1958, ver Spinelli, 2003.

²¹ Mandel, 1978, 130-132; y Prelooker, 1996, 80-86.

²² Sobre la llamada nueva izquierda argentina, ver Hilb y Lutzky, 1984. Por minoría intensa debe entenderse una minoría que no es sólo numérica sino que conlleva intensidad ideológica (Carrizo, 1996, 17, nota 29).

²³ Esta regla fué formulada por Panebianco, 1990, 125.

²⁴ ver Spinelli, 1991.

²⁵ sobre el Desarrollismo de Frondizi y Frigerio, ver Eberle, 1997.

²⁶ ver Rodríguez Lamas, 1984; Smulovitz, 1988; y Zagorski, 1988, 417. Sobre el desarrollismo, ver M. Acuña, 1984; y Sikkink, 1991. Sobre el pacto Perón-Frondizi, ver Prieto, 1963.

²⁷ ver Rouquié, 1981; O'Donnell, 1982; y Kvaternik, 1987 y 1990. Cavarozzi (1995) sostiene que las Fuerzas Armadas pasaron gradualmente de una visión de democracia tutelada a la articulación de un proyecto de dictadura sine die (Cavarozzi, 1995, 36).

²⁸ Smulovitz, 1988, II, capítulo VIII, p.133.

²⁹ Kvaternik, 1990, 11. Sobre el período que se extiende desde el golpe contra Frondizi hasta la restauración Peronista, ver Potash, 1996.

³⁰ ver el caso del Instituto Malbrán, en Corbière, 1984; y Bortnik, 1984.

³¹ Kvaternik, 1978, 419; Rouquié, 1981-82, II, cap.5; y Mazzei, 1997. La noción de juego imposible fué inaugurada por O'Donnell (1972) para explicar el péndulo cívico-militar del pos-peronismo (O'Donnell, 1972, cap.IV).

³² A juzgar por Kvaternik (1978), y a diferencia de O'Donnell (1972), el golpe del 66 pudo haber sido evitado porque el régimen democrático proveía de una solución a la incertidumbre o anomalía peronista (organización fundada en la dominación carismática) transformada en enigma (Kvaternik, 1978, 431). Sobre la Revolución Argentina, ver Roth, 1980; y Rouquié, 1981-82, II, cap.6.

³³ ver Kandel y Monteverde, 1976; Lowy y Sador, 1976; y Huntington, 1994, 31. Sobre el terrorismo blanco de la Triple A, ver Gillespie, 1987, 191-197.

³⁴ Schamis (1991) ha argumentado que la noción de burocratismo autoritario acuñada por O'Donnell es inapropiada o errónea para caracterizar las políticas de los regímenes militares de la década del 70, por cuanto dicha noción fué utilizada para describir regímenes que procuraban políticas de sustitución de importaciones y no para políticas orientadas a la exportación y abiertas a la competencia internacional tal como las ensayadas por los regímenes militares neoconservadores (Schamis, 1991, 201-20; citado en Sigmund, 1993, 117-118).

³⁵ Kvaternik, 1990, 14 y 18; y Buchanan (1985). Para este episodio, ver la obra de Grondona (1967), apología crítica de la dictadura militar conocida como Revolución Argentina, vigente a partir de 1966. Sobre el papel cumplido por el dirigente Radical Ricardo Balbín en este período, ver Monteverde, 1983.

³⁶ para los orígenes del tercermundismo, ver Liauzu, 1982; y Fashina, 1989.

³⁷ ver Feinmann (1974, 1983) y Calello y Parcero (1984).

³⁸ Para Waisman (1987), la situación revolucionaria de la década del setenta fué la contradictoria resultante de las políticas contrarrevolucionarias diseñadas en la década del cuarenta por una generación anterior (Waisman, 1987, 277). Para la denominada "larga agonía de la Argentina peronista", ver Halperín Donghi, 1994. Para el estudio de la guerrilla urbana, ver Russell, Schenkel y Miller, 1974. Para el estudio del Cordobazo, ver Brennan, 1994. Y para el estudio de los Montoneros y la llamada resistencia peronista, ver Hodges, 1976; Mansilla, 1980; Rozitchner, 1985; Sigal y Verón, 1986; y Gillespie, 1987. Para una crítica de las posiciones de Rozitchner (1985) y Sigal y Verón (1986), ver Halperín Donghi, 1996, 143-149.

³⁹ ver Gillespie, 1987; y Bonasso, 1984. La evidencia de esa pretendida memoria histórica la prueba el nombre de Juan José Valle, atribuido al principal comando de la Organización Montoneros.

⁴⁰ Sobre las contradicciones secundarias o crisis intra-elites, ver Higley, Burton y Field (1990); y Lachmann (1990).

⁴¹ Sobre el momento de origen, ver Candau, 2001, 92-94.

⁴² ver Quattrocchi-Woisson, 1995, 359, nota 42; y Amaral, 1996. Consultar Candau, 2001, 166; y Rinesi, 2003, 79.

⁴³ Sobre las redes sociales del catolicismo post-conciliar y los Montoneros, ver Donatello, 2003.

⁴⁴ aquellos profesores renunciantes que --como el historiador Tulio Halperín Donghi-- eran investigadores del CONICET y tenían a la Universidad como lugar formal de trabajo acudieron al Dr. Bernardo Houssay para evitar que se los exonerara del CONICET. Houssay, que en ese entonces presidía el CONICET, les manifestó que nada podía hacer por ellos, motivo por el cual se vieron obligados a partir al extranjero (referencia personal transmitida por el Dr. Halperín Donghi).

⁴⁵ ver Senén González y Gallo, 1984.

⁴⁶ Selser, 1973; y Botana, 1988, 37. Para el interregno Camporista, ver James, 1976; Maceyra, 1983; Jitrik, 1984; Itzcovitz, 1985; y Erro, 1993. Para las raíces ideológicas de la llamada "Guerra Sucia", ver Spitta, 1993.

⁴⁷ al Gral. Onganía le sucedió --por obra y gracia de un golpe interno-- el Gral. Levingston, elegido en voto dividido por la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas; y al Gral. Levingston le sucedió por medio de un putsch el Gral. Lanusse.

⁴⁸ Botana, 1988, 37; y García Laval, 1994, 49-50. La Comisión Asesora para el Estudio de la Reforma Institucional estaba integrada por los Dres. Julio Oyhanarte, Germán Bidart Campos, Carlos María Bidegain, Roberto Ignacio Peña, Pablo Antonio Ramallo, Rodolfo R. Rouzaut y Jorge Reinaldo Vanossi. En dicha Comisión el Dr. Bidart Campos firmó un dictámen en disidencia donde dejó en claro que la mera desaparición del Estatuto de Facto produce un reordenamiento natural con la Constitución Nacional por retener esta última la primacía jerárquica (García Laval, 1994, 49 y 214, notas 23 y 27).

⁴⁹ Sobre las Fuerzas Armadas en la década del 70, ver Perelli, 1993. Sobre la izquierda peronista, ver James, 1976. Sobre la relación entre Cámpora, Perón e Isabel, ver Maceyra, 1983 y 1984. Sobre la inestabilidad del tercer peronismo, entre 1973 y 1976, ver Landi, 1978; Itzcovitz, 1985; y Catterberg y Aznar, 1988. Acerca del sindicalismo y el tercer gobierno peronista, ver Torre, 1983. Sobre la Hora del Pueblo, ver Gillespie, 1987, 135; y Carrizo, 1997, 27. Para Carrizo (1997), la Hora del Pueblo configuraría una situación de cooperación implícita, eficiente y sin coacción (Carrizo, 1997, 27). Sobre la vida de Perón, desde el momento del exilio hasta su retorno al poder, ver Amaral y Plotkin, 1993. Y sobre el regreso de Perón, ver Zermeño, 1989.

⁵⁰ A juzgar por Maddison (1985), los gobiernos que lidiaron durante los 18 años previos al retorno de Perón no tuvieron éxito en mitigar las tensiones sociales que la recesión de 1930 y el primer experimento de Perón habían creado (Maddison, 1985, 55).

⁵¹ Carrizo, 1997, 27 y 33. Ver Pavón Pereyra (1985).

⁵² La fórmula Perón-Balbín fue una idea del dirigente de la CGT, José Ignacio Rucci, quien había hecho imprimir y exhibir en Buenos Aires un afiche propiciando dicha fórmula (comunicación personal del Dr. Armando Balbín). Esta fórmula conjunta, a diferencia de la propuesta treinta años antes entre Perón y Sabattini, encontraba al primero en el final de sus días y sin ánimo alguno de

reiterar políticas hegemónicas.

⁵³ Gillespie, 1987, 181-190. Sin las dotes carismáticas con que contaba Perón, pero frente a semejantes opciones el ex-Presidente Alvear se encontró también en la circunstancia de tener que negar apoyo a conspiraciones subversivas de naturaleza militar.

⁵⁴ sobre este período, ver Feitlowitz, 1992; Palermo y Novaro, 1996, 49; y Carrizo, 1997, 34; y Flaskamp, 2002; y sobre la Triple A, ver Gillespie, 1987, 191-197.

⁵⁵ ver Cooper, 1968; Morse, 1976; y Keohane y Nye, 1988; citados en Hoffmann, 1991, 119.

⁵⁶ correspondiente a la tercer ola de Huntington (1991) y al tercer estadio de globalización de Mignolo, 1995.

⁵⁷ Huntington, 1994, 32. Para Huntington, los cambios que desempeñaron roles significativos en la transición de la tercera ola fueron: 1) la deslegitimación de los sistemas autoritarios; 2) el crecimiento económico mundial; 3) el aggiornamiento de la Iglesia Católica; 4) los cambios en las políticas de la Comunidad Económica Europea, la política norteamericana de Derechos Humanos, y los cambios en la política soviética; y 5) el efecto "bola de nieve" producido por los medios masivos de comunicación (Huntington, 1994, 53).

⁵⁸ Beverley, 1989; y Lefort, 1990, 151 y 156.

⁵⁹ Dirlik, 1994, 345; y Laclau, 1996, 95-102.

⁶⁰ ver Natale, 1993. Sobre el nuevo poder económico, ver Azpiazu, Basualdo y Khavisse (1986).

⁶¹ ver Panebianco, 1988, 491. Este último régimen consistió en la incorporación en las campañas electorales y en la vida partidaria, de la publicidad profesional, las encuestas de opinión (demoscopia), el mundo de los medios masivos de comunicación y la proliferación de los denominados operadores políticos, en desmedro del libre juego de las instituciones partidarias (Mesas Directivas, Convenciones, Juntas Seccionales, Consejos Distritales, etc.).

⁶² ver Pérez Lindo, 1981; Calello, 1987; Elkin, 1988; y Filc, 1997. Sobre el impacto psicoanalítico del terror, ver Kusnetzoff, 1986; Zukerfeld, 1986; y Ricón, 1986. Su impacto en la caída demográfica de la elite intelectual y política sólo es comparable a la experimentada durante el siglo XIX en las llamadas Guerras Civiles.

⁶³ Palermo y Novaro, 1996, 52.

⁶⁴ Al Gral. Videla lo sucedió el Gral. Viola; a éste, el Gral. Galtieri; y a este último, luego de la aventura militar Malvinense, el Gral. Bignone.

⁶⁵ esta forma profesional de hacer política se observó por vez primera en la exitosa campaña electoral de Alfonsín (Waisbord, 1994, 127).

⁶⁶ Para el llamado Proceso en la Argentina, ver Camarasa, Felice y González (1985); Sancinetti

(1988); Pion-Berlin (1989); Corradi, Fagen y Garretón, ed. (1992); y Andersen, 1993. Para la política de derechos humanos en la Argentina, ver Brysk (1994). Y para la producción de ficción literaria bajo el terrorismo de estado, ver Masiello, 1981. Viene al caso referir que el gobierno de la transición democrática convalidó en las Universidades nacionales los concursos de cátedra practicados durante el Proceso.

⁶⁷ sobre el Alfonsinismo, ver Novaro, 1994, 57-62; y Novaro y Palermo, 1996; y sobre las Fuerzas Armadas bajo Alfonsín, ver Tedesco, 1996.

⁶⁸ Para la mayoría de los autores (Fontana, 1984; O'Donnell, 1989; Linz, 1990; Mainwaring, 1992; Valenzuela, 1992; y Munck y Leff, 1997), la transición a la democracia que se operó en Argentina en 1984 fue de una transición por ruptura, a pesar de los numerosos elementos fácticos que abonarían la tesis opuesta, de una transición por transacción. Acerca de la ideología del terrorismo de estado, ver Pion-Berlin (1989); sobre el conflicto de Malvinas, ver Calvert, 1982; Eddy, Linklater y Gillman, 1982; Goldblat y Millan, 1983; Espínola, 1985; Burns, 1987; Fursdon, 1988; Middlebrook, 1989; Blakeway, 1991; Smith, 1991; y Freedman y Gamba-Stonehouse, 1992. Acerca del terrorismo de estado y la resistencia al mismo, ver Corradi, Fagen y Garretón (1992); e Isla y Taylor (1995); sobre derechos humanos y antisemitismo en la Argentina contemporánea, ver Senkman y Sznajder (1995); respecto al juicio a las Juntas, ver Moncalvillo, et. al. (1985), Verbitsky (1987), Ciancaglini y Granowsky (1995) y Nino (1997); sobre las Madres de los Desaparecidos, ver Fisher (1995); y sobre la llamada guerra sucia, ver Guest (1990); Graziano (1992) y Moyano (1995). Para un estudio de un juicio a un dictador, ver el que se le siguió al presidente venezolano Marcos Pérez Jiménez, en Ewell (1981). Para una lectura renovada del caso Malvinas, y de como debieran caracterizar los Argentinos a los Kelpers, ver la discusión entre Kymlicka (1996) y Young (1997).

⁶⁹ ver Gaudio y Thompson (1991).

⁷⁰ para más detalles sobre esta época, ver Giussani, 1986.

⁷¹ Palermo y Novaro, 1996, 74.

⁷² ver Norden, 1990, 1996a y 1996b; Crawford, 1990; y Camp, 1996. Acerca de los efectos de la impunidad, ver Jacques, 1996.

⁷³ ver el dictamen del Ministro de la Corte Suprema de Justicia Dr. Bacqué.

⁷⁴ ver Lodola, 1994; citado en Kvaternik, 1995, 14, nota 8.

⁷⁵ ver M. Acuña, 1995. Sobre la figura de Menem y sus orígenes en el Islam, ver Jozami, 1996.

⁷⁶ Novaro, 1994, 177.

⁷⁷ Novaro, 1995, 109.

⁷⁸ Sartori, 1992, 202.

⁷⁹ sobre el fenómeno Menemista, ver Cerruti y Ciancaglini, 1991; Cerruti, 1993; y Novaro, 1994,

76-89. Y sobre el neocorporativismo, ver Schmitter, 1992.

⁸⁰ categoría tomada de Kirchheimer, 1980, 346-347, citado en Panebianco, 1990, 497.

⁸¹ De acuerdo con Waisbord (1994), la incorporación de la publicidad profesional, las encuestas de opinión y la televisión, en las campañas electorales argentinas, ha sido evaluada no como producto de una innovación tecnológica sino de un cambio de actitud de los políticos respecto a los medios masivos, que nació debido a su incapacidad de llegar a los votantes (Waisbord, 1994, 127). En los Estados Unidos, la clase dominante financiera perpetúa su hegemonía intelectual mediante los llamados Think Tanks, ver Smith, 1994.

⁸² ver Sain, 1995. Para una opinión crítica del artículo de O'Donnell, ver Respuela, 1996; y Haggard y Kaufman, 1997, 279. Acerca de la apreciación que hace O'Donnell (1996) sobre el libro de Gunther, Diamandouros y Puhle (1996), acusándolos de argumentar teleológicamente, ver la réplica en Gunther, Diamandouros y Puhle (1997). Estos últimos sostienen que "...la mera institucionalización de las elecciones libres es insuficiente para considerar a un sistema completamente democrático" (Gunther, Diamandouros y Puhle, 1997, 205). Por su parte, O'Donnell (1997) alegó que los casos citados por sus críticos no son democracias sino regímenes pretorianos de masas (O'Donnell, 1997, 217).

⁸³ ver Bernard-Donals (1994).

⁸⁴ ver Azcune, 1991; y Novaro, 1994, 145. En el caso del último gobierno de la Unión Cívica Radical observar como algunos círculos o clanes familiares se enseñorearon de las estructuras de poder, contradiciendo así las tradiciones republicanas y anti-oligárquicas del Radicalismo. Observar también el caso de las dinastías oligárquicas de Corrientes (los Romero), Neuquén (los Sapag) y Catamarca (los Saadi). (Página 12, 17-IX-1989, pp.6-7; El Informador Público, 6-X-1989, año 4, n.158, p.6; y Los Periodistas, 20-X-1989, año I, n.6). Y finalmente, para el caso más reciente de los clanes riojanos de Menem y Yoma, ver Díaz et. al., 1989), y para el de San Luis, ver Wiñaski (1995) y Trocello de Vicens (1996). Para el caso extremo de Colombia, ver los artículos de Leal Buitrago (1988) y de Uribe y Alvarez Gaviria (1988).

⁸⁵ ver Gargarella, 1996b, capítulo 9.

⁸⁶ Stephens, 1988, 321. Acerca de la corrupción en los parlamentos de las democracias modernas, ver Klitgaard, 1988; Wolgast, 1991; Kurer, 1993; Montoya Thompson y Thompson, 1993; Mancuso, 1993; y Rasmusen y Ramseyer, 1994. Para una explicación institucionalista de la corrupción política, que trata específicamente acerca de la avaricia y la ambición en la Cámara de Representantes de USA, investigando las decisiones de ser reelegido o retirarse del Congreso, ver Meier y Holbrook, 1992. Sobre la institución del logrolling (contubernio consistente en el trueque de votos y en la ayuda recíproca) en USA, ver Berrington, 1995; Locke, 1995; Stratman, 1995; y Hall y Van Houweling, 1995. Ver asimismo, Kvaternik, 1990, 9.

Con respecto a la recesión económica, Pereira (1993) sostiene que "...a menos que la actual generación de reformistas reconozcan el contexto cíclico en el que están operando y acepten que para reasumir el crecimiento y la consolidación de la democracia se requiere de un estado fuerte, arriesgan promover medidas que eventualmente prueben ser dañinas tanto para las reformas orientadas hacia el

mercado como para las libertades políticas" (Pereira, 1993).

⁸⁷ Naishtat y Kitzberger, 1995, 172-173.

⁸⁸ Sobre los cartoneros o recuperadores de desechos y causas perdidas, ver Anguita, 2003. Sobre las protestas sociales en la Argentina : piquetes y cacerolazos en el marco de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, ver Herrero, 2002. Para una historia de los movimientos piqueteros y caceroleros de los '90 al 2002, ver Oviedo, 2001; y Kohan, 2002. Sobre el cacerolazo y la subjetividad postestatal, ver Lewkowicz, I2002.

⁸⁹ Sobre el clientelismo grueso, la fractura cultural de las poblaciones urbanas marginadas, y el clientelismo institucional, ver Trotta, 2003, 122-128 y 139-141.

⁹⁰ Naishtat y Kitzberger, 1995, 172-173.

⁹¹ Palermo y Novaro, 1996, 506.

⁹² Sartori, 1992, 161.

⁹³ ver Novaro, 1994, 79; y 1995, 115; Smulovitz, 1995, 80-82; Palermo y Novaro, 1996, 403-415; Carrizo, 1997, 37; y Munck y Leff, 1997, 360, nota 2.

⁹⁴ ver Novaro, 1995, 115; Palermo y Novaro, 1996, 414 y 416; y Carrizo, 1997. Para Acuña (1995b), el Pacto de Olivos configuraría una situación de negociación subóptima, que se edifica sobre un juego que responde a móviles esencialmente electoralistas; y para Smulovitz (1995), la génesis de la situación pactista parte de la neutralización que Menem logra sobre la oposición, y su resultado consigue un punto de equilibrio entre beneficios particulares y beneficios colectivos. Pero para Carrizo (1996), dicho Pacto --a diferencia del de la Hora del Pueblo-- fue ineficiente y con coacción, pero configuró una situación de cooperación explícita, donde se aplicó la hipótesis del intercambio de la mayoría numérica vs. minoría intensa, y fue funcional para --mediante la relegitimación de la asimetría electoral del Menemismo-- controlar la incertidumbre y afianzar la institucionalidad (Carrizo, 1996, 19, nota 34; y 1997, 20, 23 y 27). Para Etzioni-Halevy (1993), el enfatizar las teorías de los conflictos intra-elites la centralidad que poseían los pactos o acuerdos entre las elites, para lograr la consolidación de la democracia, ha llevado a subestimar la noción de la necesidad de la autonomía de las mismas. Por otro lado, para Karl (1990) y Valenzuela (1995), a diferencia de Di Palma (1990) y Diamandouros, Puhle y Gunther (1995), deben enfatizarse los aspectos negativos de los pactos (Munck y Leff, 1997, 360, nota 2).

⁹⁵ ver Quiroga Lavié (1994); García Lema, 1994, Cap. VI; y Smulovitz, 1995, 74-87.

⁹⁶ Autonomía de Buenos Aires, Ballotage en la elección presidencial, Consejo de la Magistratura, Ministerio Fiscal, representación senatorial de las minorías provinciales, etc. Ver Waisman, 1987 y 1996; Bielsa y Graña, 1996, cap.IV; y Senese, 1996.

⁹⁷ impuesta en 1949 y derogada en 1957.

⁹⁸ ver Kvaternik (1996).

⁹⁹ Convención Nacional Constituyente, 1994, I, p.973. Para el político y pensador Oriental Juan Carlos Gómez, los pactos eran "...el anonadamiento del régimen representativo, la sustitución de la soberanía del pueblo por un conciliábulo, en que un número mas o menos escaso de individuos se suplanta a la mayoría y a la minoría, para imponer a ambas la ley de un convenio entre ellas" (Juan Carlos Gómez, *El Nacional* (Montevideo), 1-IX-1857, 4a. época, n.1168, p.2, col.4-5; citado en Vidaurreta de Tjarks, 1962-67, 151).

¹⁰⁰ Convención Nacional Constituyente, 1994, I, p.908. En la nómina de golpes mencionados, Quiroga Lavié no incluye el golpe o revolución contra Perón de 1955. Para los Convencionales Alberto García Lema y Augusto Alasino a los Pactos preexistentes mencionados en la Constitución de 1853 y al Pacto de San José de Flores, practicado en 1859, se deben agregar "...el celebrado por Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen en la segunda década de este siglo", cuyos testimonios escritos obrarían en el Archivo de Ramón J. Cárcano, y el celebrado entre Juan Perón y Ricardo Balbín en 1972 (Convención Nacional Constituyente, 1994, I, pp.633 y 978).

¹⁰¹ Alfonsín, 1996, 292-293. Extrañamente no menciona las apreciaciones críticas acerca de su conducta política al frente de la Unión Cívica Radical, formuladas por el Senador Nacional Conrado Storani en un libro de su autoría (1990).

¹⁰² Mandel, 1978, 130-132; y 1986, 25; y Prelooker, 1996, 80-86.

¹⁰³ ver la institución de la Concordia entablada entre las facciones integrantes de los Cabildos coloniales. Para la naturaleza pactista del poder que padecía el pensamiento político Rosista, ver Ternavasio, 1995. Para una noción crítica de la naturaleza de los pactos políticos, ver Hagopian, 1990; y Remmer, 1991.

¹⁰⁴ ver para ello la copiosa obra de Osvaldo Bayer.

¹⁰⁵ ver Barbosa, 1988.

¹⁰⁶ que se ha visto facilitada por el control ejercido sobre el Ministerio Público (Fiscales) y la remoción de la Procuraduría General de la Nación y del Tribunal de Cuentas. Sobre el narcoterrorismo, ver Griffith, 1994. Sobre la construcción periodística del golpe de Estado de 1976, ver Díaz, 2002.

¹⁰⁷ ver Pasquini y De Miguel, 1995; Mason, 1995; Rial, 1995; Thwaites Rey, 1996; y Levine, 1996.

¹⁰⁸ sobre el Santiagueñazo, ver Zurita (1994) y Dargoltz (1994).

¹⁰⁹ Para esta eventualidad, ver O'Donnell, 1993. La periodización de la historia Americana y Argentina en siete olas progresivas y seis contraolas regresivas, desplegadas entre la Conquista y la actualidad, nos ha permitido calcular para la Argentina post-independentista el promedio de duración de las olas y contraolas en un lapso de veinte (20) años. Esta cifra, aunque un promedio, revela que a la sexta ola democrática le restarían, a partir de 1996, sólo siete (7) años de vida.

Conclusion del Tomo-VI

Los ciclos ideológicos y culturales y las olas y contraolas políticas no han mantenido una correlación directa o positiva con los ciclos económicos. Entre ellos hubo notorios desfasajes, producto de sus diversos grados de inercia o atraso relativo. El comienzo de la fase mundial de estancamiento y crisis de la tercer onda larga de Kondratiev (1914/20-1940/45) vino a correlacionarse negativamente con la nueva ola progresiva (1912-1930). Por otro lado, durante el período de gestación de la Modernidad, ni el Acuerdo Roca-Mitre (1891) disuadió las revoluciones Radicales de 1893 y 1905 ni apartó del suicidio a Leandro Alem; ni el Acuerdo Sáenz Peña-Yrigoyen (1910), obstruyó el crecimiento del anarco-sindicalismo (Semana Trágica y huelgas Patagónicas), las revueltas Lencinistas y Cantonistas en Mendoza y San Juan y el golpe de Uriburu en 1930.¹ Mas aun, mientras el final de la fase mundial de estancamiento y crisis de la tercer onda larga de Kondratiev (1914/20-1940/45) vino a correlacionarse positivamente con la quinta contraola regresiva (1930-1955) y con un sexto ciclo ideológico de inspiración nacionalista, iniciado en 1930 y culminado en 1955; la primer parte de dicha fase de crecimiento (1945-1955) no se correlacionó positivamente con la última etapa de la quinta contraola regresiva (1945-1955).

No obstante las opiniones acerca de los supuestos beneficios de las estrategias conciliatorias (pactos o acuerdos), que dieron lugar a reformas constitucionales y legislativas (electorales y reglamentarias de las incompatibilidades republicanas) concluimos que la política Acuerdista, de naturaleza elitista, se compadece con las tradiciones del Antiguo Régimen colonial y de la dictadura Rosista.² Por otro lado, durante el período de gestación de la Modernidad, los pactos o acuerdos políticos no fueron en general funcionales para controlar las incertidumbres políticas y afianzar la institucionalidad. El hipotético Acuerdo Mitre-Urquiza (1862) no impidió las rebeliones del Chacho Peñaloza y de Felipe Varela; ni el Acuerdo Roca-Mitre (1891) disuadió las revoluciones Radicales de 1893 y 1905 ni apartó del suicidio a Leandro Alem; ni el Acuerdo Sáenz Peña-Yrigoyen (1910), obstruyó el crecimiento del anarco-sindicalismo (Semana Trágica y huelgas Patagónicas), las revueltas Lencinistas y Cantonistas en Mendoza y San Juan y el golpe de Uriburu en 1930;³ ni el levantamiento de la abstención electoral, por parte de Alvear en 1935, evitó el fraude electoral, los crímenes políticos, los suicidios de Lisandro de la Torre y Leopoldo Lugones, el crimen de Bordabehere, y el golpe de 1943.

Tampoco el Pacto Perón-Frondizi (1958) desbarató el golpe de 1962; ni el Acuerdo Perón-Balbín (1972) impidió el acceso al poder de la extrema derecha Lopezreguista y la recaída en un golpe autoritario-terrorista (golpe de Videla de 1976); ni el Pacto de Semana Santa (Punto Final y Obediencia Debida) neutralizó o desmovilizó a las fuerzas militares golpistas; ni el Pacto Menem-Alfonsín o Pacto de Olivos (1994) ha obstaculizado la creciente corrupción de la sociedad civil y de la esfera pública,⁴ el fortalecimiento del presidencialismo, la abdicación por parte del estado del monopolio de la violencia (privatización de la seguridad), el nepotismo, el amiguismo, la connivencia con el narcotráfico y el narcolavado internacional,⁵ las insurrecciones regionales,⁶ una potencial insurrección popular y la eventual recaída en una nueva contraola regresiva.⁷ Queda entonces en manos de las fuerzas progresistas frenar esta crisis e impedir -- mediante fuertes políticas moralizantes y reformistas-- que la crisis democrática se transforme en caída.

Notas

¹ ver Barbosa, 1988.

² ver la institución de la Concordia entablada entre las facciones integrantes de los Cabildos coloniales. Para la naturaleza pactista del poder que padecía el pensamiento político Rosista, ver Ternavasio, 1995. Para una noción crítica de la naturaleza de los pactos políticos, ver Hagopian, 1990; Remmer, 1991; y Carrizo, 1997.

³ ver Barbosa, 1988.

⁴ que se ha visto facilitada por el control ejercido sobre el Ministerio Público (Fiscales) y la remoción de la Procuraduría General de la Nación y del Tribunal de Cuentas. Sobre el narcoterrorismo, ver Griffith, 1994.

⁵ ver Pasquini y De Miguel, 1995; Mason, 1995; Rial, 1995; Thwaites Rey, 1996; y Levine, 1996.

⁶ sobre el Santiagueñazo, ver Zurita (1994) y Dargoltz (1994).

⁷ Para esta eventualidad, ver O'Donnell, 1993. La periodización de la historia Americana y Argentina en siete olas progresivas y seis contraolas regresivas, desplegadas entre la Conquista y la actualidad, nos ha permitido calcular para la Argentina post-independentista el promedio de duración de las olas y contraolas en un lapso de veinte (20) años. Esta cifra, aunque un promedio, revela que a la sexta ola democrática le restarían, a partir de 1996, sólo siete (7) años de vida.